

**Perú ••• Palestina •••
Virginidad y machismo**

cuadernos de

ruedo ibérico

30

abril
mayo
1971



Ayuntamiento de Madrid



c u a d e r n o s d e

Revista bimestral

Redactores-jefe

RAMON BULNES

JOSE MARTINEZ

JORGE SEMPRUN

ruedo ibérico

Directeur Gérant de la publication :
FRANÇOIS MASPERO

© Editions Ruedo ibérico

Tous droits de reproduction et de traduction
réservés pour tous pays.

Administration, diffusion et ventes :

6, rue de Latran, Paris 5.

Téléphone : 325-56-49

C. C. P. Paris 16.586-34

Imprimé par A. Cary, Colombes (Hauts-de-Seine)

número

30

abril-mayo 1971

sumario

Pumaruna-Lets : Perú : ¿ Revolución socialista
o caricatura de revolución ?

3

Roberto Mesa : Ponencia presentada al Second Inter-
national Symposium on Palestine : La resistencia
palestina y los movimientos de liberación nacional

41

Verena Martínez Alier : Virginidad y machismo : el
honor de la mujer en Cuba en el siglo XIX

51

54

HEMEROTECA

Cartón núm.

Tomos 16 ¿Tiene modelo?

Preparador. H. Montuanga

Observaciones:

ABRIL - DICIEMBRE

ENERO - MAYO

1972

Pedidos y sous

6, rue de Latran, Paris 5

Precio de venta : cuaderno ordina
24) : 150 F.

Condiciones de suscripción :

Francia

América (correo ordinario)

América (correo aéreo)

Otros países (correo ordinario)

6 cuadernos
ordinarios

35 F

7 US \$

16 US \$

7 US \$

La suscripción a Cuadernos de Ruedo Ibérico da derecho automáticamente al 20 % de descuento en la compra de libros pertene-
cientes al fondo editorial de Ediciones Ruedo Ibérico o de aquellas editoriales que representamos. Pídase catálogo.

El primer suplemento anual de Cuadernos de Ruedo Ibérico es Horizonte español 1966. Precio : 51 F. El suplemento anual de 1967
es Cuba : una revolución en marcha. Precio : 48 F.

Ayuntamiento de Madrid

1

Biblioteca de cultura socialista

KAROL MODZELEWKI y JACEK KURON
¿ Socialismo o burocracia ?

228 páginas

12 F

LEON TROTSKI

**Literatura y revolución. Otros escritos
sobre la literatura y el arte**

Tomo 1 216 páginas

15 F

Tomo 2 216 páginas

15 F

N. BUJARIN

La economía mundial y el imperialismo

268 páginas

12 F

FERNANDO CLAUDIN

La crisis del movimiento comunista

I. De la Komintern al Kominform

440 páginas

45 F

KARL KAUTSKI: **La cuestión agraria**

544 páginas

39 F

LEON TROTSKI

1905. Resultados y perspectivas

Tomo 1 244 páginas

16,50 F

Tomo 2 224 páginas

16,50 F

ANDRES NIN: **Los problemas de la revolución
española**

238 páginas

21 F

De inmediata publicación

LEON TROTSKI: **Escritos sobre España**

FERNANDO CLAUDIN

La crisis del movimiento comunista

II. Del XX Congreso a la invasión de Checoslovaquia

LEON TROTSKI: **La revolución desfigurada**

LEON TROTSKI: **El gran organizador de derrotas**

Editions Ruedo ibérico

Ayuntamiento de Madrid

Perú : ¿ Revolución socialista o caricatura de revolución ?

Presentación

En Lima, Perú, el 23 de septiembre pasado, al llegar a la Universidad para participar como secretario general del partido Vanguardia Revolucionaria, en un debate sobre la Ley de Industrias contra voceros de la gran burguesía y del régimen, fui interceptado por varios oficiales de la Policía de Seguridad del Estado del Perú. Luego de una pelea, me redujeron, y me condujeron a un avión deportándome esa misma noche con destino a Barranquilla, Colombia.

El 12 de octubre, el gobierno militar dio, por primera vez desde mi deportación, una versión oficial sobre sus causales. Fue el propio presidente Velasco, quien se expresó en los siguientes términos (de acuerdo a un cable de ANSA): « No podrán decir que es por comunista que lo hemos deportado. Hay muchos comunistas en el país. Aquí hay libertad de cultos políticos. Seguramente Letts fue deportado porque se fue más allá, se podría decir que se ha extraviado en la política extrema. Aquí existen comunistas. Nosotros no podemos permitir el anarquismo. Una cosa es ser comunista y otra anarquista. »

Las verdaderas razones de mi deportación se comprenderán mejor leyendo este ensayo, porque en él explico lo que sostenía públicamente, con creciente frecuencia, ante auditorios obreros y estudiantiles cada vez más nutridos, más fervorosos y más combativos. No es, ciertamente, por anarquista por lo que

he sido deportado, sino por ser consecuentemente marxista-leninista. Nuestras ideas políticas, explicadas con sencillez y con modestia a las masas explotadas y oprimidas del Perú, eran recogidas por éstas, se fundían con el pueblo; y la ideología revolucionaria, cuando se funde con el pueblo, es una fuerza invencible, es la arma más poderosa que existe en el mundo.

Para cerrarle el paso a las ideas revolucionarias, para evitar que éstas se fusionen con las masas, en un acto político del más puro contenido reaccionario, el gobierno militar me desterró del país. Esto demuestra dos cosas: que las masas van haciendo suyos nuestros planteamientos, y que los militares les tienen miedo: a éstas, a ellos, a nosotros.

Casi enteramente de memoria, con las dificultades de escribir bajo las difíciles condiciones del primer mes de destierro, mi esfuerzo se ha orientado a producir este ensayo como un aporte, que espero, permita una mejor comprensión del proceso político que vive el Perú. Se trata, evidentemente, de un resumen general y esquemático, espero que no por ello menos útil.

Para la represión hace un tiempo que Américo Pumaruna y Ricardo Letts son la misma persona; seánlo también para quienes lean este ensayo.

Pumaruna-Letts, México

1 de noviembre de 1970

1. Antecedentes políticos recientes

En 1945, un tímido abogado arequipeño de mentalidad reformista-burguesa, José Luis Bustamante, ganó las elecciones nacionales basado en el apoyo del Apra. El Apra ganó una mayoría parlamentaria encabezando un Frente Democrático. Entre los diputados elegidos con la mayoría aprista se encontraba Fernando Belaúnde Terry.

Entre 1945 y 1948 el Apra se fortaleció muchísimo desde la posición de poder lograda por el triunfo electoral. Mientras que desarrollaba una dura oposición parlamentaria, el Apra conspiraba activamente, sobre todo organizando y comprometiendo a los oficiales y clases de las Fuerzas armadas que simpatizaban con las ideas reformistas que éste propugnaba. El movimiento sindical obrero se fortaleció y se extendió bajo la influencia aprista. El Apra, legal, mayoritario y en la oposición, era el único verdadero partido de la época.

Las pocas reformas introducidas, tales como el control de cambios para la moneda extranjera, la ley de yanaconaje que protegía al pequeño campesino, o el control de precios de los artículos de primera necesidad, exasperaban a la gran burguesía exportadora, principalmente algodóneros y azucareros; pero especialmente la presencia desbordante de un partido de masas y sus combativas bases populares, les resultaba insoportable. El 3 de octubre de 1948, ciertos sectores del Apra, en coordinación con los oficiales y marinos de la Armada en El Callao y otros organismos militares, se alzaron en armas contra el régimen. Era éste el segundo gran intento aprista de tomar el poder por la violencia. (El primero fue en Trujillo en 1932 y costó al pueblo miles de vidas.) Pero esta rebelión aprista fue también la expresión de las vacilaciones e incertidumbres, dobleces y dualidades en que se debaten las direcciones pequeño-burguesas: hubieron órdenes y contraórdenes, y la rebelión fue prontamente sofocada. El Apra como partido no estaba (no estuvo nunca) ni ideológica, ni orgánicamente templado para la lucha.

Era el fin del reformismo burgués de la hora. Bustamante había mostrado rápidamente sus límites. Los intentos apristas por rebasarlo habían entrado en contradicción con sus propias limitaciones. Pero el orden había sido subvertido y el « principio de autoridad » se encontraba amenazado. Unas semanas más tarde, el 27 de octubre de 1948, la burguesía exportadora financiaba su propia rebelión militar contra Bustamante. El general Manuel Odría fue traído desde Arequipa para que encabezara una junta militar cuyo objetivo era « la restauración »: anular las medidas reformistas, sofocar el movimiento obrero aprista y comunista y destruir los partidos de oposición.

Odría gobernó a la cabeza de una junta militar hasta 1950. Organizó luego unas elecciones nacionales donde él fue el único candidato (encarceló a su opositor), y dirigió el gobierno del Estado burgués peruano durante seis años más: su « periodo constitucional ». Durante esta etapa persiguió y desterró a los principales dirigentes apristas, asesinó a sus líderes obreros y apresó también a los pocos cuadros del Partido Comunista que le hacían resistencia. Su política económica consistió en favorecer la tradicional economía de exportación minera y agrícola en manos del imperialismo, principalmente norteamericano y de la gran burguesía intermediaria. La guerra de Corea permitió durante varios años excelentes precios para las materias primas. El régimen se benefició y hubo un crecimiento que permitió la gestación de nuevas capas burguesas medias y pequeño burguesas, intelectuales y profesionales, capas medias que al final de la etapa van a dar nacimiento a tres nuevas corrientes partidarias reformistas: Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Social Progresismo, este último de corte más radical.

En 1956 ganó las elecciones Manuel Prado, representante de la gran burguesía y el imperialismo y de los sectores más conservadores y tradicionales del país. Ganó también con apoyo mayoritario aprista que de esta forma recobró su legalidad perdida durante la dictadura de Odría.

El Apra pudo haber apoyado a Belaúnde, reformista burgués como lo habían sido ellos originalmente, pero no lo hizo por considerar que las fuerzas conservadoras podrían no dejarlo subir, o traerlo abajo como a Bustamante. Era, evidentemente, un juego táctico que violaba los principios más elementales, pero sí había justificación para el temor aprista, las Fuerzas armadas, a orden del conservadurismo en verdad no sólo habían traído abajo a Bustamante, habían gobernado luego dos años como junta y luego seis más con Odría. A Prado también lo trajeron abajo y finalmente a Belaúnde en 1968 para dar pase al actual gobierno militar. Es decir que, desde la terminación de la segunda guerra mundial, las Fuerzas armadas peruanas han venido siendo —han sido siempre— un factor decisivo de la política del país.

Durante la época de Prado se fortalece un movimiento sindical propatrimonial bajo dirección aprista. Se constituye la Central de Trabajadores del Perú [CTP], que pasa a ser el organismo oficial representativo de los trabajadores y un formidable instrumento de la patronal para sofocar al movimiento obrero de intenciones clasistas. Pero las «libertades democráticas» reinstauradas por Prado permiten también al Partido Comunista [PC] aprovechar la etapa para reorganizarse y crecer. El trotskismo, llegado al Perú a comienzos de la década de 1950, también crece y se divide a los vaivenes de la corriente trotsquista mundial.

En 1959, producto de la baja de los precios de los principales productos mineros y agrícolas de exportación, se desarrolla una crisis económica. Pedro Beltrán, principal representante del imperialismo yanqui en dicha época, es llamado a ocupar el cargo de primer ministro. Su primer acto es el alza de precios de los combustibles, cumpliendo así con la condición impuesta por la International Petroleum Company (IPC), subsidiaria peruana de la Standard Oil de Rockefeller, principal productor, refinador y distribuidor del petróleo en el Perú, para seguir prestando dinero al gobierno peruano para que éste pueda hacer frente a sus déficits estacionales de caja. Las medidas dan origen a un profundo mal-estar popular y a movilizaciones sociales y

políticas. El Partido Comunista logra ponerse a la base de un movimiento para la recuperación del petróleo cuya conducción entrega a los sectores radical-burgueses. Es la época del triunfo de la Revolución cubana y su gigantesca repercusión entre las masas populares y particularmente entre los sectores radicalizados de la pequeña burguesía. Todos estos factores sumados van preparando las condiciones de coyuntura del año 1962.

1962 era año de elecciones, la prédica de los partidos burgueses por la reforma agraria, y la propia actividad de base de algunos partidos marxistas entró el movimiento campesino dio lugar a una combativa movilización y lucha por la tierra. En el centro y en el sur del país el movimiento campesino llegó a su climax, y fue duramente reprimido. En mayo de 1962, se produce el primer brote foquista en el Perú (Vallejos en Jauja), que es inmediatamente desbaratado. Durante el primer semestre son las masacres de campesinos en las haciendas de la Cerro de Pasco en el centro del país. En la misma etapa el FIR (sección peruana de una de las tendencias trotskistas internacionales) pasa a la acción armada en la ciudad y desarrolla en el sur importantes movilizaciones campesinas encabezadas por Hugo Blanco. En estas condiciones se realizan en junio las elecciones.

El Apra, que es ya en esta etapa abiertamente un partido de orden, proyanqui y propatrimonial, gana las elecciones con Haya de la Torre como candidato. Belaúnde entró segundo y clamó fraude. La Democracia Cristiana, el Frente de Liberación Nacional (FLN, sostenido por el PC), el Movimiento Social Progresista y el Partido Socialista del Perú, participaron también con candidato propio cada uno y recibieron una ínfima votación más o menos en ese orden decreciente. Las Fuerzas armadas, que estaban atentas al malestar social y a las movilizaciones campesinas y a las acciones armadas que se realizaban, consideraron que la subida del Apra sería un factor adicional de inestabilidad y de desorden y procedieron, institucionalmente, a intervenir. El 18 de julio de 1962 depusieron a Prado y constituyeron una junta militar que gobernó un año. Su principal objetivo era

reimplantar el orden para lo cual se procedió a reprimir a la izquierda y el movimiento de masas que ésta dirigía. En el valle de la Convención, en el Cuzco, desbarató el movimiento campesino y produjo la captura de Hugo Blanco quien, en su última fase, había organizado una guerrilla. (La guerrilla fue destruida al ser sorprendida por la Guardia de Asalto en Itma después de haber realizado dos acciones armadas.) En la zona minera del centro reprimió duramente al movimiento sindical de la Cerro de Pasco Corporation. Y, el 5 de enero de 1963, realizó la principal redada política de la historia peruana; en esta acción las Fuerzas armadas tomaron presos a más de mil dirigentes, cuadros medios y activistas de los principales partidos marxistas y de los más combativos sindicatos. El Apra no fue tocada. De esta manera el gobierno militar preparó las condiciones para el triunfo electoral de Acción Popular y Fernando Belaúnde en 1963. Para estas elecciones el Partido Comunista Peruano apoyó la candidatura de Fernando Belaúnde considerándolo un burgués progresista y un genuino representante de la burguesía nacional. Al año siguiente el Partido Comunista, como reflejo de la polémica internacional China-URSS, se dividió en dos organizaciones, una prochina y la otra proURSS.

Al gobierno militar de las Fuerzas armadas instalado en 1962 también le tocó la tarea de desbaratar el intento guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Puerto Maldonado, en mayo de 1963. Finalmente entregó el poder a Belaúnde que presidía una alianza con los Demócratas Cristianos.

El gobierno Belaúnde se inició con un programa reformista burgués, parcialmente copiado al Apra, y con el mismo tipo de consignas centristas: «Ni con Washington ni con Moscú», que en un tiempo enarbolara el Apra. Pero desde el día de su inicio se tuvo que enfrentar a un espontáneo y gigantesco flujo campesino que se manifestó en la forma de incontables ocupaciones de tierras de latifundios en la sierra del país. Belaúnde se vio obligado a optar rápidamente entre el movimiento popular y la reacción, y naturalmente optó por una posición francamente

antipopular y represiva, desbaratando a sangre y fuego el movimiento campesino. De allí en adelante la línea política del gobierno de la alianza AP-DC se torna cada vez más abiertamente gran burguesa y proimperialista. Paralelamente se desarrolla un proceso de conciliación con el Apra y las demás fuerzas reaccionarias en el parlamento. Una vez más se comprobaba la inviabilidad de las líneas centristas, las que, frente al ascenso de masas, se ven ante el dilema de claudicar o ser expulsadas por los poderosos sectores reaccionarios apoyados en las Fuerzas armadas.

Belaúnde, al subir al gobierno, sabía que tenía dos problemas fundamentales que encarar: el del petróleo y el de la tierra. Su acción desde el gobierno estuvo orientada a evadirlos.

La bandera de la «nacionalización del petróleo» en verdad alzada por los comunistas, era en el concepto de los radical-burgueses que dirigían el Frente Nacional de Defensa del Petróleo, un acto de soberanía constitucional burgués limitada a la recuperación de los yacimientos de La Brea y Pariñas, usurpados por la IPC mediante procedimientos manifiestamente dolosos y violatorios incluso de la legalidad burguesa proimperialista. El Congreso, en 1963, anuló el acuerdo internacional que existía desde 1922 y que a juicio de algunos burgueses conservadores como Pedro Beltrán obligaba al Perú y ponía a salvo los derechos de la IPC; mientras que habían sostenido ciertos abogados radicales, como Alfonso Montesinos y Benavides Correa, su nulidad. Con el acuerdo de la nulidad quedó expedito el camino legal burgués para la recuperación del petróleo, pero Belaúnde, declarado proyanqui y empedernido negociador, quebró mil plazos, que obligado por la presión de las masas él mismo se impuso, y no fue sino hasta agosto de 1968 —evidentemente demasiado tarde entonces— cuando simuló hacer efectiva la recuperación. En realidad el acuerdo de Belaúnde con la IPC era perfectamente entreguista puesto que condonaba la inmensa deuda de la IPC que se desprendía del reconocimiento, como peruanos, de los yacimientos de La Brea y Pariñas, que la empresa yanqui explotaba

desde hacía aproximadamente 50 años. El acuerdo dejaba en manos de la IPC la refinación y la red de comercialización y tan sólo tomaba los yacimientos y los pozos. Este resultó ser el último acto político de Belaúnde.

En el campo de la reforma agraria la posición de Belaúnde no fue menos tramposa y entreguista. La ley fue sin embargo aprobada en mayo de 1964, en el curso de su primer año de gobierno. Esta, producto del acuerdo entre todos los sectores políticos burgueses representados en el parlamento, dejaba en pie las grandes haciendas azucareras de la costa y amenazaba con afectar los latifundios serranos sólo previo pago en bonos y después de largo y engorroso trámite. En la práctica la reforma agraria bajo Belaúnde se limitó a efectuar algunas escandalosas operaciones de compra venta de tierras al contado y la expropiación y adjudicación de pequeños lotes a feudatarios en todo el país.

En 1965, Belaúnde encaró los alzamientos guerrilleros del MIR y del ELN y bajo el control directo de las Fuerzas armadas, que desarrollaron una sangrienta y criminal represión, con uso de napalm contra las aldeas campesinas y torturas y asesinatos a sangre fría contra los guerrilleros que caían prisioneros, logró en menos de siete meses (a partir del 9 de junio de 1965) desbaratarlos totalmente. Ya en 1966 no hubo más combates, sólo quedaron muertos y presos y las organizaciones casi demolidas.

La política económica de Belaúnde consistía en: 1) Puertas abiertas a la inversión imperialista, facilitándola particularmente en la industria a partir de la concepción de la CEPAL llamada de «sustitución de importaciones»; 2) Desarrollo de un vasto programa de obras públicas de infraestructura física: carreteras, aeropuertos, puertos y terminales marítimas, entre los que destacaba su proyecto de «carretera marginal» que debía recorrer la selva, por las faldas de las vertientes orientales de los Andes, entre Ecuador y Bolivia; para ello se obtenían gigantescos créditos internacionales; 3) Absoluta libertad de comercio exterior e interior y de movimiento de capitales. Finalmente, sus esperanzas se encontraban cifradas en poder poner en

explotación —con inversiones privadas yanquis— los inmensos yacimientos de cobre que el imperialismo necesitaba desarrollar para abastecer su industria de guerra y muerte, en creciente actividad desde la intensificación de la guerra de agresión en Vietnam a fines de 1964. Con los mayores ingresos de divisas esperaba poder costear los duros pagos de amortizaciones e intereses de la deuda externa. El imperialismo puso, sin embargo, como condición previa a sus inversiones, la solución del problema del petróleo que se había convertido en una fastidiosa campaña anti-yanqui.

En 1967, el descenso de las reservas de moneda extranjera en poder del Banco Central habían llegado a un punto de crisis y la tendencia se mostraba incontrolable. La balanza de pagos peruana había acusado fuertes déficits y la situación económica obligaba como primer paso a la devaluación monetaria.

La gran penetración imperialista, sobre todo en la industria y el comercio pero también en la minería y el petróleo, había, como es forzoso, generado una creciente fuga de capitales por concepto de «recuperación de inversiones», «remisión de utilidades», «regalías», «pagos de patentes», etc. La política de sustitución de importaciones había generado una demanda de insumos importados, lo que mantuvo e incrementó una presión deficitaria sobre la balanza comercial; y por último, el servicio de la deuda externa —que para entonces llegaba a los 850 millones de dólares— estaba representado por más de 100 millones de dólares anuales, para lo cual se venía haciendo necesaria la contratación de nuevos empréstitos a más altas tasas de interés.

Una espiral de este tipo es un callejón sin salida. La crisis estalló en septiembre de 1967 con una devaluación monetaria de más del 40 %. Lo que sobrevino fue una repercusión inmediata en la forma de alza de los precios y un malestar popular muy extendido.

La burguesía exportadora y el imperialismo, así como los corrompidos funcionarios del gobierno, se lucraron groseramente con la devaluación; y del otro lado, el pueblo acusó

el golpe en la forma de una disminución de sus salarios reales.

En 1967 y 1968 el «costo de vida» se encareció en más del 30 %, pero los salarios no tuvieron —en promedio— ni remotamente alzas semejantes. Los gremios más combativos llegaron al 10 % anual.

Entre septiembre de 1967, en que se produce la devaluación, como expresión aparatosa de la crisis económica que se había venido gestando, y agosto de 1968 en que Belaúnde firma el acuerdo sobre el petróleo con la IPC, se desarrolla un año durante el cual el convencimiento del fracaso de este nuevo intento burgués, originalmente reformista, devenido gran burgués y proimperialista, se hace firme entre los sectores más esclarecidos de las masas. La burguesía, claro está, explica el fracaso como la incapacidad de un hombre y un equipo, el fracaso de un partido a lo más; pero los sectores más avanzados llegan a comprender que lo que ha fracasado es —una vez más— el reformismo burgués como programa de gobierno.

El Partido Comunista (proURSS) había logrado aprovechar el último año de crisis para organizar un frente electoral con los radical-burgueses y algunos pequeños grupos políticos de su propia creación. Los efectos de la

crisis económica entre las masas se reflejaron prontamente en la votación que alcanzó el candidato de este frente en una elección parlamentaria, sólo en Lima, a fines de 1967, donde obtuvieron más de 100 000 votos, es decir más del doble de lo que en 1962 habían alcanzado juntos, a nivel nacional, todos los grupos de izquierda participantes. A nivel sindical, en junio de 1968, culminó la aspiración varias veces postergada de organizar la Central General de Trabajadores del Perú [CGTP], que tenía como objetivo convertirse en la central clasista del proletariado peruano y aspiraba a ser la heredera de la que fundara José Carlos Mariátegui 40 años atrás. A la constitución de la central concurren predominantemente dos tendencias políticas enfrentadas, mayoritariamente, el PC (proURSS) y minoritariamente Vanguardia Revolucionaria, partido marxista-leninista fundado en 1965, quedando ambas reflejadas en la composición del Comité Ejecutivo.

El 3 de octubre de 1968, veinte años después del intento militar-aprista de derrocar a Bustamante, y un mes y medio después del acuerdo petrolero entre Belaúnde y la IPC, las Fuerzas armadas peruanas tomaron en sus manos, con gran despliegue de fuerzas, pero sin disparar un tiro, la administración del Estado burgués peruano.

2. Algunos aspectos económicos de la sociedad peruana

El Perú es un país capitalista atrasado, explotado por el imperialismo, principalmente norteamericano. Por ello es atrasado económicamente y semicolonial. El Perú es un país de desarrollo desigual y combinado, donde se integran diferentes modos de producción, entre los cuales predomina marcadamente el capitalista que subordina y usa de los otros. Como país capitalista atrasado y semicolonial, explotado por el imperialismo, el Perú padece de los problemas generales que aquejan a este tipo de sociedades llamadas del «Tercer Mundo» o «subdesarrolladas». El problema principal del país está dado por la explotación del trabajo asalariado

por parte de una burguesía internacional dominante y una burguesía peruana, intermediaria, agente y cómplice. La acumulación de capital producto de esta explotación sirve a los burgueses nacionales y extranjeros, mientras que las grandes mayorías nacionales quedan en la miseria.

El Perú cuenta con aproximadamente 13 millones de habitantes, la mitad de los cuales habitan el campo. Lima, la capital, forma con El Callao, el primer puerto, un conglomerado urbano de aproximadamente 3 millones de habitantes, de los cuales, más o menos, la mitad habita en las «barriadas» que circundan la ciudad, áreas urbanas en su mayoría

sin agua potable, ni luz, ni desagüe. Un fenómeno semejante, en menor escala, ocurre en las principales ciudades del país: Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huanayo, Cuzco.

La población económicamente activa del Perú es de aproximadamente 4,5 millones de personas. Entre éstas, la clase obrera comprende aproximadamente 1,5 millones y el campesinado otro tanto, el resto son empleados y otras capas medias y los sectores burgueses.

La clase obrera peruana, joven y en crecimiento intenso durante los últimos años, se encuentra distribuida aproximadamente así entre los principales sectores económicos:

Obreros del sector agropecuario	600 000
— industrial	200 000
— construcción	100 000
— minería	50 000
— pesca	20 000

El campesinado se encuentra localizado fundamentalmente en la región de la Sierra, en las llamadas «Comunidades indígenas», ocupando pequeñas parcelas minifundiaras, que no alcanzan a proveer recursos suficientes para la manutención de la familia.

El Producto bruto interno [PBI] peruano es de aproximadamente 4 500 millones de dólares, y estuvo creciendo durante los primeros siete años de la última década a un ritmo anual aproximado del 5%. El presupuesto de inversiones y gastos del gobierno es de aproximadamente 1 000 millones de dólares y ha venido creciendo a un ritmo mucho más intenso que el PBI. Toda la última década ha estado marcada por una participación cada vez mayor del Estado dentro de la economía del país.

Las características particulares de los principales sectores económicos son las siguientes:

A. El sector agropecuario. Venía siendo, desde siempre, el sector económico principal, y a comienzos de la década de 1960 aportaba aproximadamente un 20 % del PBI. Su crecimiento durante esta etapa fue casi nulo; ha mostrado signos evidentes de estancamiento. No ha sido capaz de satisfacer las crecientes demandas de productos alimenticios susceptibles de ser producidos en el país, y por lo tanto ha sido necesario aumentar la importación de productos tales como: carne, trigo, arroz, grasas y aceites, etc. El valor de estas importaciones llega aproximadamente a 150 millones de dólares por año.

La estructura agropecuaria, basada en la distribución de la propiedad privada sobre la tierra, muestra una característica fundamental: el régimen latifundio-

minifundio. Esta característica puede ser expresada de la manera siguiente (en cifras redondas, según censo de 1961): 800 000 propietarios poseen 2 700 000 hectáreas de tierra; 10 000 propietarios poseen 13 700 000 hectáreas de tierra; es decir que: 99 % del número de propietarios poseen 17 % del área de fundos; 1 % del número de propietarios posee 83 % del área de fundos.

Existen en el Perú 10 000 fundos con un área mayor de 100 ha, y de éstos, 2 000 con un área superior a las 1 000 ha. Sus dueños constituyen la mediana y gran burguesía agropecuaria del Perú.

Pero aparte de la población campesina reflejada en los 800 000 fundos de menos de 20 ha, existe una gran cantidad de población rural que carece de tierras; de un lado está, naturalmente, el proletariado agrícola que hemos mencionado, del otro un campesinado semiproletario, subocupado o desocupado, que vive en busca de un trabajo y ejerce importantísima presión negativa sobre el nivel de salarios.

El régimen de latifundio-minifundio determina una desigualdad en la posesión de la tierra a la que se le suma una desigualdad proporcional en la posesión de los recursos de capital financiero y de medios técnicos para explotarla.

Mientras que en la agricultura de exportación, asentada en las grandes haciendas, las técnicas son eficientes y la productividad alta, en la agricultura destinada al consumo alimenticio interno, las técnicas son atrasadas y la productividad muy baja.

Los principales productos agrícolas en el Perú, por la extensión que ocupa y el valor de la producción, son: maíz, papa, algodón, cebada, caña de azúcar, café y arroz; y lana, producto de la crianza de ovinos en grandes extensiones de pastos naturales en la Sierra.

Los principales productos agropecuarios de exportación son: algodón, azúcar, café, lanas, todos ellos provenientes de las grandes haciendas. En la costa, algodón y azúcar; en la sierra, lanas; y en la selva, café. En conjunto representan un valor de exportación de 150 millones de dólares; de los cuales, algodón y azúcar aproximadamente 60 millones cada uno. La exportación de productos agropecuarios se equipara a la importación y vienen a representar un 20 % del valor total de las exportaciones peruanas.

El sector agropecuario estancado y la desigual distribución de la tierra, causa de profundo malestar campesino, son las características principales al final de la década de 1960.

B. El sector industrial. Creció a un ritmo aproximado del 6,5 % durante la década de 1960, convirtiéndose en el principal sector económico, por su participación relativa en la conformación del PBI. A comienzos de la década esta participación era

del 15%, a mediados igualó al sector agropecuario y a fines llegó al 22% del PBI.

El crecimiento de la industria en esta etapa ha estado basado en la penetración creciente del imperialismo, facilitada e incentivada por la política de «sustitución de importaciones». Puesto que los monopolios imperialistas, principalmente norteamericanos, eran los únicos que contaban con los recursos financieros y tecnológicos necesarios para producir las mercancías que el país antes importaba, justamente de estos mismos países imperialistas, han sido estos monopolios los que se han establecido en el país, produciendo una falsa industrialización que no ha venido a significar sino mayor dependencia del exterior, concretamente de los monopolios imperialistas.

Las ramas industriales que crecieron a mayor ritmo fueron precisamente las que estuvieron «favorecidas» por esta política: la industria metalúrgica y química farmacéutica. El ensamble de vehículos motorizados y de artefactos domésticos: cocinas, refrigeradoras, televisores, radios, lavadoras, etc., sobre la base de la importación de las piezas como «insumos industriales» fue la figura que se dio en las ramas metalúrgicas. En la industria farmacéutica el crecimiento se basó en la instalación de plantas para darles forma definitiva a los insumos importados, convirtiendo éstos en pastillas, cápsulas, jarabes, etc., y envasándolos en el Perú.

Lo que se dejó de importar como producto terminado, listo para el mercado, se importaba como insumo industrial; la «sustitución» efectivamente se llevó a cabo pero con evidentes perjuicios para el país y grandes ventajas para los monopolios imperialistas que fueron liberados de derechos y a quienes se otorgó una serie de franquicias. La presión sobre la balanza comercial subsistió y se produjo una presión adicional sobre la balanza de pagos por efecto de la remisión de ganancias por parte de las empresas imperialistas.

El crecimiento de la industria dio lugar al surgimiento de nuevas capas burguesas. Empresarios capitalistas peruanos, socios menores de los capitales imperialistas y toda una gama de funcionarios y técnicos nacionales empleados por las sucursales de las corporaciones y monopolios yanquis. Se trataba de capas burguesas profundamente proimperialistas de quien dependían amplia y profundamente, pero tenían, sin embargo, un rasgo distintivo que las diferenciaba de los otros sectores burgueses: realizaban el íntegro de su plusvalía en el mercado nacional y por lo tanto tenían vivo interés en su fortalecimiento y expansión. Es decir en la ampliación de la capacidad de consumo de la población y en incorporar nuevos sectores de población al consumo.

Las ramas industriales tradicionales: alimenticias

y textiles, no dejaron de crecer y de ser absorbidas por el capital imperialista, pero no fueron los sectores más dinámicos en la etapa.

Así pues las características del sector industrial peruano que nos interesa destacar son las siguientes: 1) de crecimiento relativamente dinámico pasa a ser el principal sector económico; 2) profundamente penetrado y cada vez más dominado por el imperialismo, principalmente yanqui; 3) de influencia negativa sobre la balanza de pagos, por la creciente demanda de insumos importados y por la remisión de ganancias al exterior; 4) da origen a nuevas capas burguesas interesadas en el mercado interno y en la capacidad de consumo de la población; 5) concentrado en Lima-Callao en un 70% y el 30% restante en las principales ciudades del país, ya mencionadas; 6) de gran dispersión obrera. Hay apenas más de 500 establecimientos industriales con más de 100 obreros cada uno.

C. El sector minero. Tiene su importancia fundamental por ser el que aporta más de 50% del valor de las exportaciones peruanas. Es decir, que contribuye con aproximadamente 400 millones de dólares a la provisión de moneda extranjera. Su participación relativa en la composición del PBI es sin embargo pequeña, aproximadamente el 80%.

La minería peruana se encuentra casi íntegramente en manos de los monopolios yanquis. Son tres grandes compañías norteamericanas las que prácticamente controlan toda la producción minera: 1) La Cerro de Pasco Copper Corporation, Incorporated in Delaware, dueña de las principales minas de la región central del país: Morococha, Casapalca, San Cristóbal, Yauricoa, Cerro, Gollarisquizga y Cobriza, grandes productores de plata, plomo, zinc, cobre y también molibdeno, vanadio, antimonio, tungsteno, etc., dueña del complejo metalúrgico de la Oroya y de algunas empresas metalúrgicas que producen piezas de repuesto para la industria minera, y socia de la ASARCO en Toquepala; 2) La American Smelting and Refining Co (ASARCO), que es principal accionista de la Southern Peru Copper Corp. que explota los inmensos yacimientos de cobre de Toquepala, que producen 150 000 toneladas de cobre fino por año, y que posee los yacimientos adyacentes de Cuajone y Quellaveco con inmensas reservas de cobre, y que es dueña de la Northern Peru que explota las minas de Quiruvilca en el norte del país; 3) La Utah Mining and Construction Company, dueña de la Marcona Mining Co, que explota los yacimientos de hierro de Marcona en el sur del país, los que producen cerca de 10 millones de toneladas de concentrados de hierro por año.

Así pues, la producción de cobre con un valor de exportación de 230 millones de dólares por año y la de plata, hierro, plomo, zinc, y otros que en

conjunto hacen unos 180 millones de dólares adicionales, conforman un total aproximado de más de 400 millones de dólares y se encuentran en un 80 a 90 % en manos del imperialismo yanqui.

La burguesía peruana, propietaria de algunas minas —comparativamente pequeñas—, es una burguesía intermediaria que tiene sus intereses puestos en las cotizaciones del mercado de Nueva York y del Metal Exchange de Londres. Y los socios minúsculos, testaferros, empleados, funcionarios y técnicos que trabajan para las compañías yanquis, sectores sociales económicamente privilegiados, constituyen una capa burguesa manifiestamente proyanqui que deriva sus ingresos de la presencia explotadora de los pulpos y sanguijuelas imperialistas.

Cerro de Pasco, Toquepala, Marcona y ahora Cuajone, son los símbolos más evidentes e inequívocos de la aplastante presencia del capital imperialista yanqui que llega al país para robar nuestras riquezas, explotar a nuestro pueblo y humillar a nuestro país en su afán ilimitado de reproducir su capital.

D. El sector pesquero. Tiene importancia económica fundamentalmente en función de una especie marina: la anchoveta, y su transformación en harina con un importantísimo contenido proteico y con un precio en el mercado internacional de 200 dólares la tonelada.

La industria pesquera peruana se ha desarrollado sólo en el curso de los últimos 15 años, pasando de aproximadamente 60 000 toneladas de captura en 1955, a unos 10 millones de toneladas por año al final de la década de 1960. Estos 10 millones de toneladas de anchoveta, son íntegramente procesados en tierra, para convertirse en 2 millones de toneladas de harina y unas 300 000 toneladas de aceite de pescado.

El valor de esta producción, destinada casi 100 % a la exportación, es de aproximadamente 230 millones de dólares. Así, la harina de pescado (y aceite), resulta, junto con el cobre, uno de los dos principales productos de exportación, que, por sí solos, comprenden más del 50 % del valor total de la exportación peruana.

La producción pesquera también comprende, a un nivel mucho menos importante, la pesca de atún que se exporta envasado o congelado y la pesca artesanal para consumo nacional, de —comparativamente— menor importancia.

A fines de la década de 1960 habían 90 fábricas de harina y 1 300 embarcaciones, distribuidas entre los 14 puertos pesqueros, y eran la expresión de una intensa concentración de capitales y de capacidad de producción que se había venido operando en todo el proceso. Veinte grandes consorcios se siguen fusionando año a año bajo la presencia activa del capital imperialista. Este, que no estuvo

presente sino en ínfima proporción al comienzo de la vertiginosa expansión de la industria pesquera, ingresó en ella comprando empresas que estaban por quebrar por falta de capital para crecer. A partir del capital financiero del que disponen han pasado a controlar directamente más del 50 % de la producción del sector.

Incluso los que se llaman y son considerados grandes burgueses peruanos —como Banchemo Rossi, dueño de 7 plantas y las correspondientes flotas, y productor de aproximadamente el 20 % del total de la harina, o Madueño-Elguera, que le sigue en importancia— para poder mantenerse a flote y en crecimiento han adquirido grandes compromisos con la banca italiana y yanqui respectivamente y resultan sujetos a una relación de dependencia manifiesta.

En la pesca se trata también de una burguesía peruana intermediaria, que realiza su plusvalía en el mercado internacional; y de un imperialismo creciente, absorbente y dominante, quienes tienen en sus manos la industria pesquera del país.

En la pesca, más que en otros sectores, la necesidad de crecer para tener éxito económico no sólo está condicionada por la necesidad de una mayor productividad sino también porque la empresa que disponga de la flota más numerosa, mejor distribuida y de mayor capacidad de bodega y las plantas que les correspondan en tierra tendrán las mejores opciones de realizar una mayor captura en el lapso fijado para la temporada de pesca, con la única limitación de una cuota global de 10 millones de toneladas.

Chimbote, Callao, Pisco y Tambo de Mora son los cuatro principales puertos pesqueros, pero entre ellos se destaca marcadamente Chimbote, puerto norteño que concentra a 5 000 pescadores. En Chimbote adicionalmente se encuentra la industria siderúrgica del Estado con 3 000 trabajadores, única empresa de este tipo en el Perú.

He aquí un breve esbozo de la economía peruana, sobre ésta se asientan las respectivas clases sociales. Una gran burguesía dominante, aliada del imperialismo y al servicio de éste. Una mediana burguesía dependiente y subordinada de la gran burguesía y del imperialismo. Una pequeña burguesía propietaria sofocada y en proceso de pauperización constante. Una pequeña burguesía intelectual oprimida, alienada y oportunista. Una clase obrera en expansión, alienada, oprimida y explotada, pobre y mil veces engañada, sujeta a una desocupación creciente. Un campesinado miserable, embrutecido por la opresión, la explotación y la pobreza. Clase obrera y campesinado, sin embargo, en diversas oportunidades han dado muestra de sus inconmensurables recursos combativos y son la base social fundamental y las principales fuerzas motrices del

próximo proceso revolucionario marxista-leninista y socialista, que ya se va gestando en el seno del actual proceso político.

Asumiendo, o pretendiendo asumir, la representación de los sectores oprimidos y explotados, desarrollan su actividad los partidos políticos de izquierda. Apoyando el gobierno militar: el Partido Comunista (proURSS), el POR (trotskista, posadista), y la LSR (trotskista, pablista). Combatiendo al gobierno

militar: el Partido Vanguardia Revolucionaria (VR, marxista-leninista), el MIR (foquista, en ambiguo proceso autocrítico), el FIR (trotskista, de la IV de Mandel, Krivine, etc.), el PC (prochino, Bandera Roja), y el PC (prochino, Patria Roja). Una caracterización amplia y rigurosa de las líneas teóricas y prácticas de cada una de estas corrientes, excede los objetivos de este ensayo.

3. Las posiciones del gobierno militar y quienes lo apoyan

El manifiesto de la «Junta Revolucionaria» constituida el 3 de octubre de 1968, primer documento doctrinario dado a conocer por los militares peruanos dice: «El gobierno revolucionario declara respecto a los tratados que en el orden internacional tiene celebrado el Perú: que se mantendrá fiel a los principios de nuestra tradición occidental y cristiana; y que alentará la inversión extranjera que se sujete a las leyes e intereses nacionales»; después de asegurar que transformarán las estructuras y que restablecerán plenamente el «principio de autoridad». El Estatuto promulgado simultáneamente establece: «Artículo 1.º La Fuerza armada del Perú, recogiendo el anhelo ciudadano y consciente de la impostergable necesidad de poner fin al caos económico, a la inmoralidad administrativa, a la improvisación, al entreguismo respecto a las fuentes de riqueza y a su explotación en beneficio de grupos privilegiados, así como a la pérdida del principio de autoridad y a la incapacidad para realizar las urgentes reformas estructurales que reclaman el bienestar del pueblo peruano y el desarrollo del país, asume la responsabilidad de la dirección del Estado, con el fin de encauzarlo definitivamente hacia el logro de los objetivos nacionales.» Más adelante el mismo estatuto establece como objetivos: transformaciones estructurales, mejoramiento de los niveles de vida, nacionalismo, moralización, restablecer el «principio de autoridad», y unidad y concordia entre todos los peruanos. La «Junta Revolucionaria» quedó formalmente constituida por los Comandantes generales

del Ejército, Marina y Fuerza aérea, los que al pasar al retiro serán sucedidos por el «Oficial general de mayor antigüedad dentro de su respectivo Instituto». Es decir que, institucionalmente y con todas las formalidades del caso, las Fuerzas armadas del Perú habrían tomado en sus manos «la responsabilidad de la dirección del Estado», para desarrollar un programa reformista burgués y de orden. El gobierno Belaúnde se había venido abajo por su entreguismo, su corrupción y su desgaste en el mantenimiento del orden burgués y la explotación capitalista. El acto del golpe de Estado por la Fuerza armada era en realidad un trabajo simple de baja policía: recoger toda esa basura y echarla por el desagüe.

La línea declarada del gobierno militar era la de las reformas estructurales y a ella se habría de abocar —consecuentemente— desde el inicio. Pero la «consecuencia» del gobierno militar consiste en no otra cosa que ser fieles a la clase burguesa y a su ideología. Los militares peruanos surgen, una vez más, en la escena política para hacer un esfuerzo más por asegurar la permanencia de todo lo que le es esencial al capitalismo y no como enterradores de éste (como los ven algunos y se sugieren ellos mismos).

Todos los grandes actos realizados por el gobierno militar reformista burgués de Velasco durante los últimos dos años no hacen sino confirmar esta línea «consecuente». Veremos esto más adelante.

El 3 de octubre de 1970, dos años después del golpe, el presidente Velasco sostuvo en

su discurso que la « Revolución » enfrentaba algunas « dificultades »: la primera, ya resuelta, era obtener el respaldo popular, « la unión definitiva del pueblo y la Fuerza armada » que él consideró consagrada por la concentración popular de esa noche. « Ahora es imperativo crear los mecanismos y las instituciones que hagan posible lograr esa participación popular sobre bases permanentes y constructivas », agregó Velasco más adelante. La segunda dificultad consistía en que la administración pública es conservadora e ineficiente. La tercera es la oposición económica de « los representantes del capitalismo dependiente y tradicional [...] » « Estas personas pretenden arrastrar en su maniobra a los industriales y capitalistas verdaderamente peruanos, con quienes nada tienen en común. El orden económico, que la Revolución está creando, es positivo para obreros y empresarios. No desaparece la propiedad privada; pero, tampoco subsiste el régimen de explotación a que estaban sometidos los trabajadores [...] » « Ni capitalismo ni comunismo. » La cuarta dificultad « es de carácter político » y consiste en que: 1) « Las oligarquías dirigentes de los viejos partidos tradicionales » sabotear, aunque « es cierto que esto cada día tiene menos importancia ». 2) « Las dirigencias de algunos partidos renovadores que existían antes de octubre de 1963, aún vacilan en expresar su apoyo a la Revolución, sin comprender que no es posible seguir manteniendo una actitud pasiva frente a una Revolución que en el fondo se respalda y que está cumpliendo los objetivos que esos partidos siempre dijeron perseguir. » 3) « La reducida acción de pequeños grupos considerados por algunos de « extrema izquierda » representa también un obstáculo menor que debe ser mencionado aquí. » 4) « Finalmente, la Revolución enfrenta el curioso problema de que muchos de quienes la apoyan lo hacen en errada creencia de que ella pueda constituir la antesala de un proceso revolucionario diferente, la transición a otro tipo de revolución que ellos consideran « verdadera ». Tal vez por eso, piensan en la posibilidad de aprovechar esta Revolución para sus propios fines políticos que pueden ser muy respetables, pero que no son los nuestros. Esta es

una Revolución nacionalista y popular, de profunda vocación humanista y libertaria. Estamos construyendo una sociedad que no será capitalista ni comunista. » Al finalizar su intervención el propio Velasco hizo un recuento de los logros de la « Revolución » en apenas dos años: « 1) Hoy, el petróleo es nuestro; 2) El campesino ha empezado a ser dueño de la tierra; 3) El trabajador de las fábricas ya no será un simple asalariado; 4) La nueva legislación minera y la futura explotación estatal del yacimiento de cobre de Michiquillay; 5) Comercialización de minerales y harina de pescado es estatal; 6) Ahora el Perú controla las principales fuentes de crédito con la adquisición por el Estado de los bancos: Popular, Internacional y Continental; 7) Control de cambios que impide ya la indiscriminada fuga al extranjero de la riqueza que se genera en el Perú; 8) Estatuto de la Libertad de prensa y la ley que reorganiza al Poder judicial; 9) Ley de expropiación forzosa de terrenos de expansión urbana; 10) Nueva política educativa, actualmente en debate; 11) Política de efectiva promoción de los Pueblos jóvenes (« barriadas »); 12) La crisis fiscal ha sido definitivamente superada; 13) Pago de la deuda pública. Control de la inflación. Incremento de las reservas de moneda extranjera de 60 a 460 millones de dólares; 14) Defensa de la tesis de las 200 millas de soberanía marítima; 15) Ampliación de las relaciones diplomáticas con numerosos países. »

He aquí suficiente materia por boca del « jefe de la Revolución » para hacer el análisis que nos interesa. No se trata de una selección antojadiza de citas fuera de contexto, sino de textos fundamentales que nos han de servir de guías, como las puntas de una madeja enmarañada, en este intento de desentrañar la situación peruana. El grueso de la madeja será, sin duda, el análisis de la práctica misma.

Es evidente que existe gran confusión, interna e internacional, sobre el proceso que vive el Perú. Está claro que no debe sorprender a nadie que unos reformistas burgueses apoyen a otros, pero el asunto se complica cuando algunas corrientes marxistas adoptan esa misma o una semejante línea.

Frente al proceso político peruano hay, entre quienes respaldan el gobierno militar en verdad tres posiciones: 1) la imperialista gran burguesa, que respalda a regañadientes, tratando de mejorar sus posiciones día a día, pero que, con su tolerancia inicial y con acciones de apoyo cada vez más audaces, evidentemente respalda; 2) la reformista burguesa que es la propia posición del gobierno militar y por supuesto la de los diarios oficialistas *Expreso* y *Extra*; esta posición encuentra eco internacional en corrientes como la que se expresa en el diario *El Día* de la capital mexicana, vocero del sector reformista burgués dentro del PRI (partido oficial de la «Revolución Mexicana», que domina plenamente la política del país); 3) la marxista revisionista cuyos ejemplos más resaltantes están dados en lo interno por el Partido Comunista Peruano, PCP (pro-URSS) y las corrientes trotskistas: posadista y pablista; y en el externo por el Partido Comunista Cubano.

La posición reformista burguesa en el plano nacional es desarrollada más lúcidamente por los editorialistas de *Expreso*, que hoy en día se han convertido también en colaboradores regulares de la agencia oficial cubana de noticias Prensa Latina. Los editorialistas de *Expreso* y *Extra* se hacen eco de las palabras del gobierno y a la vez son quienes aportan los proyectos de discursos a los ministros y generales. Sus posiciones quedan, pues, expresadas en los propios planteamientos de Velasco ya enunciados.

Como ejemplo a nivel internacional tomemos lo sostenido por Jorge Aymaní en una serie de artículos sobre el Perú, publicados en *El Día* a partir del 29 de septiembre de 1970: «Se trata evidentemente de una revolución, pero una revolución *sui generis*, silenciosa, fría, premeditada, que en su praxis remueve las estructuras socioeconómicas de carácter semifeudal; revolución que se abre paso de arriba-abajo, con todas las ventajas e inconvenientes de este heterodoxo proceder [...]» «Salimos del Perú con la imagen de una serie de signos promisorios de un futuro mejor para su pueblo, con el convencimiento de que en los parámetros de dos negaciones —no capitalismo, no comunismo— está en

marcha un proceso revolucionario de corte antifeudal, nacionalista, antimperialista, de apertura democrática y con ingredientes socializantes propios de la época que vivimos.» Es evidentemente la posición de alguien que alguna vez aprendió la «jerga marxista» pero que de allí no pasó, y hoy día, desde posiciones burguesas, sigue haciendo uso de ésta.

En cuanto a la posición marxista revisionista, aunque las corrientes trotskistas mencionadas son más groseras y atrevidas en sus calificaciones, lo que nos interesa enfrentar es la versión del PCP (proURSS) que sostiene oficialmente que ésta es la revolución democrática-burguesa peruana, «antioligárquica, antifeudal y antimperialista» la que está sentando las condiciones previas indispensables para la etapa socialista posterior. Es decir, justamente a la medida de sus exigencias y tal como ellos mismos la venían propiciando, sólo que en la realidad habría resultado que esta «revolución» democrático-burguesa estaría siendo conducida por la burguesía (¡la Fuerza armada!) y no por el Partido Comunista, que marcha a remolque y apenas alcanza a mantenerse presente. Sobre la posición del PC (proURSS) que es sin ninguna duda, el principal agente del reformismo burgués en el seno de la clase obrera, volveremos más adelante.

En cuanto al PC cubano, el 14 de julio de 1969, en ocasión de la inauguración de la zafra de los 10 millones, el propio Fidel Castro hablando en el Central Antonio Guiteras, sostuvo: 1) Que en el Perú se desarrolla un proceso «que ha adoptado algunas medidas que sin vacilaciones se pueden calificar de revolucionarias [...]» y que «para que ese proceso se pueda desarrollar, pueda seguir adelante y pueda triunfar plenamente, dependerá de las medidas, de los medios, de la estrategia y de las concepciones fundamentales que alberguen los que dirigen ese proceso.» 2) Que las relaciones con Cuba «es la medida de hasta qué punto un gobierno desacata o no al imperialismo yanqui [...]» «Porque es el punto que da la medida de la actitud de un gobierno que pretende ser gobierno revolucionario.» En ocasión del discurso en la

celebración del Centenario del nacimiento de Lenin, el 22 de abril de 1970, Fidel, casi un año después de sus primeras afirmaciones, sostuvo, refiriéndose al Perú: «Tal vez lo que menos esperaban los imperialistas es que de las filas de las Fuerzas armadas surgiera un movimiento que tomara conciencia del subdesarrollo y se impusiera el propósito de llevar adelante un programa de desarrollo del país. Un programa de desarrollo, llevado adelante de manera consecutiva, conduce a una revolución.»

Prensa Latina, por su parte, con mucha menos prudencia y aún menos rigor, ha venido desarrollando una activa campaña de propaganda, más audaz todavía —por provenir de la agencia oficial cubana— que la que tienen en marcha los diarios oficialistas *Expreso* y *Extra*. A fines de 1969, su corresponsal en Lima, Sergio Pineda, difundió su propia lista de lo que eran los logros de la «Revolución peruana», señalando que «en la historia de la década de 1960, América latina recordará a 1969 como el año de la consolidación del gobierno militar del Perú.» Los logros: «1) Rechazó la imposición de las enmiendas Hicklooper y Pelly y forzó a Washington a suspender su aplicación, manteniendo al mismo tiempo su derecho a expropiar a la IPC y su rechazo de los pesqueros piratas de Estados Unidos dentro de sus 200 millas. 2) Fue el primer país que rechazó la entrada a su territorio de Nelson Rockefeller, expulsando luego a las misiones militares de Estados Unidos; 3) Estableció relaciones diplomáticas y comerciales con la mayoría de los países socialistas de Europa. 4) Promulgó una avanzada ley de Reforma agraria, tomando el control inicial de las grandes haciendas azucareras. Promulgó luego un decreto que declara que las aguas son propiedad estatal. Corrigió posteriormente varias fallas de la ley que permitían escapes a los latifundistas. 5) En el mes de octubre el general Velasco viajó al norte del país, obteniendo un abrumador respaldo popular en zonas que eran supuestos bastiones del pronorteamericano Partido Aprista. Hablando en el aniversario de la toma del poder, el general Velasco declara que el deber del gobierno revolucionario no es mantener el

orden jurídico-social heredado de la oligarquía sino reemplazarlo por un nuevo orden revolucionario. 6) Suprimió la administración municipal vigente designando directamente a los alcaldes y concejales. 7) Suscribió con la Southern Perú Corp. un contrato para la inversión de 355 millones de dólares en la explotación del yacimiento de cobre de Cuajone y horas después decreta que el Estado peruano tendrá el monopolio del comercio exterior de minerales y que las nuevas refinerías deberán ser de propiedad del Estado.»

Posteriormente Prensa Latina ha tratado de convertir «cualquier noticia» en un acto positivo y revolucionario del gobierno militar peruano, llegando a límites aparentemente irracionales y sin duda ridículos. Ejemplo de ello lo hay en casi cualquier número del boletín diario que se publicaba en México, hasta mediados de 1970.

He allí los materiales de información (que he podido rápidamente reunir en estos primeros días de mi destierro) con las posiciones de los principales participantes en el frente que apoya activa y ardorosamente el proceso político que conducen los militares peruanos. El análisis de estas afirmaciones a la luz de los hechos concretos que se han desarrollado en el Perú estos últimos dos años es el tema de este ensayo.

Sostenemos nosotros (el partido marxista-leninista Vanguardia Revolucionaria) que el proceso político peruano es reformista burgués; que sirve a los intereses de la burguesía en su conjunto y del sistema capitalista incluido el imperialismo; que el gobierno militar representa los intereses particulares de la llamada burguesía nacional y que por lo tanto la aplicación de su línea política da origen a contradicciones interburguesas, en el desarrollo de las cuales el gobierno militar así como sus contrarios gran burgueses e imperialistas buscan conciliar sus diferencias; que vienen lográndolo y continuarán más aún, por el carácter secundario que tienen éstas, debido al rol estructural e ideológicamente subordinado al imperialismo que tiene la llamada burguesía nacional.

Sostenemos nosotros que al aplicar su política reformista, el gobierno militar —que ha asu-

mido la responsabilidad de dirigir la administración del Estado burgués peruano—efectivamente choca contra los intereses tradicionales gran burgueses e imperialistas, pero no es objetivo del gobierno militar, ni está en su intención, destruir estas fuerzas económicas, ni, ciertamente, ocurre así en la práctica. El objetivo declarado del gobierno es conseguir que sirvan mejor al proceso de desarrollo económico nacional en beneficio de todos los peruanos, para lo cual proceden a reformarlas y reordenarlas.

Por tanto la tarea principal que nos hemos impuesto es la de desenmascarar el carácter de clase, burgués y enemigo del gobierno militar, y mostrar, teórica y prácticamente, su verdadera cara. Esperamos de esta manera ir armando ideológica y orgánicamente a la clase obrera y demás sectores oprimidos de la población, llevándolos a combatir, independientemente, por sus propios intereses de clase.

Nuestras discrepancias con los reformistas burgueses se refieren directamente al modelo general de sociedad que pretenden construir—o mantener en vigencia en realidad—y a su posibilidad de aportar bienestar a la clase obrera y demás capas oprimidas de la población.

Las discrepancias generales con el PCP (pro-URSS) o con el PC cubano se dan, en el sentido de si este gobierno militar presenta características que permitan considerarlo «revolucionario» o siquiera «progresista», ya sea por ser conductores de un proceso revolucionario antimperialista y antifeudal o por estar aplicando medidas que nos acercan al socialismo, sentando sus bases digamos, o si, por el contrario, como sostenemos nosotros, se trata de un gobierno cuyos esfuerzos se orientan a preservar el sistema capitalista, es decir lo que le es fundamental: la propiedad privada sobre los medios de producción del trabajo asalariado, para lo cual, por supuesto, proceden a reformar el sistema, pero teniendo su línea política, por tanto, un carácter reaccionario.

La discrepancia nos remite, en cierto modo, a la ya casi bizantina discusión sobre el carácter de la sociedad peruana, si feudal o capitalista, o semifeudal (o, se supone tam-

bién, semicapitalista). Puesto que, si se cree, efectivamente, que el Perú es semifeudal y se atribuye a los militares burgueses la condición de estar conduciendo una revolución estaríamos cometiendo un doble error: error de caracterización de la formación social peruana; y error en el rol asignado a la burguesía aun dado el caso de que ésta fuera realmente semifeudal.

Cuando las Fuerzas armadas peruanas sostienen, en el Manifiesto y en el Estatuto, que mantendrán la vigencia de los principios de la civilización occidental y cristiana, que restablecerán el pleno respeto al principio de autoridad y que alentarán las inversiones extranjeras están—evidentemente—diciendo con toda claridad qué tipo de orientación llevan, hacia dónde apuntan. Cuando, por otro lado, combinan esta posición, evidentemente la de la clase burguesa dominante, con la decisión de producir reformas estructurales, el resultado es un proceso político como el que viene desarrollándose en el Perú estos últimos dos años. Es decir, un reformismo burgués de carácter reaccionario y orientado a preservar la sociedad capitalista en todos sus valores fundamentales.

Cuando Fidel sostiene que algunas medidas son indiscutiblemente revolucionarias suponemos que tiene en mente: la recuperación de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas y los embargos subsecuentes, y, fundamentalmente, la Reforma agraria (no se había producido todavía la Ley de industrias en julio de 1969). Pero la pregunta fundamental es: ¿Desde qué posición de clase Fidel considera revolucionarias estas medidas? Siendo Fidel quien habla, debemos suponer que es en nombre de los intereses proletarios; y bien, nosotros sostenemos que, desde un punto de vista proletario, ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno militar peruano puede ser considerada revolucionaria.

Cuando Fidel sostiene que todo el desarrollo del proceso depende de lo que hagan los militares, ciertamente va mucho más allá. Esto significa—claramente—olvidar lo más elemental del materialismo dialéctico. Los propios militares peruanos son, en dos sentidos, producto de la lucha de clases: una, su propia

existencia como oficiales dirigentes de las Fuerzas armadas de un Estado burgués; y, dos, su conciencia, determinada por esta posición y por el desarrollo de la lucha de clases en el país. Es, pues, esta lucha de clases la que ha de determinar la orientación del proceso peruano. Será la posición que adopten a este respecto las organizaciones políticas que aspiran a representar los intereses proletarios, y la corrección y la justicia con que desarrollen su línea, los factores fundamentales. También los militares, dirigentes de las Fuerzas armadas, tienen, por supuesto, como partido armado de la burguesía, un papel importante que desempeñar. Ellos son en la actualidad la expresión más lúcida y eficiente de los intereses burgueses y naturalmente que de su desempeño depende mucho... pero en un sentido muy diferente de aquel señalado por Fidel. Resulta por ello poco menos que sorprendente escuchar al genial conductor del proceso revolucionario cubano que todo depende de los militares. Y las masas, y las vanguardias políticas marxistas-leninistas, y la propia dialéctica del enfrentamiento entre las clases. Todos estos resultan factores que Fidel olvida, desprecia, o quizás sobreentiende.

Fidel, por último, sostiene que las relaciones con Cuba son la medida en que un gobierno es revolucionario. Debemos, naturalmente, suponer que se refiere al contexto latinoamericano; pero, ¿debemos también suponer que está pensando en la etapa 1961-1967? Y aun así es incorrecto hacer pivotar sobre este hecho la caracterización de un gobierno. Salvo que se quiera calificar, por ejemplo, al gobierno de México, represivo, masacrador de campesinos y estudiantes, reaccionario y abiertamente favorable a la penetración imperialista, que sin embargo ha mantenido relaciones ininterrumpidas con el gobierno cubano, como gobierno revolucionario. ¿Qué es la excepción que confirma la regla? En cierto modo, en la etapa 1961-1967, sí, efectivamente, pero después de la etapa de transición 1968-1970, ya no más. En la actualidad Chile, Venezuela, Bolivia, Perú, y luego posiblemente toda la América latina, pasará a tener relaciones con el gobierno cubano. La situación latinoamericana de la década de 1960 no es la

de la actualidad, ni menos la posición cubana. El gobierno cubano se ha convertido en el caso del Perú, por ejemplo, en un soporte del régimen militar reformista-burgués de Velasco. El gobierno cubano es un elemento de orden que sugiere que todo el pueblo se quede a la expectativa de lo que hagan los militares peruanos para saber la suerte que correrá el proceso «revolucionario» que allí se desarrolla.

En más de una ocasión, frente a auditorios obreros y principalmente ante concentraciones estudiantiles, al desarrollar nuestra línea de esclarecimiento sobre el carácter de clase del gobierno militar, aparece un sincero compañero en el auditorio que pregunta: ¿Y por qué ustedes se oponen si el propio Fidel Castro apoya al gobierno? Frente a ello hemos cumplido cada vez con manifestar nuestra posición de solidaridad y defensa de la revolución cubana y el señalamiento de sus méritos y logros, y su importantísima significación para la revolución latinoamericana y mundial, pero de otro lado nunca hemos dejado de señalar nuestra total independencia de criterio y de cómo es posible, y ha ocurrido más de una vez, que el propio Fidel Castro se equivoque en sus apreciaciones políticas. No es infalible, hemos explicado, no hay «papas» en el marxismo-leninismo. Sabemos pues que enfrentamos la dura prueba de la historia, a ella nos sometemos.

4. Análisis de las medidas del régimen

Los quince logros destacados por Velasco al cabo de dos años, pueden en realidad ser agrupados en once temas. No son, sin embargo, en todo coincidentes con los siete señalados por Prensa Latina al cabo del primer año de gobierno. En cuatro puntos coinciden: Petróleo, Reforma agraria, Minería y Relaciones diplomáticas. De éstos, tomamos los tres primeros para analizarlos ampliamente, junto con la Ley de industrias, como las principales reformas estructurales realizadas por el gobierno.

Prensa Latina adicionalmente destaca: la postura frente a Rockefeller, y la expulsión de las

misiones militares (posteriormente readmitidas sin que, por supuesto, Prensa Latina ni nadie salvo un artículo de la revista *Causa ML* en Chile haya dicho palabra del asunto); las concentraciones populares realizadas en el norte después de los decretos de intervención de las haciendas azucareras, asunto analizaremos bajo el título ya mencionado de la Reforma agraria; y la «supresión de la administración municipal vigente» que en realidad fue un no convocar a nuevas elecciones municipales y nombrar a dedo a los alcaldes y concejales. Esta medida no es ningún adelanto sobre la situación existente ya que el ministro del Interior no ha hecho sino reforzar la posición de los caciques y notables de cada localidad basándose en informes de prefectos y gobernadores y jefes de policía para escoger candidatos en función de su posición antiaprista, anticomunista y de chupamedias de los militares, por lo cual es sorprendente que la agencia de noticias cubana destaque esto como un «logro» del gobierno peruano.

En cuanto a los otros temas mencionados por Velasco, éstos son: la política bancaria y monetaria; la Ley de Prensa y del Poder judicial; la política de promoción de barriadas y de expansión urbana; la política económica fiscal de estabilización; la defensa de las 200 millas marinas; y la Ley de industrias.

Adicionalmente habría que mencionar la firma del Pacto andino, la Ley universitaria, y la Masacre de Ayacucho y Huanta, como actos importantes del gobierno aunque por cierto difícilmente puedan ser destacados como «logros». El contrato de Cuajone, entreguista y proimperialista en alto grado es sin embargo mencionado por Prensa Latina. Lo examinaremos bajo el tema minero ya señalado.

Es decir que como medidas centrales examinaremos las cuatro ya mencionadas y la política bancaria y monetaria, y primeramente revisaremos brevemente las demás medidas. La *Ley universitaria*, que el gobierno promulgó en febrero de 1969, y que el movimiento estudiantil correctamente calificó de «gorila» es un importante instrumento de la política de dominación imperialista y gran burguesa. Su objetivo es producir profesionales y técnicos a la medida de las necesidades de las corpo-

raciones y monopolios yanquis. Adicionalmente la ley tiene una definida orientación represiva destinada a quebrar el movimiento estudiantil inspirado de ideas izquierdistas. Se cancelaba la participación estudiantil en la gestión de la universidad, se declaraban ilegales las tradicionales organizaciones representativas de los estudiantes y se decretó el fin de la gratuidad de la enseñanza no sólo a nivel universitario sino a todos los niveles de enseñanza. En cuanto a la organización de la instrucción se decretó el «departamentalismo» orientando al estudiante a una especialización hasta la compartimentación de conocimientos.

Los estudiantes universitarios y sus vanguardias estudiantiles revolucionarias han desarrollado numerosas jornadas de lucha por la derogación de la ley y en contra de las autoridades que la aplican, han alcanzado algunos éxitos parciales, pero, en general, han sido derrotados por esta etapa. La explicación es doble; de un lado la dirección del movimiento estudiantil, incluyendo a nuestros propios organismos partidarios, ha venido adoleciendo de empirismo y de allí pragmatismo y sectarismo, y de otro lado, sus combates han sido expresiones aisladas, solitarias y desarticuladas de una lucha que debe darse al calor del auge del movimiento obrero, el que ha permanecido confundido por el reformismo burgués y el revisionismo y que sólo con grandes esfuerzos comienza a despertar.

La lucha por la gratuidad de la enseñanza, sin embargo, tuvo su más alta expresión en los heroicos combates que dio el pueblo en Ayacucho y Huanta, en pleno centro del campesinado serrano, donde se movilizaron grandes masas en gloriosas jornadas durante el mes de junio de 1969. Con el doloroso costo de más de 40 muertos, el pueblo obligó al gobierno militar a restituir la gratuidad de la enseñanza para los estudiantes primarios y secundarios de todo el país, y pocos días más tarde se decretó la Ley de Reforma agraria. Tanto el PCP (Bandera roja, prochino) en destacado lugar, como el Partido Vanguardia Revolucionaria, tuvieron activa participación en la movilización del pueblo durante estas luchas, y es con orgullo que lo mencionamos, a la vez que rendimos homenaje a las dece-

nas de mártires que cayeron abatidos por la metralla asesina de las Fuerzas armadas.

El *Pacto andino*, suscrito por el gobierno militar en mayo de 1969 y ratificado en octubre del mismo año, es expresión de la línea proimperialista que desarrolla el gobierno peruano. Amplia crítica de esta medida hemos efectuado en el número 6 de la *Revista Vanguardia Revolucionaria* (Pumaruna: «El Pacto andino, instrumento de dominación imperialista»). Resumimos aquí nuestra posición en los siguientes términos: 1) El desarrollo de un mercado regional como resultado de la suma de los consumidores de cada uno de los países participantes es una forma de ampliación de los alcances limitados de los mercados de los respectivos países sin tener que acudir a procesos internos de aumento de la capacidad de consumo de las masas, con una redistribución del ingreso, por ejemplo; 2) Establecidas las liberaciones aduaneras para las empresas asentadas en estos países (y elevado el volumen total de población de los niveles nacionales al nivel regional de 55 millones de habitantes), está claro que serán las empresas que dispongan de recursos financieros como para desarrollar una economía de escala, las únicas que podrán entrar a competir en este nivel regional «abierto a todos»; 3) Sólo el imperialismo norteamericano está en condiciones de un aprovechamiento inmediato y masivo de las oportunidades que ofrece el Tratado de Integración Sub-Regional Andino, y al amparo de sus disposiciones, instalará pocas, pero gigantescas plantas de muy alta eficacia y productividad, por rama industrial, para toda la región, y distribuirá su ubicación según las condiciones de favor y sometimiento a que se avengan los respectivos gobiernos, todos ellos encantados de recibir los «beneficios» de nuevas inversiones imperialistas.

El gobierno militar peruano no ha adoptado ninguna medida que pueda significar entorpecimientos del Pacto andino, por el contrario, sus acciones no hacen sino favorecer su desarrollo, creándole a los Estados Unidos un atractivo campo de inversión —caso de la Ley de industrias— como veremos más adelante.

La política económica fiscal de estabilización,

la defensa de las 200 millas de soberanía marítima, la política de expansión urbana y promoción de barriadas, etc., son todas medidas de marcado corte burgués, y por lo demás de segunda importancia, que no pueden ser comentadas como «logros» sino en contraste con gobiernos anteriores que hicieron menos o que tuvieron menor éxito. Ninguna de estas medidas implica reformas estructurales ni se orienta a transformar el sistema.

El haber detenido la inflación causada por la devaluación monetaria de 1967 es simplemente resultado de haber mantenido vigentes las medidas ya adoptadas por los últimos gabinetes del anterior régimen. La deflación producida, sin embargo, ha creado un más grande problema de desocupación, el cual, aunque antiguo mal de toda economía capitalista y más aún de las sociedades capitalistas atrasadas, se ha hecho más grave con cada mes de «logro» en cuanto a la estabilidad monetaria fiscal.

La tan mentada defensa de las 200 millas de soberanía marítima, y la captura de barcos pesqueros yanquis por pescar sin licencia dentro de estos límites, no tienen como objetivo impedir la penetración imperialista en nuestros mares sino «hacer que se sujete a nuestras leyes». (Recordemos que en el tiempo del conservador Odría se capturó a toda la flota de Onassis.) El objetivo es conseguir que se registren en puerto peruano, paguen los 50 dólares de licencia y los derechos aduaneros por tonelaje de captura, con que gravan a cualquier empresario peruano o extranjero que realiza exportación de pescado al extranjero. Los propios expertos de AID (en un documento presentado a una reunión sobre el Perú en la Adlai Stevenson Foundation de Chicago, USA), han recomendado a los empresarios yanquis para el bien de sus negocios que registren sus barcos en puerto peruano y se avengan a tan benévola legislación tributaria.

La política de expansión urbana y promoción de barriadas ha sido también tema de todos los gobiernos anteriores los que en intentos paternalistas y populistas, buscan ganar el favor de las masas desposeídas con algunas obras de infraestructura.

En general para no seguir ocupando tiempo y espacio en estos problemas menores podemos decir que a este gobierno militar le reconocemos sin vacilación ni duda de ninguna clase el estar preñado de un espíritu capitalista emprendedor, más moderno y más técnico que cualquiera de los gobiernos anteriores; y una concepción más avanzada y una utilización más efectiva de las herramientas de que dispone el Estado burgués para favorecer a la clase dominante y preservarla en este rol. Nada de ello tiene —por supuesto— carácter revolucionario ni tiene por qué producir ni entusiasmo ni expectativas entre los sectores de la clase obrera y demás capas oprimidas de la población, salvo por efecto del confusionismo y alienación.

Nuestros esfuerzos en este ensayo, y en la tarea militante en el Perú, se orientan precisamente a mostrar el carácter reformista-burgués, y no revolucionario del gobierno militar. No discutimos, por tanto, las medidas ya calificadas como reformista-burguesas, sino en todo caso el papel que juegan en nuestra lucha por alcanzar el poder y terminar con la explotación.

El reformismo-burgués ha sido demostrado «hasta la náusea» (la expresión es del compañero Collar en un artículo publicado en un número reciente de la revista cubana *Pensamiento Crítico*), como un engaño de los pueblos del que se sirven las clases dominantes y el imperialismo en la América latina.

El propio Carlos Rafael Rodríguez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Cubano, llevó precisamente una advertencia en este sentido a la Conferencia de los Partidos Comunistas en Moscú, en junio de 1969. Este fue uno de los principales puntos respecto de los cuales los compañeros del PC cubano quisieron que en el documento final se fijara una posición más clara y correcta. Sin embargo, apenas un mes más tarde, Fidel definía, el 14 de julio, como medidas «revolucionarias» las que venía adoptando el gobierno militar reformista-burgués de Velasco en el Perú. Es decir, que los cubanos sabían que el reformismo burgués era repudiable pero no sabían reconocerlo cuando aparecía enmascarado como en el caso peruano.

Veamos con detenimiento cuál es el verdadero carácter de estas medidas.

Petróleo

Como hemos explicado, la cuestión del petróleo había sido uno de los problemas fundamentales que Belaúnde debió enfrentar. Este demoró una solución y cuando finalmente lo enfrentó, lo hizo de manera entreguista, ampliamente favorable al imperialismo. El gobierno militar, seis días después del golpe declaró nulo el acuerdo petrolero suscrito por Belaúnde («El Acta de Talara»), e intervino la IPC, ocupando sus instalaciones de Talara (centro petrolífero de la costa norte). La tesis del gobierno militar era la siguiente: puesto que el Laudo de París (el acuerdo internacional del año 1922 que reconocía a la IPC la propiedad del subsuelo), fue siempre nulo, todos los frutos que la IPC ha extraído desde entonces deben ser debidamente contabilizados como deuda, a más de los respectivos impuestos. Esta tesis es justa y había sido compartida por diferentes personalidades políticas, radical-burguesas y marxistas. De ella se desprendía que la IPC adeudaba al Estado Peruano 690 millones de dólares por concepto de impuestos no pagados y frutos percibidos ilegalmente.

Para el gobierno el problema debió consistir entonces en cómo conseguir el cobro de los 690 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno, llamado «revolucionario», que había acusado a Belaúnde de condonar la deuda a la IPC (Belaúnde no se cobró sino lo que valían los pozos y algunas instalaciones secundarias, unos 20 millones de dólares de acuerdo a valorizaciones posteriores), el gobierno no había vacilado en atopellar la constitución y traer abajo al anterior gobierno (que por supuesto también mil veces la había atopellado, con la confabulación de esas mismísimas Fuerzas armadas); ese gobierno, se volvió tímido y conciliador, y dejó funcionando legalmente y con plenos derechos a la compañía «intervenida», mientras su situación era «contemplada» por el poder judicial. En el intermedio las sanguijuelas yanquis, con la complicidad de algunos generales y funcionarios civiles del régimen, lograron sacar

15 millones de dólares adicionales al extranjero. Finalmente, ante una presión de la opinión pública, el 6 de febrero se decretó el embargo de todos los bienes de la IPC, los que, con generosidad, habían sido valorizados en 154 millones de dólares.

Quedaba siempre el problema del pago de la diferencia entre los 690 millones adeudados y los 154 millones descontados por el embargo (aparte de los 15 adicionales robados después de la «intervención»). De esto el gobierno militar, «revolucionario» de las Fuerzas armadas, no habló más. Hay derecho a suponer que éste fue uno de los asuntos negociados con el señor Irwin, delegado directo del presidente yanqui, Richard Nixon, y —por supuesto— cumpliendo misiones vitales para la CIA, por un lado, y para el propio Rockefeller, por el otro. *Es decir, que también el gobierno militar condonó una parte inmensa de la deuda que tenía la IPC con el Estado peruano.*

La IPC no era sino una subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey, que a su vez es propiedad de Rockefeller. Este señor es a su vez propietario, a través de diversas empresas, de cuantiosas operaciones comerciales y prósperas compañías en actividad en el Perú. Entre ellas el Banco Continental, a través del Chase Manhattan Bank. Más adelante veremos que fue así como el gobierno militar compró las acciones del Banco Continental, de Rockefeller, a más de 5 veces su valor produciéndole de esta manera a Rockefeller uno de los más espléndidos negocios de su vida de ladrón y asesino.

Dos cosas nos interesa dejar en claro respecto del asunto del petróleo en el Perú: 1) Que no se trató de una medida antimperialista, sino por el contrario beneficiosa al imperialismo; aunque es evidente que produjo fricciones y que tenía «apariencia antimperialista»; 2) Que no se trató de la «nacionalización del petróleo» en el Perú, sino que fue una medida aislada, referida a una sola empresa yanqui, mientras las demás continuaban prosperando; aunque es cierto que fue afectada la más poderosa.

Bien. La IPC era una «oveja negra» en medio de las «blancas» empresas imperialistas en el Perú. Encima de ello con «pies de barro»,

tenía la IPC un oscuro e ilegal pasado, múltiples veces denunciado por conspicuas personalidades burguesas. Las demás empresas yanquis se sentían incómodas con el problema que para el «prestigio» de las inversiones extranjeras significaba la IPC. El asunto está claro y es fácil de comprender. Los yanquis no usan regularmente, *desde el punto de vista burgués*, del atropello y la actividad bandidesca para instalar y desarrollar sus empresas. Por el contrario, se sirven de las leyes y cuando no existen leyes adecuadas, consiguen que los gobiernos las hagan aprobar; por lo demás son meticulosos en toda la formalidad y apariencias del cumplimiento. Estas leyes son, por supuesto, leyes que llevan un profundo contenido de clase y su cumplimiento les representa diversas formas de ganancia, que pueden ser rastreadas todas hasta llegar a la elemental explotación del trabajo humano bajo el capitalismo, el perfectamente legal trabajo asalariado y la apropiación de la plusvalía resultante.

Por ello, lo «grave» en el caso de la IPC era que, a juicio del Estado burgués, tanto bajo el régimen del gobierno de Belaúnde como bajo el gobierno militar, violaba *la Constitución y las leyes burguesas*, y eso les molestaba, incluso, a las empresas yanquis ya establecidas y las que planeaban invertir a corto plazo.

Lo del petróleo se había convertido en un «caballito de batalla» de la izquierda orientada por el revisionismo, y el movimiento por la recuperación tenía arraigo popular. Allí el problema consistía en que —bajo la orientación marxista-revisionista y con la conducción de los radical-burgueses—, la lucha era por el respeto a la ley burguesa y a eso le llamaban «lucha antimperialista». La confusión que estos planteamientos llevaban al pueblo es innegable y por eso podemos calificar, sin vacilación, como radical-burgués, y no como antimperialista a este movimiento.

Producida la recuperación del petróleo, queda en pie toda la inmensa tarea de educar al pueblo en el *antimperialismo marxista-leninista*; pero partiendo no de cero, sino de bajo cero (por la confusión existente) ya que para quienes lucharon contra la IPC «violadora de las leyes» no hay razón para luchar contra

la Belco Petroleum, la Lobitos Oilfields o la Conchán-Chevrón, compañías petroleras imperialistas que —entre otras— siguen operando en el Perú como buenas « ovejas blancas ».

Las propias empresas yanquis que se disponían a invertir en la explotación de los yacimientos de cobre peruanos habían presionado al gobierno de Belaúnde para que resolviera primero el problema de la IPC. Naturalmente que ellas favorecían una solución no perjudicial a la empresa imperialista, pero es que —declarada la nulidad *ipso-jure* del laudo en 1963— esto era ya imposible sin quedar en evidencia como entreguista. Por ello, como hemos dicho, Belaúnde demoró tanto: estaba entre la espada y la pared. Fue necesario que lo empujara un desvergonzado como Manuel Ulloa (su último ministro de Hacienda y en verdad orientador del gobierno durante todo el último año, desde la devaluación), para que se lanzara a producir dicho acuerdo.

El gobierno militar, por su parte, nunca dejó de sostener que el caso de la IPC era único y excepcional y no indicaba una tendencia económica ni política del gobierno; y que las inversiones extranjeras eran bienvenidas y estaban plenamente garantizadas. Parece que, sin embargo, pocos —tanto en la izquierda como en la derecha, tanto dentro como fuera del país— quisieron creerle. Dos años de gobierno han demostrado, no obstante, que no se trataba de un « lobo comeyanquis » sino de un « buen pastor » y que, como tal, lo que quería en su rebaño eran « ovejas blancas ». Lástima que éstas no sean sino verdaderos lobos, ellas sí, aunque cubiertos con piel de oveja... blanca.

En el Perú actualmente la empresa petrolera que se desarrolla con mayor ímpetu es la empresa norteamericana Belco Petroleum que extrae del zócalo continental. Hace como un año se produjo un breve forcejeo con el gobierno, por precios, al momento de renovar un contrato, pero la Belco salió airosa y marcha adelante, rindiendo excelentes utilidades a sus accionistas yanquis. Actualmente produce el 30 % del crudo, contra 57 % del Estado. En verdad el imperialismo yanqui, en el campo petrolero peruano, se desarrolla activamente en exploración, extracción, refi-

nación y distribución. La diferencia está dada por el hecho de que es el Estado —ahora dueño del Complejo petrolero de la IPC— el que controla los mayores volúmenes de producción en cada una de las fases mencionadas.

En el Perú, repetimos, no ha habido nada semejante a lo que, por ejemplo hizo Lázaro Cárdenas en México el 18 de marzo de 1938: la nacionalización del petróleo. El gobierno militar peruano ha embargado a una empresa yanqui, dejando en actividad creciente el resto y estimulando la inversión extranjera en éste y otros sectores económicos.

No pretendemos negar que este hecho tuvo una evidente repercusión política y que es expresión de una contradicción interburguesa. Lo que sostenemos es que se trata de una contradicción conciliable por medio de conversaciones y negociaciones y que así ha ocurrido en la práctica sin que de allí surja una dialéctica revolucionaria que apunte a una práctica antimperialista y al socialismo (como ocurrió, por ejemplo, en Cuba en 1960, a partir de la incautación de las refinerías yanquis que se negaron a refinar petróleo ruso).

Reforma agraria

Entre el 3 de octubre de 1968 y el 24 de junio de 1969 el gobierno militar continuó aplicando la ley de Reforma agraria promulgada por el gobierno de Belaúnde en mayo de 1964. Con esta ley (N.º 15037) se le expropiaron, en esta etapa, las 306 000 hectáreas a la Cerro de Pasco Corporation (División ganadera), en la Sierra Central. Tierras que la Cerro de Pasco « compró » a las Comunidades indígenas y a los latifundistas de la zona allá por los años 1920, cuando, a causa del envenenamiento por efecto de los humos de la Fundición de la Oroya, éstos no podían producir. Luego la empresa yanqui instaló filtros en sus chimeneas y con la propiedad de las tierras no sólo logró el control del precio de la mano de obra en la zona sino que desarrolló una próspera ganadería ovina.

La ley de Belaúnde (dictada por el aprismo, odriasismo, pradismo, etc., que conformaban

la mayoría del parlamento anterior), proveía a la expropiación de los latifundios, a excepción de los de caña de azúcar, ordenaba el pago en bonos y en efectivo, la venta de la tierra a los adjudicatarios y dejaba un límite inafectable de aproximadamente 400 ha de tierras de riego y sus equivalentes; requería además, de engorrosos trámites, y de importantes fondos en efectivo. La ley de Velasco, dentro del mismo marco burgués, es más avanzada, prevé límites inafectables de sólo 150 ha en tierras de riego y sus equivalentes (hasta 5 000 ha en pastos naturales de sierra). Establece menor cantidad a pagar en efectivo y no exceptúa a las haciendas azucareras (pero sí a la Selva baja). Dispone un mecanismo procesal más rápido y expeditivo y crea los Tribunales agrarios para facilitar la tramitación de disputas y reclamaciones.

En lo esencial, son idénticas: el carácter de clase burgués, el mantenimiento de la propiedad privada del suelo y el mantenimiento de la renta del suelo para los latifundistas, a través del pago; así como la venta de las tierras a los adjudicatarios.

En un año de aplicación la ley del gobierno militar ha expropiado y distribuido casi tanta tierra como la ley de Belaúnde en sus cuatro años de vigencia. Aunque los funcionarios agrarios de esa primera etapa (que son casi los mismos de ahora), ocuparon mucho de su tiempo y recursos en reunir información, levantar estudios, catastros, etc., es evidente que el espíritu reformista de este régimen es mucho mayor que el del régimen Belaúnde. En verdad, en cuanto a masividad y rapidez, este gobierno peruano se coloca a la cabeza de los procesos latinoamericanos de reforma agraria bajo condiciones de orden; es decir: Venezuela, Colombia, Chile, etc. Naturalmente los procesos de Bolivia, México y Cuba son otra cosa, allí participaron las masas activamente y rompieron el «principio de autoridad» que tanto preocupa a los militares peruanos.

Pero interesa, sobre todo, examinar qué sentido de clase tienen estas reformas estructurales y cuáles han de ser sus efectos al nivel de algunas apreciaciones teóricas y el análisis de los resultados obtenidos hasta el momento.

José Carlos Mariátegui, el gran pensador peruano de la década de 1920 —y de todos los tiempos— en *Punto de vista antimperialista*, tesis presentada a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana (Buenos Aires, junio de 1929), sostuvo lo siguiente: «La pequeña burguesía, sin exceptuar a la más demagógica, si atenúa en la práctica sus impulsos más marcadamente nacionalistas, puede llegar a la misma estrecha alianza con el capitalismo imperialista. El capital financiero se sentirá más seguro, si el poder está en manos de una clase social más numerosa, que, satisfaciendo ciertas reivindicaciones apremiosas y estorbando la orientación clasista de las masas, está en mejores condiciones que la vieja y odiada clase feudal de defender los intereses del capitalismo, de ser su custodio, su ujier [...] que desaparezcan los grandes latifundios, que en su lugar se constituya una economía agraria basada en lo que la demagogia burguesa llama la «democratización» de la propiedad del suelo, que las viejas aristocracias se vean desplazadas por una burguesía y una pequeña burguesía más poderosa e influyente —y por lo mismo más apta para garantizar la paz social— nada de eso es contrario a los intereses del imperialismo [...] En conclusión somos antimperialistas porque somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico llamado a sucederlo.»

Estas frases, aún de mayor vigencia y actualidad después de la segunda Guerra mundial y la gigantesca penetración imperialista norteamericana que entonces sobrevino (a pesar de una errada concepción referida a una supuesta «clase feudal»), es importante tenerlas presente por una doble razón: de un lado muestran cómo es así que el imperialismo no tiene que verse perjudicado sino, más bien beneficiado, por una reforma agraria burguesa; y de otro lado señalan como el único antimperialismo auténtico, el que proviene de las posiciones marxistas-leninistas, socialistas y revolucionarias. Negando el antimperialismo burgués, que en esos días era esgrimido por el Apra así como hoy en día es esgrimido por los nuevos reformistas burgueses: el gobierno militar de Velasco.

En esencia la reforma agraria del gobierno militar pretende: 1) Obligar el pase de los latifundistas de su situación actual de grandes burgueses agrarios a una condición futura de burgueses industriales; a la vez que persigue una forma burguesa de justicia social en el campo, redistribuyendo la propiedad de la tierra para crear una estructura de propiedad mediana y pequeña, combinada con la forma cooperativa; 2) Por efecto de ello, lograr la formación de un amplio mercado para los productos de la industria controlada por la burguesía nacional y en gran medida por el imperialismo yanqui, y proporcionar a esas burguesías los recursos de capital necesarios para la industrialización del país; 3) Políticamente persigue el robustecimiento de una capa de medianos y pequeños propietarios de mentalidad capitalista que sirvan de importante base de apoyo social del régimen y del sistema y de barrera de contención a las luchas de la clase obrera y otras capas oprimidas que por cierto no desaparecerán aún de llegar a aplicarse la Reforma agraria. (De la Declaración del CEN de VR del 7-7-1969: «¡Aplastemos a los hacendados —Expulsemos a los yanquis!».)

Para ello el gobierno dispone: el fraccionamiento de los latifundios para crear unidades familiares (incluso a través de parcelaciones privadas, organizadas por los propios latifundistas [Título IX de la ley 17716]); la organización de cooperativas agrarias como en el caso de las haciendas azucareras; o la organización de Sociedades agrícolas de interés social (SAIS) como en el caso de los latifundios ganaderos de la sierra.

Pero en todos los casos dispone el pago de lo expropiado al latifundista parte en bonos y parte en efectivo. La parte en efectivo, sin embargo, ha venido resultando (como veremos más adelante) mayor que la parte en bonos en el caso de las haciendas ganaderas. Pero, aún en los casos en que el pago en bonos es mayor, éstos están plenamente garantizados y el Estado viene honrando ya —desde 1964— con intereses de 4, 5 y 6 %. Bajo condiciones de estabilidad monetaria, estos valores resultan perfectamente respetables: dinero seguro para los exterratenientes. La deuda agraria peruana va alcanzando

cifras astronómicas y se va convirtiendo en una pesada carga fiscal, que el gobierno transfiere, por supuesto, al pueblo consumidor por la vía de impuestos indirectos. El servicio de amortizaciones e intereses de la deuda agraria para 1971 estaba calculada en 40 millones de dólares (pero visto el ritmo acelerado de las expropiaciones esta será, sin duda, mayor).

La transferencia de esta gigantesca suma a manos de los terratenientes, como viene ocurriendo todos los semestres, sin interrupciones ni dilaciones, desde 1964, significa simplemente el desplazamiento de los explotadores de un sector a otro; o peor aún, la conversión del empresario capitalista del sector agropecuario en un parásito rentista.

La renta del suelo sigue siendo percibida por sus antiguos detentadores, los que pueden realizar una acumulación de capital sin mover un dedo. Pero la ley es «muy sabia» —como diría Velasco— y ha previsto la manera de qué ese capital, lo mismo que «el ingenio y la iniciativa empresarial de los antiguos latifundistas» se ponga en actividad, y para ello prové que, a la presentación de los bonos agrarios en el Banco Industrial, acompañados de una cifra igual en efectivo, el Banco proveya crédito para la instalación o desarrollo de una industria por el monto total. Es decir, que los bonos se vuelven dinero en efectivo. O sea la recuperación total del valor de la antigua hacienda ahora convertida en fábrica. Se comprende que la provisión del dinero en efectivo necesario para igualar las cifras en bonos correrá a cargo del «buen» capital financiero internacional, siempre a la mano cuando los negocios son rentables.

Para terminar el análisis de la reforma agraria vamos a examinar en detalle las tres formas que ésta ha venido adquiriendo en su aplicación: 1) la división de los latifundios en unidades menores de 150 ha; 2) las cooperativas agrarias de las haciendas azucareras; y, 3) las SAIS ganaderas.

En cuanto al primer caso, la división de las haciendas, como se ha mencionado, esto se venía haciendo desde la anterior ley de una doble forma, de un lado por la aplicación directa de la ley y las consiguientes expropiaciones, de otro lado por efecto de las «parce-

laciones privadas» (que la ley de Belaúnde también proveía). Al dividirse una hacienda de 1500 ha en 10 haciendas de 150 ha la suerte que corre el asalariado agrícola es peor. Tenían mejores posibilidades de lucha, más fuerza y más cohesión con un solo sindicato de, por ejemplo, 300 obreros, que 10 grupos dispersos de 30 obreros cada uno. Y él sigue siendo igual un asalariado agrícola, pobre y explotado.

Casi un año más tarde el gobierno militar introdujo modificaciones en la ley de Reforma agraria, para establecer lo siguiente: en las empresas agrícolas entre 45 y 150 ha, los trabajadores: a) participarán con el 10 % de las utilidades netas en el caso de que la empresa sea conducida por un único dueño; b) participarán con el 50 % de las utilidades netas y serán socios, con representación en el directorio a través de delegados, cuyo número será siempre uno menos que el de los socios capitalistas, en el caso de que la empresa sea una sociedad de personas. Pero cediendo a la presión de los hacendados, conjuntamente se aprobaron fórmulas para el cálculo de la utilidad neta, que favorecen ampliamente al empresario, permitiendo esconder y disimular su monto.

Con esa primera fórmula de «participación de utilidades» (que luego veremos en una nueva variante en la ley de industrias), el gobierno pretende que ha terminado con la explotación y que el país marcha a una nueva sociedad.

El proceso de parcelaciones privadas significó, entre junio y noviembre de 1969, un gigantesco reparto de tierras entre los latifundistas y toda suerte de operaciones de compra-venta. Las reacciones de los obreros agrícolas de algunos importantes valles de costa como Santa y Cañete hicieron que el gobierno modificase también esta parte de la ley, dejando sentado que —a partir de entonces (24-11-1969)— ya no eran permitidas las parcelaciones sino bajo las condiciones tales y cuales; y bien, lo que ocurrió fue que de allí en adelante durante varios meses, todos los expedientes aprobando parcelaciones tenían fecha 23-11-1969, un día antes de la ley que pretendió reorientar estas acciones, autorizadas por todo un título de la ley 17716.

Las cooperativas agrarias

A los pocos días de promulgada la ley 17716, el gobierno intervino las principales haciendas azucareras, luego, al cabo de un año, convirtió a tres de ellas en «cooperativas de trabajadores» y, el último 3 de octubre, hizo lo mismo con todo el resto.

Se trata en total de unas 12 haciendas con unas 70 000 ha sembradas de caña, las que producen aproximadamente 800 000 toneladas de azúcar por año. La mitad de la producción se consume en el país y la mitad se exporta a los Estados Unidos bajo el sistema de «cuota». Antes y después de las negociaciones con Irwin, los yanquis aumentaron la cuota peruana.

El gobierno hizo aprobar un reglamento de cooperativas agrarias donde se establece, punto por punto, el destino que tendrán los llamados «excedentes». Es decir, la plusvalía de la explotación capitalista. Allí se señala el porcentaje que podrá ser distribuido entre los trabajadores, lo que deberá ser reinvertido, destinado a un fondo social, de educación, los impuestos, etc., e incluso lo que tiene que ser destinado para el pago al antiguo terrateniente. Se dejan, sin embargo, ciertos márgenes para que dentro de ellos tomen decisión los organismos directivos de la cooperativa.

El gobierno, al intervenir las haciendas, dejó en pie todo el personal administrativo y técnico. Muy pocos fueron los que se marcharon con los antiguos dueños. De acuerdo a la concepción del gobierno, es trabajador («desde el gerente hasta el último peón») todo el que regularmente trabaje en la empresa, de modo que, salvo los obreros temporales, todos pasaron a integrar las cooperativas, sujetos al mismo régimen de trabajo, puestos de mando, jerarquías y métodos que durante la hacienda latifundista; la autoridad y la opresión quedaban casi intactas, y fueron luego reforzadas.

Se establecieron los organismos tradicionales cooperativos: consejo de administración y de vigilancia, de 6 miembros cada uno y una asamblea de delegados de 120 miembros. De esa manera se declaró prohibida la asamblea general de trabajadores y se dio así un paso

importante para quebrar la fuerza mayoritaria de los obreros.

Para gobernar las haciendas, el gobierno estableció un comando ejecutivo central que tenía en la persona de un coronel del ejército y su equipo militar subalterno, por cada hacienda, su representación local. Este ejercía el mando supremo y sobre todo organizaba la represión y se ocupaba del mantenimiento del orden. En la práctica han continuado ejerciendo el mando aún después del establecimiento de los organismos de dirección cooperativa. Veamos cómo.

Para la elección de las autoridades cooperativas, el gobierno promulgó un Reglamento de elecciones en el que se estipulaba: 1) que todo trabajador que haya tenido cargo sindical o político en los últimos 3 años, no podía postular cargos en la cooperativa; 2) que no habría asamblea general sino de delegados y que ésta se constituiría por 30 delegados de cada uno de los sectores siguientes: 1) Altos empleados, funcionarios y técnicos; 2) Bajos empleados y obreros de servicios; 3) Obreros de fábrica; y, 4) Obreros de campo. Es decir, que se le daba igual representación (30 delegados) a los 30-40 altos empleados, a los 200-300 trabajadores de servicios, a los 500-600 obreros de fábrica y a los 1 500-2 000 obreros de campo; 3) que el gobierno por un lado, y los trabajadores por otro, nombrarían tantos delegados cada uno como dinero hayan puesto para el pago de la hacienda a los antiguos dueños. Es decir, que sobre el valor de los activos, se consideraba pago por los trabajadores el monto del dinero que por beneficios sociales: indemnización, vacaciones, etc., estuviera como una de las cuentas del pasivo, en manos de la empresa; y pago por el gobierno, el valor del patrimonio (la porción del pasivo que realmente pertenecía a los dueños) que es el monto que les ha pagado a los dueños, parte en efectivo y parte en bonos. De allí el gobierno resultó nombrando, por ejemplo, a 98 de los 120 delegados en el caso de Tután, y proporciones semejantes en las otras haciendas (salvo Cayaltí que estaba en quiebra).

Con este sistema de « elecciones » el gobierno no sólo aseguró una mayoría adicta, la exclusión de quienes tenían conciencia sin-

dical y política, el desmembramiento de la unidad de clase y el otorgamiento de mayor fuerza a los sectores menos combativos sino que, además, escogió a sus delegados entre los antiguos amarillos, propatronales esquirols y soplones de la empresa; los que le fueron señalados por el administrador y los capataces, todos ellos mantenidos en sus puestos de mando.

Para perpetrar este colosal engaño, el gobierno llevó a estudiantes universitarios adiestrados en enseñar cooperativismo. Pero, éstos, actuaron de acuerdo a sus conciencias, y a veces en coordinación con organismos políticos de izquierda, y la experiencia terminó en un fracaso gobiernista quedando abruptamente suspendida cuando, en la « entrega de las haciendas a los trabajadores » aparecieron importantes sectores obreros en manifestaciones hostiles a la forma como se habían organizado las cooperativas. El gobierno puso presos a algunos estudiantes y sacó al resto de las haciendas trayéndolos a Lima para interrogatorios.

El clima que se vivió en las haciendas desde el comienzo de la aplicación de la Reforma agraria fue tremendamente represivo. Los trabajadores sentían temor de ser delatados por los cientos de soplones e investigadores de la División de seguridad del Estado traídos por los militares e introducidos en las haciendas. La tarea de desenmascaramiento de las arbitrariedades e inconsecuencias del gobierno se hacía por tanto, sumamente difícil. Sólo la colaboración militante de los trabajadores permitió el trabajo clandestino indispensable y la circulación de los boletines sindicales y políticos del partido. Los intentos de realizar asambleas generales de obreros fueron reprimidos por la policía y sólo la gran conciencia y decisión de algunos sectores de trabajadores permitió que en algunos casos — como en Cayaltí — el organismo sindical se mantenga vivo y en actividad vigilante. En otros casos los dirigentes sindicales mismos, vendidos al gobierno frente a una base sin conciencia, cerraron los locales y declararon disuelto el sindicato, como en el caso de Laredo.

El primer acto de los nuevos organismos de dirección de las cooperativas — todas ellas presididas por técnicos nombrados por el

la gobierno— fue aprobar el antiguo contrato colectivo de trabajo, que normaba las relaciones entre la empresa y los obreros, ahora bajo el nombre de «Estatuto cooperativo». Apenas aquí y allá, habían cambiado algunos términos, para adecuarlos a la «jerga cooperativista», por lo demás era exactamente lo mismo. Naturalmente que el coronel en cada hacienda se ocupó de que «sus delegados» aprobaran el documento de un sonoro «carpetazo», sin discusión de ninguna clase por las bases, ni por los propios delegados.

En algunas haciendas —que tienen plantas industriales para la transformación de los subproductos de la industria azucarera, bagazo en papel y alcohol en plásticos (PVC), como por ejemplo Paramonga de la compañía americana W.R. Grace, la expropiación ha quedado limitada al ingenio azucarero y al sector campo productor de caña. Lo que ha ocurrido entonces es que la parte expropiada supuestamente «en poder de los trabajadores», produce insumos industriales para abastecer a precios ínfimos a la parte industrial en manos del imperialismo. ¡La parte expropiada trabaja a pérdida! 28 millones de soles en 1969. Y las industrias en poder del imperialismo obtienen cuantiosas utilidades. Anteriormente, cuando todo el complejo estaba bajo mando yanqui directo, los cultivos de caña fueron orientados a la producción de variedades de mayor contenido de fibra, aptas para la producción de papel, sacrificando el contenido de sacarosa para la fabricación de azúcar; ahora —y hasta el año 1972, en que logren suficientes modificaciones en los cultivos— los trabajadores cargan con las pérdidas y los yanquis se benefician con las ventajas de esta increíble situación.

Resulta inverosímil, y es, sin embargo, plenamente veraz. Pese a nuestras campañas de denuncia, limitadas por nuestros medios y por la represión, nada ha sido hecho por el gobierno para mejorar los precios del bagazo y del alcohol, sobre los cuales se basa —parcialmente— el éxito económico de las industrias en poder del imperialismo. Naturalmente que lo indispensable es culminar con la expropiación del resto del complejo económico de la Grace y hacerlo una sola unidad productiva, como era antes.

Así pues, las cooperativas agrarias de este gobierno militar acumulan capital en base a la explotación del trabajo humano, y este capital es luego transferido a: los exterratenientes a través del pago de la expropiación; al resto del sistema capitalista por diversos mecanismos de precios; al imperialismo directamente a través de formas como la descrita en el caso de Paramonga; y al Estado burgués peruano, para servicio de la clase burguesa dominante a través de la tributación.

De esta manera las cooperativas agrarias resultan ser una forma nueva, indudablemente para el Perú, de capitalismo de Estado al servicio de la burguesía, combinado con formas organizativas de tipo corporativo.

Las SAIS

Las llamadas SAIS se diferencian de las tradicionales sociedades anónimas en que: los socios tienen todos por igual un voto, y en que el administrador debe ser un socio y recibir el 10 % de la utilidad neta. Los socios pueden ser personas, asociaciones, comunidades o instituciones estatales.

Los organismos de reforma agraria dispusieron que se organizaran SAIS en las haciendas ganaderas de la Sierra, por ejemplo, en las zonas de Junín-Pasco de la Sierra central y de Puno en el sur (en la frontera con Bolivia). En las haciendas de la antigua División ganadera de la Cerro de Pasco, por ejemplo, se ha organizado la SAIS Tupac Amaru, que incluye a varias comunidades indígenas y a los antiguos trabajadores de las haciendas. Lo importante es que todo permanece igual como antes. Cada empleado y obrero en su puesto de antes, los mismos métodos de trabajo, etc. La participación de las comunidades se reduce a que tienen un representante en el organismo de dirección y que, al final del año, al momento del reparto de utilidades han de recibir (se supone) su parte correspondiente de éstas. Es decir, que se ha escogido una forma organizativa que mantenga intacta la estructura de la anterior empresa. Hay una explicación para ello: el

temor de que bajen los rendimientos y la productividad y que no aparezca el dinero para pagar a los exterratenientes la deuda agraria generada por la expropiación.

Es que en la constitución de las SAIS se ha realizado una operación crediticia inaudita. Puesto que la ley de reforma agraria establece que el ganado será pagado en su totalidad al contado y en dinero en efectivo, ha ocurrido que empresas como la Cerro de Pasco han recibido más de 80 millones de soles en efectivo (dos millones de dólares) aparte de una suma semejante en bonos. En Puno, por ejemplo, las haciendas ganaderas expropiadas: Sollocota, Andamarca, Picotani, etc., han recibido entre 20 y 40 millones de soles en efectivo, cada una, por el ganado expropiado; y lo que se produjo en la zona fue una exigencia de los hacendados para ser los primeros en ser expropiados temiendo que se acabara el dinero en efectivo disponible para estas operaciones. Indudablemente que todos estos exterratenientes se han visto tremendamente beneficiados por las operaciones y se han convertido en burgueses mucho más poderosos de lo que eran antes como hacendados, capaces de rescatar los bonos con el propio dinero en efectivo que les ha proporcionado la reforma agraria y duplicar ante el Banco Industrial su capacidad financiera. Bien, el dinero para pagar en efectivo a los ganaderos es proporcionado regularmente por el Banco de Fomento Agropecuario, entidad estatal que debe dedicarse a facilitar crédito a los campesinos (y que está presidida por Edgardo Seoane, vicepresidente del régimen de Belaúnde que rompió con éste a última hora, en la etapa entre el Acta de Talará en agosto y el golpe militar en octubre); pero simultáneamente —al organizar la SAIS— el Banco contrata un préstamo con ésta por la misma suma (al 9 % de interés) y un préstamo adicional de operación. ¡Lo que significa que resultan los campesinos comprando —al contado y con plata prestada al 9 %— el ganado a los exterratenientes! Increíble, pero cierto. Así pues, desde el principio de sus operaciones las SAIS se gravan con una carga tremenda. Por esta razón los técnicos de reforma agraria se ven obligados a mantener plenamente la

estructura de producción anterior en la esperanza de que genere utilidades para responder al servicio de amortizaciones e intereses de esa deuda (a 20 años), *ya no con el ex-hacendado, sino con el Estado, que lo representa.*

Ya puede irse comprendiendo lo que son las SAIS. Como en el caso de las cooperativas, para cautelar su dinero prestado, el Banco de Fomento Agropecuario nombra sus representantes a los organismos de dirección quienes en verdad mantienen el control pleno, en colaboración con el antiguo administrador de la hacienda —que se mantiene como presidente de la SAIS—, etc.

¿Qué significado de clase tiene la reforma agraria en el Perú? ¿A qué clase social favorece y sobre qué clase social pesará la carga de trabajar para producir —como dicen los teóricos del gobierno— «los recursos de capital necesarios para la industrialización del país»?

Es, evidentemente, un proceso de afirmación burguesa y capitalista.

Nosotros no hemos mantenido una posición opuesta a la reforma agraria en sí —pamplinas— ni menos a la entrega de la tierra al campesino, sino fundamentalmente a: 1) el pago de la tierra a los terratenientes y el pago de la tierra por los campesinos adjudicatarios; 2) a las formas autoritarias y represivas con las que se ha conducido el proceso, sin la menor participación popular dentro de un orden paternalista y abusivo, castrador de la creatividad de las masas; y, 3) a múltiples inconsecuencias del gobierno militar en su aplicación.

La antigua clase terrateniente ha de salir favorecida con la reforma agraria peruana, lo mismo que el imperialismo; y el campesinado y los sectores obreros aparentemente beneficiados tendrán que cargar sobre sus espaldas el pesado fardo de hacer de sus antiguos patrones los nuevos burgueses industriales.

La frase de Tupac Amaru citada por Velasco: «Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza», es mentira bajo las condiciones que genera la aplicación de la nueva ley de reforma agraria. El patrón seguirá comiendo de la pobreza del campesino a través de

múltiples mecanismos, que, brevemente, hemos intentado explicar.

Las reformas mineras

Como hemos visto, la minería es un sector clave de la economía peruana. Produce por sí solo el 50 % de los recursos en moneda extranjera y se encuentra, en casi un 100 %, en manos del imperialismo norteamericano.

Dos medidas importantes han sido tomadas por el gobierno militar en el campo de la minería: 1) la suscripción en diciembre de 1969 del Contrato de Cuajone con la Southern Perú; y, 2) la promulgación de la nueva Ley minera en abril de 1970.

El Contrato de Cuajone. (Este tema lo hemos desarrollado extensamente en un artículo del número 6 de la revista *Vanguardia Revolucionaria* (Pumaruna: «El reformismo burgués peruano es proimperialista. Cuajone lo demuestra».) Haremos aquí una breve síntesis.)

El imperialismo en general y el norteamericano en particular venían, desde 1965 y la guerra del Vietnam, requiriendo muchos mayores volúmenes de importaciones de cobre. El precio había subido gradualmente hasta más de 60 centavos de dólar por libra. Las reservas yanquis de metal puro (y las japonesas), estaban bajas. Por todo ello había una presión imperialista para desarrollar la minería del cobre a nivel mundial.

Los principales países productores de cobre en el mundo son: Zambia, Chile, Congo Kinshasa y Perú, en ese orden. Pero de estos países, el Perú presentaba condiciones especialmente favorables al imperialismo: 1) grandes reservas de mineral, de comparativamente fácil acceso, aspectos tecnicomineros de carácter favorable; 2) concesiones en manos de empresas mineras norteamericanas dispuestas a invertir; 3) actitud favorable del gobierno, interesado en elevar su producción y obtener del cobre —única materia prima en estas condiciones— los recursos de moneda extranjera necesarios para enfrentar el colosal servicio de la deuda externa.

Desde entonces las empresas mineras yanquis estaban dedicadas a conseguir una mejora en la legislación minera peruana, ya bastante favorable, y resolver el espinoso

problema de la IPC, que era, como se ha dicho, un «caballito de batalla» antimperialista.

La legislación minera más favorable fue conseguida en abril de 1968, con la enmienda del Art. 56 del Código de Minería y la respectiva reglamentación. En esta medida —aparentemente una simple enmienda— se introdujeron cambios que significaban una verdadera monstruosidad de entreguismo y proimperialismo, en cuanto a liberaciones, a exoneraciones, franquicias y toda suerte de medidas favorables a las empresas que se acogieran a este artículo y suscribieran contratos con el gobierno.

Sólo faltaba arreglar lo de la IPC. En ese esfuerzo cayó Belaúnde. Los militares lo arreglaron a su manera y quedó expedito el camino de la entrega del cobre. Un año más tarde, el 20 de diciembre de 1969, se suscribió el más importante y entreguista contrato entre el Estado y una empresa imperialista de toda la historia reciente del Perú. Y esto, por un gobierno que se hace llamar a sí mismo «nacionalista y antimperialista». Esta medida, que fue vergüenza nacional, ha sido señalada por la Prensa Latina como positiva porque a continuación se prometió (Prensa Latina dice: «decretó», lo que es falso; el decreto no se produjo sino en abril) la comercialización y refinación estatal de minerales, cuyo efecto examinaremos más adelante.

El contrato se suscribe para la explotación, hasta su extinción, del yacimiento de cobre de Cuajone, vecino a Toquepala, donde ya operaba esa misma compañía yanqui. El ritmo de producción esperado es de 110 000 toneladas cortas (907 kg) de cobre fino por año —un aumento del 50 % sobre la producción actual— de acuerdo a las reservas calculadas (5 millones de toneladas de cobre fino); hay para 50 años de explotación imperialista en Cuajone. La inversión calculada es de 355 millones de dólares en 6 años y de acuerdo a los planes de inversión se da por descontado que el yacimiento adjunto de Quellaveco quedará también adjudicado a la misma empresa yanqui.

El régimen de moneda extranjera que se establece determina que la Southern tenga plena disponibilidad de divisas para: 1) recu-

peración de los 355 millones de dólares de capital a invertir; 2) pago de intereses sobre sus préstamos de financiación, por 40 millones de dólares; 3) servicios diversos en moneda extranjera a razón de 2 millones de dólares por año, por tiempo indeterminado; y, 4) utilidades, depreciación del activo, fondo por agotamiento, amortización de la inversión, intereses y reservas. Es decir, ¡sin límite! El sistema será tal que la moneda extranjera procedente de las ventas permanecerá en una cuenta en Nueva York, ni siquiera entrará al Perú; contra esta cuenta girará la Southern y sólo el saldo quedará a disposición del Banco Central de Reserva del Perú.

La Southern tendrá libre disponibilidad en la exportación y venta de su cobre, sin limitaciones e imposiciones de ninguna clase. El régimen tributario que se establece es de 47,5 % para los 10 primeros años, 54,5 % para los 6 siguientes y desde allí el régimen normal que se encuentre vigente, pero sólo sobre la «utilidad neta imponible». Y, para los cálculos de la «utilidad neta imponible» se sigue este procedimiento: a los ingresos brutos, calculados en 85 millones de dólares por año, se le restarán los gastos brutos que incluyen depreciaciones y etc., para dar una «utilidad bruta» de aproximadamente 52 millones de dólares por año (para los 10 primeros años). De allí se le deducen 40 millones de dólares por año durante los 10 años, hasta sumar 400 millones de dólares (la inversión de 355, más 45 por el interés de préstamos de financiación), durante el periodo en que están teniendo entradas de 85 millones por año. ¡Todo eso está libre de impuestos! Y sólo finalmente se obtienen 12 millones de dólares de «utilidad imponible» (52 de utilidad bruta menos 40 de deducciones) de la cual aproximadamente 6 millones (al 47,5 %) corresponden al Estado peruano por impuestos, y los otros 6 son supuestamente «la única utilidad» de la empresa.

Todo esto parece absurdo e increíble, pero es absolutamente veraz. Y no es todo. Aparte de esto están las liberaciones aduaneras para importar libres de derechos todo lo que requieran, y por último variados mecanismos

«legales» para sacar otras ventajas económicas menores.

El contrato de Cuajone es groseramente entreguista e incluso más favorable que el anterior, de Toquepala, tramitado durante los regímenes conservadores de Odría y Prado.

Las inversiones imperialistas yanquis en el Perú tenían en 1969 un valor acumulado total de aproximadamente 700 millones de dólares, lo que quiere decir, de un solo «plumazo» los militares han facilitado al imperialismo yanqui un incremento de más del 50 % de su presencia explotadora, física y directa, en el país.

Los ridículos argumentos burgueses en pro de las inversiones extranjeras volvieron a ponerse de moda en esos días: que nos facilitan divisas que no tenemos; que dan trabajo a mucha gente desocupada; que aportan con impuestos a la conformación del presupuesto fiscal; que generan industrias conexas.

¡Falso, mil veces falso! Por cada dólar que traen se llevan un promedio de tres, no facilitan divisas sino en apariencia, y en vez causan nuestro empobrecimiento; se llevan la ganancia y dejan un hueco en la tierra. En 6 años llegarán a estabilizar en el trabajo a 3 000 trabajadores (a razón de 500 por año), con 355 millones de dólares de inversión, lo que resulta a razón de 115 000 dólares por trabajador, tasa altísima e inconveniente que puede ser superada por diversos tipos de industrias de acuerdo a una política de eficacia productiva y pleno empleo. La aportación de impuestos es ridícula frente a las utilidades que se llevan. No generan industrias conexas puesto que importarán —libres de derechos— todos los insumos que requieran; y cuando finalmente establecen una industria conexas es también de su propiedad y da origen al mismo tipo de problemas. La solución para Cuajone, como para los demás yacimientos, es, naturalmente, la explotación estatal bajo las condiciones de propiedad social, a partir de la expropiación de las empresas mineras imperialistas que existen y la generación del capital y la obtención de los préstamos sobre la base de la posesión de éstas. Es decir, que la solución de Cuajone,

como la de la minería peruana, o la del desarrollo del país, se basa en la expropiación, sin pago, de las empresas imperialistas yanquis radicadas en ese sector vital. Tarea sin duda imposible para este régimen reformista-burgués. Tarea que sólo puede ser cumplida por un pueblo movilizad y en armas y dirigido por su vanguardia revolucionaria marxista-leninista.

La nueva Ley minera

La minería es nuestra principal riqueza natural no renovable y es también el principal sector económico donde domina el capital imperialista. Por ello todo el pueblo estaba pendiente de lo que haría el gobierno militar que se autoproclama antimperialista, después que, luego de firmar Cuajone, anunciaron una nueva Ley minera.

A la firma del contrato de Cuajone, habíamos anticipado que era necesario luchar contra las empresas mixtas que el gobierno pretendería imponer y las habíamos denunciado como « expresión de la negra alianza: imperialismo-Estado burgués, expresión de la ligazón más estrecha del Estado a los intereses del capital monopolista y el sometimiento del país a la dominación extranjera en contra de los obreros peruanos y los intereses nacionales ».

La nueva Ley minera, de abril de 1970, puede ser calificada, sin vacilación, como reformista-burguesa y proimperialista. Es decir, que, de un lado busca modificar la posición del Estado burgués peruano, mejorándolo: estos son los aspectos referidos a la refinación y comercialización estatal de minerales; y de otro lado, otorga amplias compensaciones al imperialismo puesto que la junta militar persigue para el país un modelo de desarrollo económico sujeto a la inversión del capital privado extranjero. Estos son los aspectos referidos a las « Disposiciones promocionales » y las llamadas « Empresas mixtas mineras ».

El Estado peruano puede obtener quizás (dependerá de los precios que aplique o la comisión que cobre), una ventaja de la comercialización de los minerales, pero la ley de hecho establece tan evidentes y despro-

porcionadas excepciones (con el fin de atraer el capital extranjero) que la comercialización probablemente será un simple servicio del gobierno a las empresas imperialistas con ridículo margen de beneficio para el Estado. Así ha sido efectivamente en el caso de la EPCHAP, Empresa peruana de comercialización de la harina y aceite de pescado, establecida por el gobierno militar en marzo de 1970, y celebrada por los magnates de la pesca, que ahora disfrutan de los beneficios de este servicio estatal que les coloca su producción en el mercado mundial, a excelentes precios —por tratarse de transacciones globales de gran volumen—, les tramita todos los documentos y les cobra una comisión mínima del 3 % por toda la operación. Ya los industriales pesqueros no tienen que mantener oficinas en Nueva York, Hamburgo, etc., ni otros gastos semejantes, todo esto ha pasado a cargo de la EPCHAP, la cual, con este ingreso del 3 %, logra cubrir costos y obtener un fondo para su desarrollo más eficiente. ¿Qué sufrimientos y perjuicios para el capital imperialista y gran burgués de la pesca es éste ? Evidentemente ninguno. Es su Estado, y aunque administrado por un gobierno militar reformista, éste sabe muy bien para quién debe trabajar.

Cosa semejante ocurrirá con la refinación de metales. El Estado peruano ha decidido entrar en el negocio de refinación a *compartir* beneficios con el imperialismo. Allí hay también un cierto margen de ganancias que el Estado podrá obtener de la explotación de la plusvalía del trabajador peruano, como en cualquier otro negocio capitalista. La ventaja del Estado será sobre la diferencia de precio entre el cobre *blister* (fundido y al 99 % de pureza) y el cobre electrolítico (refinado y 100 % puro), que es de aproximadamente 5 centavos de dólar por libra; descontando de allí los costos de la operación de refinación.

Podrá ocurrir con el cobre una situación semejante a la que produjo el gobierno Belaúnde con el petróleo, en pleno imperio de la IPC. Belaúnde instaló la refinera estatal de La Pampilla, con capacidad para 20 000 barriles diarios, y pasó a *compartir* beneficios con el imperialismo, lo que hasta hoy se man-

tiene, en materia de refinación de petróleo, en Conchán-Chevrón y en Ganso Azul. Así como la Cerro de Pasco Corp., se mantendrá en la Oroya, con su refinería de 50 000 toneladas de cobre por año.

De otro lado, por supuesto, estos « atrevimientos reformistas » de la junta militar son debidamente compensados en lo siguiente: 1) se mantiene la propiedad y el régimen de explotación capitalista del proletariado minero y se le da garantías para su funcionamiento indefinido sobre la base de que el imperialismo venda el 25 % de sus acciones a la burguesía peruana o al Estado; 2) se mantienen, disfrazados, los antiguos artículos 54 y 56 del Código de Minería, y el llamado « factor agotamiento ». Como se sabe, la tesis del « agotamiento » minero era de que, a medida que los yacimientos van acabándose por efectos de la explotación, es la empresa minera la que debe ser compensada. ¡Cómo si los yacimientos fueran de su propiedad privada y no del Estado que los entrega en concesión de explotación! Esta tesis era coincidente con la de la IPC, que sostenía que el subsuelo, de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, eran de su propiedad privada. En la nueva Ley minera no aparece el término « agotamiento », pero sin que medie mayor justificación, se mantiene, sí, una liberación tributaria semejante a la que existía; 3) bajo el régimen de la empresa mixta minera, la tributación resulta ser *aún menor* que bajo las condiciones del contrato de Cuajone, que en resumen hemos ya explicado. Es decir, que las empresas imperialistas que se acojan a este sistema (y serán muchas, si no todas), podrán explotar mejor a nuestro pueblo y robar mejor nuestras riquezas.

Así queda claramente mostrado el límite del reformismo burgués y su carácter proimperialista. No hacen otra cosa porque son burgueses de convicción. Crean en el capital privado extranjero. Por lo tanto, deben hacer sólo aquello que este capital imperialista puede aceptar y de otro lado compensan con toda suerte de estímulos para que este capital se sienta atraído. Así se desenmascaran como proimperialistas. Por eso los combatimos sin tregua.

Las empresas yanquis: Cerro de Pasco Copper Corp., y Southern Perú Copper Corp., han dado su visto bueno a la nueva Ley minera y han calificado el gobierno militar como « un gobierno amigo y bien intencionado ». Esos pulpos imperialistas no se equivocan en su caracterización. Efectivamente el gobierno militar es amigo del imperialismo y de la gran burguesía y por tanto, enemigo del pueblo.

La política bancaria y monetaria

A comienzos de 1968 se estableció el control de cambios y el régimen de « certificado de divisas » de modo que todas las operaciones de exportación eran registradas por el Estado. De esta manera el gobierno de Belaúnde buscó la forma de evitar que continuara la fuga de divisas al exterior. Sin embargo quedó sin control el llamado « mercado de giros » que equivalía aproximadamente al 15 % del total de operaciones en moneda extranjera. Sólo en mayo de 1970 el gobierno militar decretó el control sobre el mercado de giros, completando de esa manera el control sobre la moneda extranjera y estableciéndose dos cambios: el dólar certificado proveniente de la exportación, a 38,70, el que es vendido para la importación, en ciertos casos con un recargo del 10 % y en otros no, dependiendo del tipo de mercancía de que se trate; y el dólar giro, proveniente del movimiento del capital, a 43,38, el que es vendido para enviar a estudiantes, para turistas, y para pago de fletes, seguros, utilidades, patentes, regalías, etc., de quienes no cuentan con « certificados ».

Adicionalmente, el gobierno estableció que todo aquel que posea moneda extranjera o inversiones de cualquier tipo en el extranjero debía entregarla al Estado. Como habíamos anticipado, el gobierno sólo pudo recuperar el dinero que se encontraba depositado en bancos del país y de algunas inversiones en el extranjero tramitadas por bancos del país. Pero la mayor parte del dinero e inversiones

que la burguesía peruana tiene en el extranjero no se encuentra fácilmente a la vista y pudo, por tanto, escapar a los efectos de esta ley. Tampoco el gobierno podía tomar posesión del dinero que estuviese en el Perú, «bajo el colchón» de sus dueños. En un esfuerzo de conciliación el gobierno ofreció amnistía tributaria y total secreto y cobertura para quienes trajeran su dinero, pero en verdad sólo lo trajeron quienes no podían evitarlo.

El general Luis Barandiarán había declarado que esperaban recobrar mil millones de dólares de dinero en depósitos e inversiones en el extranjero, pero en total lo recobrado, basado sobre todo en lo que estaba en el país, no llegó sino a unos 300 millones de dólares. De todos modos una cifra importante. Este dinero, no fue, por supuesto, confiscado, a cambio de él se le pagó a sus dueños, en moneda nacional, 43,38 soles por dólar.

Conviene señalar, por otro lado, que en nada han sido afectados ni los extranjeros residentes en el país, ni menos, por supuesto, las compañías imperialistas que siguen teniendo plena libertad y servicio eficiente para sacar sus ganancias, en la forma de pagos de patentes, regalías, recuperación de la inversión, fletes, seguros, simples utilidades, y etc.

Por ello no puede afirmarse que la «fuga de divisas ha terminado en el Perú». Esta se encuentra perfectamente legalizada y las compañías imperialistas hacen uso de estas leyes regularmente. Por eso el Perú no ha dejado de ser campo atractivo para inversiones extranjeras.

El dinero que estaba en manos de la burguesía en moneda extranjera y fue convertido a moneda nacional, pronto se ha orientado hacia operaciones especulativas en la Bolsa y también hacia la compra de joyas: oro y diamantes. Se esperaba que éste tendría que convertirse en inversiones y que de esta manera generaría un cierto crecimiento capitalista —así ocurrió en Colombia y Chile cuando adoptaron medidas semejantes—, pero parecería que en el Perú no ha de ser así.

Las medidas que comentamos (de corte reformista burgués todas ellas) no han significado grandes cambios, ni modificaciones de

fondo. El Perú sigue sujeto al Fondo Monetario Internacional y se basa en sus «buenos oficios» en el campo internacional para la renovación de muchas de las obligaciones de la deuda externa.

Como hemos dicho, la deuda externa ascendía a 850 millones de dólares al comenzar este gobierno. Siguiendo los lineamientos del gobierno de Belaúnde, el gobierno militar «refinanció» la deuda externa y de esa manera trabó compromisos importantes con el FMI y otros organismos financieros dominados por el imperialismo yanqui. De allí la política de estabilidad monetaria y acumulación de reservas aunque esto signifique que la economía permanece estancada y la desocupación sea mayor que nunca.

En el campo bancario el gobierno ha procedido a la compra de tres instituciones: el Banco Popular, el Internacional y el Continental. El Popular y el Continental discutían su fusión como resultado de un decreto del gobierno obligando a toda institución bancaria a tener por los menos 150 millones de soles de capital (3,5 millones de dólares), y por efecto de la situación casi de quiebra económica del Popular (de propiedad de la familia Prado, grandes burgueses peruanos). El Continental, del Chase Manhattan de Rockefeller, tenía interés en adquirir el Popular para ampliar sus negocios.

El esquema del gobierno es que en el campo bancario existan tres grupos de bancos: la Banca estatal, para encargarse de la promoción de los negocios privados de los sectores burgueses que al gobierno le interesa impulsar, particularmente en la industria; la Banca extranjera, limitada a simples operaciones de giros, y transacciones con el exterior; y una Banca privada «nacional», libre de desarrollar negocios con otros sectores burgueses.

Con las compras realizadas y con el decreto que ordena un mínimo de 150 millones de capital, el esquema del gobierno quedaría cumplido.

Tanto el Banco Popular como el Internacional fueron comprados de acuerdo al valor en libros de sus actividades, pero en la compra del Continental, asunto que fue negociado en secreto con los representantes de Rockefeller, el gobierno militar realizó una operación que

ha sido motivo de escándalo y que hasta ha provocado la denuncia de la operación por Ulloa, el antiguo ministro de Belaúnde (ya mencionado), quien aprovecha la ocasión para burlarse del llamado «nacionalismo» de los militares.

La operación en verdad es una más para la serie de actos de entreguismo realizados por este gobierno, y muestra el espíritu marcadamente proimperialista que en la práctica y en concreto, tiene el gobierno militar. Veamos brevemente los hechos.

Las acciones del Banco Continental estaban cotizadas a 102 soles en la Bolsa, tenían un valor de balance (al 31 de diciembre) de 188 soles, pero fueron compradas por el gobierno militar a 586 soles, que ha pagado en dólares, sobre un Banco de Nueva York, al Chase Manhattan.

El Chase Manhattan está presidido por David Rockefeller, el mismo de la Standard Oil NJ, el dueño de la IPC, que le quedó debiendo al Estado peruano ni más ni menos que unos 550 millones de dólares, después del embargo de la empresa. Parece absurdo e increíble pero es absolutamente veraz. Este ha sido el proceder del gobierno peruano que se hace llamar a sí mismo «nacionalista y revolucionario».

La Ley de industrias

A fines de julio de 1970, el gobierno militar promulgó la Ley general de industrias, que ha sido llamada por los voceros del régimen: «la más revolucionaria de todas las medidas dictadas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas armadas».

El análisis de la Ley de industrias lo haremos, brevemente, alrededor de los siguientes aspectos: 1) la nueva orientación de la producción industrial; 2) los incentivos a la burguesía industrial; 3) la participación de los trabajadores; 4) el tratamiento especial a la inversión extranjera.

La ley clasifica a la industria en las siguientes 4 categorías: 1) básica y específica; 2) de apoyo social; 3) de complementación; y 4) suntuaria. Y a través de todo su texto hace uso de esta clasificación para otorgarle

mayor apoyo a las primeras categorías, las que, con razón, considera prioritarias. La primera categoría queda constituida por la industria siderúrgica, metalúrgica básica, química básica, papel, cemento, fertilizantes, la industria específica de bienes de capital, y la de investigación tecnológica.

Esta clasificación técnica y el otorgamiento de prioridades de acuerdo a dicho criterio es, indudablemente, un avance, puesto que se trata de un esquema productivo más conveniente dentro de la concepción del Estado burgués moderno.

El Estado reserva para sí el control de la industria básica, pero otorga concesiones de ésta bajo contrato. El resto de la industria (inclusive la específica) queda directamente en manos de las empresas privadas.

El papel que el Estado se asigna a sí mismo como responsable y promotor de la industria básica es la de abastecer con insumos industriales a bajo precio —incluso soportando pérdidas, lo que será común— a los sectores burgueses instalados en las demás categorías y ramas industriales. (Esta afirmación no se encuentra en la ley, fue admitida por el asesor del Ministerio de Industrias, Dr. Virgilio Roel, en el curso de un debate público con el autor.)

Con lo que hemos dicho queda bien definido el carácter de clase, reformista-burgués, de la ley. Veamos sin embargo, las justificaciones que, para su promulgación, dio el gobierno militar, en la forma de «considerandos». En ellos el gobierno sostiene que persigue el «bienestar general», que lo ha de alcanzar a través del «desarrollo económico», y éste a su vez a través del «desarrollo permanente y autosostenido de la industria». A su vez, para lograr este desarrollo industrial, sostiene el gobierno, se hace necesario «incentivar» a la burguesía industrial y, adicionalmente, es indispensable que «quienes aportan el capital y quienes aportan el trabajo, armonicen su participación en el proceso productivo». He allí el esquema del gobierno, claro como el agua: estímulo a la burguesía para que aumente el ritmo de acumulación, y al proletariado la consigna de someter sus reivindicaciones, subordinarse, y conciliar con la patronal, «armonizar» en una palabra. Esta

tesis se desarrolla con gran claridad a través del artículo de la Ley, y es la comprobación, una vez más, del carácter de clase del gobierno militar.

Los incentivos a las empresas industriales son la columna vertebral de la Ley de industrias, su eje central. Hay incentivos de tres tipos: tributarios, crediticios y administrativo-tecnológicos. Los incentivos tributarios son, por supuesto, los más importantes. Los crediticios consisten en la garantía de crédito a más bajo interés, a más largo plazo y con mayores facilidades (años de gracia, etc.). Los incentivos administrativo-tecnológicos son simplemente la reiteración del papel del Estado; con todas sus dependencias públicas al servicio de los empresarios burgueses, y con las «últimas» conquistas de la ciencia a su disposición.

Los incentivos tributarios se refieren a las gigantescas liberaciones que, sobre todas las formas de impuesto a que se encuentran sometidas las empresas y en especial respecto del impuesto a la renta, se han de producir. Siempre de acuerdo a la escala de prioridades establecida, favoreciendo más a la primera categoría, pero sin que ninguna, salvo la «industria suntuaria» quede sin ser beneficiada por sustanciales rebajas de impuestos.

La orientación de las liberaciones de impuestos, no es sin embargo, tanto con el objetivo de poner una gran renta a disposición personal de los capitalistas, sino para incrementar la renta destinada a inversión; aunque por supuesto tanto una como otra son en cifras absolutas y relativas incrementadas de manera importante.

La consigna que el gobierno militar evidentemente dio a la burguesía con la promulgación de esta ley, fue: «¡Burgueses, enriquezcanse!» Y los sectores más despiertos y avanzados de la burguesía respondieron en voz del alcalde de Lima (nombrado por Velasco y amigo personal de éste), el ingeniero Eduardo Dibos Ch., dueño de algunas empresas industriales en combinación con capitales yanquis. Este dijo: «Bien, ya ha sido dada la Ley de industrias, ahora: ¡Obremos, a trabajar para ser más revolucionarios!» Y a su vez, el diario *Expreso* (parte del com-

plejo propagandístico del gobierno militar), lo reprodujo en grandes caracteres en toda la extensión de su primera página, tirando cientos de miles de ejemplares por todo el país.

Así respondían los sectores burgueses más lúcidos; mientras que otros, torpes y conservadores, tardaron algunas semanas en convencerse de las «inmensas bondades» de la Ley. A ellos, Velasco les decía públicamente cada vez que tenía ocasión: «La Ley es muy sabia, señores industriales, estudiéla con detenimiento y verán que tengo razón.»

Establecido el objetivo principal de la Ley: el aumento de la renta a las empresas industriales en manos predominantemente de la gran burguesía y el imperialismo, y su orientación hacia la reinversión, el paso siguiente era cómo conseguir que la clase obrera «armonice» con la patronal y se avenga a este programa. Para ella se ideó el mecanismo de la participación de los trabajadores, en las utilidades, en la propiedad y en la dirección de las empresas.

La participación de los trabajadores tiene dos objetivos visibles, de un lado, procurar ablandar la conciencia de clase obrera, introduciendo elementos de engaño, señuelos burgueses que lleven a un grado mayor de alineación al obrero y lo orienten a pensar como si fuera —él también, por virtud de algunas migajas— burgués como el patrón. De otro lado, de lo que se trata es de quebrar el movimiento sindical y los sindicatos como organismos de lucha y de defensa de los trabajadores, pretendiendo hacer gravitar el centro de la atención sobre la Comunidad industrial, institución que se crea para que tenga a su cargo la representación de los trabajadores en todos los asuntos referentes a la participación.

La participación en las utilidades se establece modificando legislación anterior, que ya les otorgaba, para generalizarla ahora a todos los trabajadores («desde el gerente hasta el último peón»), y para modificar su sistema de distribución por uno más clasistamente burgués. Bajo el nuevo régimen, el 10 % de las utilidades serán repartidas a los trabajadores, 50 % a prorrata (igual para todos) y los otros 50 % según la remuneración que

reciban, o sea que sirve para acentuar las desigualdades, y los altos empleados se llevarán la parte del león, con sus sueldos 15 a 1 de lo que gana el promedio de los obreros en un mes.

Mariátegui, en su *Defensa del marxismo*, nos hace recordar que fue Henry Ford, en 1914, el primer capitalista en introducir la participación en las utilidades en sus empresas. En el Perú, los apologistas del gobierno han celebrado la medida como expresión de la vía «no capitalista» que sigue el gobierno, pero no se sabe que en los Estados Unidos se haya desarrollado esta vía, aunque la medida ha sido extendida por toda su economía.

La participación en la propiedad, que otorga la Ley de industrias, no es a través de los mecanismos —ampliamente difundidos en los Estados Unidos— como el «accionariado popular» sino a través de una forma más engañosa, y más favorable a la burguesía que aquélla: la Comunidad industrial.

De las utilidades de la empresa se toma, de acuerdo a la Ley, el 15 % anual para formar el patrimonio de la Comunidad industrial y éste se reinvierte, forzosamente, en la misma empresa (salvo que esta reinversión sea anti-económica, lo que no será el caso en las descapitalizadas empresas peruanas). Cuando, y si es que, la Comunidad industrial llega algún día a tener un patrimonio equivalente al 50 % del capital de la empresa, sobre la base de sucesivas acumulaciones anuales de 15 % reinvertidas cada vez, en ese momento la Comunidad industrial pasa a tener el 50 % de las acciones (que son distribuidas entre sus miembros), y pasaría —recién— a gozar de las utilidades y de representación en el directorio, proporcionalmente a su control sobre el 50 % de la propiedad. Y claro está, durante todo el lapso, hasta que no tengan 50 %, aunque tengan 49 %, no tienen derecho a propiedad, ni utilidades ni representación, salvo lo que les otorga la Ley y que estamos describiendo. En otras palabras, esto significa que el mecanismo del 15 % de reinversión, viene a ser como una especie de préstamo sin intereses que los trabajadores, a través de la Comunidad industrial lo hacen a los empresarios capitalistas. Estos, con el 15 % reinvertido, incrementan sus ganancias al año

siguiente y luego las reparten entregando a la Comunidad el 10 % para distribuir y el 15 % para reinvertir y al gobierno 2 % para investigación y reteniendo los 73 % restantes, que se han formado con el aporte del 15 % de los trabajadores reinvertido en la empresa.

Este análisis, en fin, se hace aceptando las reglas de juego burguesas, con el fin de mostrar la inconsecuencia de sus propias postulaciones. Todo obrero debe ser por supuesto, primeramente esclarecido respecto de cómo esa ganancia burguesa no es sino expresión en dinero del trabajo que los obreros realizaron y no les fue pagado. Se les pagó el salario, sí, pero éste no cubría sino una fracción del valor del producto. De modo que el 10 % y el 15 % que le están ofreciendo no son sino fórmulas engañosas que buscan encubrir los mecanismos de explotación capitalista pero que terminan por dejarlos aún más en evidencia. El obrero acabará por comprender que el capital-dinero en manos de los burgueses no se reproduce solo, por más que lo glorifiquen; ni tampoco el capital constante (convertido en máquinas, en herramientas, en fábricas e insumos industriales), todo quedará allí quieto, llenándose de polvo sin que aumente de valor, si no hay participación del trabajo asalariado. Es pues, sólo el trabajo asalariado el que hace que el capital, en manos del burgués, se reproduzca y aparezca la ganancia. El obrero produce la ganancia con su trabajo y ahora se le quiere engañar otorgándole una fracción de esta ganancia y se le pinta un cuadro de todos los colores para que crea en un futuro sobre la base de su colaboración con la burguesía.

Pero, si durante toda la etapa de acumulación del patrimonio de la Comunidad industrial, a razón del 15 % de las utilidades por año, a los empresarios capitalistas se les da por invertir a exactamente esa misma tasa —lo que les será muy fácil por todos los estímulos a la reinversión que la propia Ley proporciona—, pues ¡es evidente que la Comunidad industrial no llegará nunca al 50 % del capital! Sin embargo no tiene necesariamente que ser así, es posible que los empresarios burgueses decidan que, al cabo de un cierto número de años, les conviene que la Comu-

nidad entre a compartir, en función de consideraciones respecto de la tecnología, el destino de esa rama industrial en particular, etc. Y simplemente adoptarán los mecanismos que permitan que la Comunidad llegue a este nivel. En otras palabras está perfectamente claro que será la propia clase burguesa industrial la que resuelva cuándo y si es que la Comunidad industrial accede a la propiedad. Cuándo y si es que ese día llega, la propia burguesía industrial habrá tantas veces reproducido su capital y extendido y consolidado su dominio por todo el sector, que el acceso de los trabajadores a esas fracciones de propiedad no tendrían mayor significación. Mucho antes de eso, sin embargo, esperamos, todo el esquema se habrá ido, arrojado por los propios trabajadores, al tacho de basura de la historia.

Por último está la participación en la dirección de las empresas. Se ha establecido que la Comunidad industrial tenga un representante. Pero también se ha establecido que los dirigentes sindicales no pueden ser ni directivos de la propia Comunidad ni menos sus representantes. Es decir que —como en las cooperativas agrarias— se adoptan disposiciones discriminatorias de los elementos más esclarecidos y combativos, de quienes tienen el respaldo mayoritario de su base. Por lo demás, integrando la Comunidad industrial se encuentran, como miembros de pleno derecho, el gerente, el jefe de relaciones laborales, los capataces, e incluso los parientes del dueño, o él mismo si trabaja en la empresa (lo que no es extraño). No costará gran esfuerzo al directorio de la empresa —de no conseguir un « representante » adicto (el mismo gerente quizás)— establecer los mecanismos de engaño adecuados para esterilizar su participación. Está claro que esta representación tiene toda la pinta de ser no más que una cosa simbólica y tramposa, sin mayores efectos prácticos.

El cuarto aspecto a examinar en la ley, para terminar, es el que se refiere al tratamiento especial al capital extranjero.

En la Ley de industrias ha quedado plasmada la « doctrina Velasco » (llamada así por los torpes y adulones editorialistas del diario *Expreso*), que establece para el capital ex-

tranjero las siguientes condiciones: 1) recuperación de su inversión; 2) una ganancia « razonable »; y, 3) al cabo de un plazo preestablecido, venta de su empresa, mediante pago de su valor debidamente justipreciado. Francamente, los imperialistas no podrían pedir más bajo las condiciones actuales de pretendido « antimperialismo y nacionalismo ». Hemos revisado discursos de Rockefeller sobre el tema de las inversiones en el extranjero (su preferido) y nos hemos dado con exigencias que quedan satisfechas por estas condiciones y ninguna más que no esté ya consignada (como la libertad de sacar sus disponibilidades en moneda extranjera al exterior).

Es decir, que eso significa que las empresas imperialistas, protegidas legalmente por esta Ley de industrias, tendrán una triple recuperación del capital invertido: como todo burgués depreciándolo y cargándolo como gasto; « recuperándolo » directamente, separando parte de la utilidad la que queda libre de impuestos; y por último vendiendo sus activos al final. De esta forma, las empresas imperialistas industriales quedan garantizadas contra la expropiación, ya que venderán sus activos —justamente cuando, por el desarrollo tecnológico, éstos hayan sido superados en eficiencia— e instalarán nuevas empresas, con el mismo sistema, y con tecnología más avanzada. Evidentemente, ¡no está tan mal la perspectiva para el imperialismo en el campo industrial peruano!

Parece increíble, pero es absolutamente veraz. Este es el tratamiento al capital imperialista que establece la Ley de industrias al cual hacíamos alusión cuando analizábamos el Pacto andino al comienzo de este ensayo. La Ley de industrias se presenta entonces como un importante esfuerzo de la burguesía por hacer el desarrollo de este sector bajo condiciones de explotación capitalista-imperialista (disfrazada) y pretendiendo obtener la colaboración de los trabajadores.

Pero si el Estado piensa incrementar sus actividades, y está dispuesto a trabajar a pérdidas en sus empresas, para abastecer de insumos baratos a la burguesía industrial, y a la vez libera a ésta de impuestos en muy vasta escala, con lo cual se cierra una fuente de

ingresos de la cual disponía anteriormente, estamos —es evidente— frente a importantes contradicciones en la economía fiscal.

En el caso de la reforma agraria, la figura está clara, todo descansa sobre las espaldas del campesinado; pero en la industria, salvo a través del mayor esfuerzo que —como producto de su alienación— realice el obrero, incrementando la productividad; o a través de un muy dudoso y problemático aumento de los ingresos fiscales por efecto de una intensificación acelerada y notable de los negocios —aunque individualmente cada uno aporte menos que antes— no se ve cómo podrá el gobierno resolver este problema; claro está, bajo condiciones de estabilidad monetaria como supuesto de base.

De tomar una orientación inflacionaria, que es hacia donde apuntan los resultados lógicos de este breve análisis, muchas cosas cambiarían, entre ellas, quizás la principal, la suerte de la clase obrera, con sus organismos sindicales amenazados y sujeta a una tremenda presión confusionista por parte de reformistas-burgueses y revisionistas marxistas.

Pero el gobierno militar se ha amarrado sólidamente con el FMI en las operaciones de refinanciación de la deuda externa y no tiene las manos libres. Está obligado a velar por la estabilidad, en razón de sus propios compromisos internacionales, formalmente establecidos. Por ello la tendencia es hacia un incremento de la recesión iniciada en 1967 y hacia cada vez mayores problemas económicos fiscales. La recesión, por su parte, significará creciente desocupación y malestar social.

5. Conclusión

Volvemos al meollo de nuestro análisis: ¿qué características de clase y qué perspectivas políticas tiene el proceso político peruano? ¿Se trata de un proceso revolucionario antifeudal, antioligárquico, antimperialista, «de apertura democrática», de «sabor socializante»? O, como últimamente lo han estado definiendo los militares, ¿«nacionalista, humanista y popular»? De ese entreverado mejunje de calificativos, ¿puede sacarse algo en claro?

Lo primero que hay que señalar es el carácter de clase del proceso, toda caracterización que evada esto es confusionista.

El proceso político peruano de los dos últimos años es, sin ninguna duda, un proceso de afirmación burguesa, por lo tanto reaccionario. La diferencia con procesos anteriores está basada en el carácter reformista de éste y en su gran vitalidad, al estar siendo impulsado precisamente por quienes siempre fueron la amenaza y el freno para anteriores procesos reformistas: las Fuerzas armadas. Estas tuvieron en jaque durante 40 años a Apra, que quizás podría ser llamado padre del reformismo-burgués contemporáneo en la América latina.

Pronto tendremos al propio imperialismo dándole impulso al proceso peruano. Ya los primeros pasos en este sentido han sido y han quedado dados. Las inversiones japonesas que se anuncian son, precisamente, expresión de cómo este sector imperialista más desaprensivo que el norteamericano, ha comprendido rápidamente las posibilidades de la situación peruana.

El gobierno militar peruano viene aplicando un programa de reformas estructurales que apunta hacia una forma parcial de capitalismo de Estado. O si se quiere a una economía «mixta» pública-privada. El anunciado sector cooperativo no tiene importancia y es en verdad un apéndice del Estado, como se ha visto.

El sector estatal va a crecer, desarrollando industrias, ejerciendo control sobre la agricultura reformada, desarrollando el petróleo y las explotaciones mineras. Pero, al lado de éste, y apoyándose en éste, va a continuar su desarrollo el sector privado, en manos de la gran burguesía y el imperialismo.

Las relaciones entre ambos ciertamente no han de ser competencia; el sector público va a estar al servicio del capital privado. Así entiende su función este gobierno. Qué es pues lo que puede anticiparse como perspectiva sino la intención de desarrollar los negocios de la burguesía sobre la base de la explotación del pueblo. Es que «del cuero salen las correas». No hay alternativa bajo el capitalismo.

La variante de « justicia social » que pretende introducir el gobierno se refiere al hecho de que —puesto que ellos se han vuelto poderosos, controlan la economía, y ellos mismos van a invertir— al crear nuevos centros de producción darán empleo « bien remunerado » a los desocupados a la vez que « obligarán » al resto de los empresarios a hacer lo propio. Eso haría crecer la economía y es de allí que se obtendrían los mayores ingresos.

Este supuesto crecimiento capitalista es impugnable en un doble sentido: uno, porque no hace sino extender la explotación y aumentar las desigualdades en la distribución del ingreso; y dos, por lo impracticable, en el mediano plazo, con los métodos que se vienen aplicando. Es que el Estado no se convierte fácilmente en empresario-promotor. Las contradicciones que se generarán serán colosales.

Pero el Estado sí se convierte, rápidamente, bajo la ideología burguesa imperante y sin ningún control de masas, en un aparato corrompido-corruptor, cuando intenta aplicar el esquema enunciado. Este es el destino inmediato de este gobierno y los signos que se van haciendo evidentes no son sino una expresión mínima de lo que se cocina adentro y todavía no se trasluce.

Respecto del carácter progresista o no del gobierno, justamente el proceso chileno que se inicia viene trayendo un poco de luz al respecto. He allí lo que podría calificarse como un gobierno que se anuncia y tiene todas las posibilidades de ser un gobierno progresista. Progresista sin comillas de ninguna clase. No se trata de calificar aquí las posibilidades de salir adelante del régimen de Allende y de la Unidad Popular, pero sí podemos, sin vacilación, señalar su carácter progresista. Allí no se trata de « ni capitalismo ni comunismo » como en el Perú, sino se trata de caminar hacia el socialismo, de sentar las bases, desbrozar el camino, abrir las puertas, en fin, aproximarse a ello. En el Perú todos los esfuerzos del gobierno se orientan a evitar la alternativa socialista y a permitir la continuación del dominio del capital y de la burguesía.

Y no es que en Chile se trate —tampoco— de hacer una revolución democrático-burgue-

sa, no hay, creo, cuestión de ello. En lo político, la etapa debe ser aprovechada para que, bajo condiciones de libertades democráticas, y desde las inconmensurables oportunidades que otorga la administración del gobierno, trabajar por la consolidación de una firme y combativa conciencia proletaria entre las masas, fortalecerlas ideológica y orgánicamente, preparándolas para que estén en condiciones de enfrentar la siguiente más dura etapa de la lucha por el poder, por todo el poder. Eso significa una dura lucha ideológica contra las corrientes burguesas y pequeño burguesas, toda conciliación sería fatal.

Queda entonces, ahora sí, por último, la cuestión de si, en vista de las circunstancias políticas que se dan, el papel que corresponde a las masas, y a las vanguardias revolucionarias, es el de esperar, quedar atentos y a la expectativa, esperando ver si « por la dialéctica del proceso » llega a aparecer una variante progresista, o todo él se torna progresista y entonces, ni modo, hay que sumarse y apoyar. Este es el último argumento que puede quedar a quienes con intenciones revolucionarias apoyan al gobierno militar peruano. Pues, a nuestro juicio, este « argumento » es quizás el más confusionista y dañino de todos. Como tesis para las masas y sus vanguardias, sería simplemente liquidador, ideológica y orgánicamente nocivo y destructor. ¿En nombre de qué estarnos quietos y a la expectativa? Quienes eso plantean parecerían querer hacernos renunciar a nuestro deber militante de recoger en las masas, beber en ellas, sistematizar a la luz del marxismo-leninismo y volver a ellas para orientarlas y conducir las en sus combates por terminar con la explotación, con planteamientos y líneas programáticas que de ellas mismas han nacido.

Todo el avance que se ha producido, y todo el que se vaya a producir será resultado de la lucha de clases y en esa lucha los marxistas-leninistas tenemos un puesto, del lado de la clase obrera, el campesinado y demás sectores oprimidos de la población, conduciendo sus luchas contra el capital.

Para la izquierda revolucionaria, las perspectivas políticas en el Perú no son malas sino

buenas. Los militantes fracasarán, y con ellos fracasará el Partido Comunista peruano (pro-URSS) y todos los grupos trotskistas que se han sumado a esa posición. De este fracaso no deberá salir triunfador el imperialismo —y la gran burguesía— para reemplazar al actual equipo reformista burgués por uno conservador (aunque ambos reaccionarios). De este fracaso saldrá triunfador el pueblo oprimido, siempre y cuando quienes tenemos la responsabilidad de guiarlo hacia la des-

trucción del Estado burgués y la construcción del socialismo hayamos sido capaces de mantenernos a su lado para esclarecerlo y a su vanguardia para conducirlo.

Las fuerzas reaccionarias son gigantescas pero la ideología revolucionaria lo es mucho más. Es nuestro deber llevarla a las masas y fusionar, a través del partido, pensamiento y acción.

México, noviembre de 1970

Novedad Ruedo ibérico

León Trotsky

1905. Resultados y perspectivas

Sumario

Tomo I. 1905 (primera parte). Prefacio del autor. Prefacio del autor a la edición alemana (1909). 1. El desarrollo social de Rusia y el zarismo. 2. El capitalismo ruso. 3. El campesinado y la cuestión agraria. 4. Las fuerzas motrices de la revolución rusa: la ciudad moderna; la gran burguesía capitalista; la democracia burguesa; el proletariado; la nobleza y los propietarios de bienes raíces; el campesinado y la ciudad; el carácter de la revolución rusa. 5. La «primavera». 6. El 9 de enero. 7. La huelga de octubre. 8. Formación del Soviet de Diputados Obreros. 9. El 18 de octubre. 10. El ministerio de Witte. 11. Los primeros días de libertad. 12. Los sicarios de Su Majestad. 13. El asalto a las Bastillas de la censura. 14. La oposición. 15. La huelga de noviembre. 16. «¡Las ocho horas y un fusil!». 17. El mujik se rebela. 18. La Flota roja. 19. En el umbral de la contrarrevolución. 20. Los últimos días del soviét. 21. Diciembre. 22. Conclusiones.

250 páginas

16,50 F

Tomo II. 1905 (segunda parte). Prefacio del autor (1905). 1. El proceso del Soviet de Diputados Obreros. 2. El soviét y los tribunales. 3. Mi discurso en el tribunal. 4. Deportado. Cartas escritas durante el camino. 5. El regreso. 6. El partido del proletariado y los partidos burgueses en la revolución. **Resultados y perspectivas.** Nota del editor. Las fuerzas motrices de la revolución. 1. Particularidades del desarrollo histórico. 2. Ciudad y capital. 3. 1789-1848-1905. 4. Revolución y proletariado. 5. El proletariado en el poder y el campesinado. 6. El régimen proletario. 7. Las condiciones previas del socialismo. 8. El gobierno obrero en Rusia y el socialismo. 9. Europa y la revolución. Apéndice: Prefacio del autor (1919). Índice onomástico.

220 páginas

16,50 F

La resistencia palestina y los movimientos de liberación nacional

«En las actuales condiciones históricas de América latina, la burguesía nacional no puede encabezar la lucha antifeudal y antimperialista. La experiencia demuestra que en nuestras naciones esa clase, aun cuando sus intereses son contradictorios con los del imperialismo yanqui, ha sido incapaz de enfrentarse a éste, paralizada por el miedo a la revolución social y asustada por el clamor de las masas explotadas [...]» (Fidel Castro: Segunda declaración de La Habana, 4 de febrero de 1962.)

Un cuarto de siglo escaso ha transcurrido desde la instalación del aparato estatal israelita en Palestina; en este periodo de tiempo, tres guerras consecutivas han conmocionado el Oriente Medio; motivadas las tres por la presencia en la zona geográfica de un Estado, el israelita, agente del imperialismo. En estos años, pese a tremendas dificultades y contradicciones, los pueblos árabes y la opinión progresista mundial han tomado conciencia lentamente de los problemas implícitos en la cuestión de Oriente Medio y en la tragedia del pueblo de Palestina.

Tres fenómenos han contribuido especialmente al esclarecimiento de los factores y elementos que componen la superficie, la corteza, del conflicto. En primer lugar, la política totalmente agresiva del imperialismo frente a los pueblos del Tercer mundo que buscan su autonomía política y su independencia económica. En segundo término, el triunfo o el inicio de distintos movimientos de liberación nacional que, en diversos continentes, han conseguido imponer o están imponiendo sus propias ideas sobre su propia autodeterminación; nos referimos concretamente a la Revolución china, a la Revolución cubana y la Revolución vietnamita. Y, en tercero y último lugar, la adecua-

1 ción de los movimientos triunfadores con la única vía que garantiza su victoria, la vía socialista, poniéndola en consonancia no sólo con sus peculiaridades políticas, culturales y económicas, sino también definiéndose concretamente en función de la forma de su lucha contra el imperialismo.

Ahora bien, estos tres hechos que se desprenden de un frío y cómodo análisis intelectual, revisten ciertas y graves dificultades cuando se aplican a un escenario concreto. Máxime, como es el caso del Oriente Medio, cuando no es uno solo el problema que se plantea, sino que son varios. Son múltiples los protagonistas y cada uno de ellos tiene, además, sus intereses particulares y contradictorios; factor decisivo que se agrava cuando esta diversidad de intereses se produce entre sujetos estatales y nacionales que, teóricamente, se alinean en un mismo campo ideológico.

Antes de proseguir, conviene dejar sentadas las mínimas bases de entendimiento; aquellos hechos que, por haberse materializado con el paso del tiempo, se encuentran ya fuera de toda discusión. Estos hechos, de manera muy resumida, nos indican los niveles distintos en que se mueve el conflicto de Oriente Medio y el problema palestino, así como los factores influyentes sobre ambos. El primer

dato con el que inexorablemente hay que contar es con la existencia misma del Estado de Israel; aunque Israel sea un «hecho colonial», como tan acertadamente ha señalado Maxime Rodinson. Sobre los rasgos que caracterizan el Estado israelita hay una unanimidad absoluta: *teocrático*, discriminador, imperialista y, en consecuencia, portador de una ideología agresiva expansionista; pero asimismo, y por encima de sus rasgos, es un hecho real: el Estado de Israel existe y se encuentra situado en Oriente Medio, cuenta con veintitrés años de implantación en la zona y con una población joven allí nacida; Estado que es, repetimos, una avanzada clave del imperialismo y que cuenta con un potencial militar, industrial y tecnológico, altamente desarrollado; potencial que, en el orden agresivo, le hace ser superior a todos sus vecinos árabes y que se encuentra dispuesto a no ceder un ápice en sus posiciones de fortaleza y de superioridad territoriales, militares y económicas. Pero que, por último, tampoco carece de contradicciones en su interior; contradicciones que se irán multiplicando según se vaya incrementando su poderío.

El segundo dato atañe a los Estados árabes fronterizos de Israel y víctimas de su agresividad expansionista. Tales Estados, como todos los del Tercer mundo, son un fruto directo de la anterior dominación colonial europea y resultado del artificial proceso descolonizador consecuente. Los pueblos que componen estos Estados fueron, primero, víctimas de la explotación económica, política y cultural europea; y, después, han sido víctimas de sus propias oligarquías y clases dominantes que, en la mayoría de los casos, han sustituido simplemente al poder colonial europeo en la explotación de sus pueblos. Los cuales, salvo alguna excepción, como puede ser el caso de Egipto, sin contar con un proceso histórico similar y sin tener una típica división en clases sociales, se han dedicado a imitar torpemente los moldes europeos; error en el que han incurrido igualmente las oligarquías y los grupos de oposición a esta dominación; es decir, no han seguido una vía autóctona, no han tenido en cuenta los factores peculiares que cons-

tituyen la esencia de su entidad histórica. Estos pueblos árabes, por una parte, sólo han contado históricamente con un campesinado y una oligarquía terrateniente aristocrática que antes estuvo al servicio del poder colonial europeo y ahora desempeña directamente las funciones de explotación; en muy pocos casos, salvo en el de Egipto, ha existido un proceso económico y cultural que haya dado lugar al nacimiento de una burguesía nacional como clase y con conciencia de tal. Por encima de este aparato estatal se han constituido históricamente unos ejércitos nacionales que, en el peor de los casos están al servicio de la oligarquía y, en el supuesto más optimista han sido válidos para acabar con el colonialismo europeo pero sin dar el paso revolucionario siguiente; tampoco faltan los casos intermedios, en los que el ejército se ha limitado a derribar a la oligarquía en el poder y ocupar su puesto.

En consecuencia, la mayoría de los actuales Estados árabes han recibido una pesada herencia de la dominación colonial: la cultura propia destruida o seriamente afectada, la economía hipotecada o gravemente deteriorada y unas fronteras impuestas, artificiales, huella de los antiguos protectorados o de los mandatos de la Sociedad de Naciones. A ello, han venido a sumarse las propias contradicciones internas: la explotación económica por la oligarquía o por la casta militar de turno, la enajenación de la cultura autóctona y la condición miserable del campesinado. Es indudable que, con esta suma de factores, difícilmente puede haberse dado un proceso de formación de una conciencia nacional, análogo al de los Estados europeos. Pues bien, con este bagaje, se han enfrentado militarmente, como es sabido, en tres ocasiones los Estados árabes al hecho colonial que suponía la implantación imperialista del Estado de Israel. Pero, hoy, en la actualidad, a partir de la guerra de junio de 1967, los gobiernos árabes combaten por una reivindicación mucho más modesta: la devolución de los territorios ocupados por el ejército israelita.

Sobre este hecho, un tercer elemento: la presencia física de las dos superpotencias. Desde 1945, los enfrentamientos siempre

indirectos entre los Estados Unidos y la URSS, salvo la excepción de Berlín, han tenido como escenario la geografía del Tercer mundo: Corea, Vietnam, también Cuba y ahora Oriente Medio. Precisamente, las zonas sobre las cuales no se había efectuado un reparto de competencias territoriales ni tampoco una distribución de influencias ideológicas. Conviene recordar, una vez más, que cuando las superpotencias actúan en el Tercer mundo lo hacen en función de sus intereses propios y nunca se sitúan al servicio de los pueblos subdesarrollados que son los protagonistas directos y que pueden ser instrumentos, más o menos conscientes, de un peligroso juego en el que los que arriesgan son precisamente los pueblos del Tercer mundo. La penetración norteamericana y soviética en Oriente Medio es un hecho que no necesita demostración; su presencia física pone en movimiento o paraliza, de acuerdo con sus intereses, los conflictos armados. La más reciente demostración la tenemos en el impulso que la negociación Jarring, así como las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han recibido de americanos y soviéticos. Y, por el momento, una conclusión provisional: la presencia física de los Estados Unidos ha servido para garantizar la seguridad militar del imperalismo en la zona, para proteger los intereses económicos propios o de otros inversores capitalistas y para ahogar los movimientos de liberación; la presencia soviética, por el contrario, no ha sido hasta ahora un factor que haya movilizad el proceso revolucionario de los pueblos árabes.

Y sobre estos tres elementos (Estado de Israel, Estados árabes y superpotencias), una víctima total y un sujeto activo, potencialmente revolucionario, e incómodo para todos: el pueblo palestino. Los palestinos constituyen el grupo humano que más duramente ha sufrido el hecho colonial y la implantación imperialista en dicha área geográfica; poblador, desde hacía siglos, del territorio sobre el que se ha constituido por la fuerza el Estado de Israel, fue expulsado por la violen-

cia y se convirtió en un pueblo de refugiados. Cada guerra que tenía lugar empeoraba aún más su ya difícil situación. Desde 1948 ha vivido en una posición menesterosa: hostigado por el sionismo, malviviendo en los campos de refugiados, discriminado en los Estados árabes que forzosamente los asilaban, los palestinos han experimentado en los últimos años un aceleradísimo proceso de concienciación política.

La lucha armada de la Resistencia palestina ha invertido, ha transformado radicalmente, los términos del problema. A partir de la guerra de junio de 1967, los palestinos han visto claramente algo que ya antes habían comenzado a vislumbrar: primero, víctimas del agresionismo israelita; después, instrumentos utilizados por los gobiernos árabes para disimular su incapacidad revolucionaria y para ser empleados también como fuerzas de choque frente al potente ejército israelita. Desde 1967 hasta 1970, la Resistencia palestina ha experimentado un importante crecimiento cuantitativo y cualitativo; cuantitativo, porque ha conseguido movilizar a todo el pueblo palestino; cualitativo, porque la misma dinámica de la lucha armada y la forma de llevarla a cabo ha impuesto la toma sucesiva de posiciones ideológicas más avanzadas, en una palabra más revolucionarias.

Sin embargo, el rápido desarrollo de la Resistencia palestina se ha encargado de poner al desnudo las contradicciones que afectan a los pueblos árabes, consigo mismos y frente a Israel. Tras la guerra de 1967, resultó evidente que los intereses palestinos difieren fundamentalmente de los intereses directos de los gobiernos árabes; éstos, persiguen la recuperación de sus territorios perdidos; los palestinos, en una primera acción, luchan pura y simplemente por regresar a Palestina. Al mismo tiempo, la lucha victoriosa de la Resistencia palestina conquistaba ideológicamente a las masas *oprimidas* árabes. Comenzaba a operarse el paso del proceso de reivindicación, que podemos denominar provisionalmente nacionalista, a una etapa superior de objetivos revolucionarios.

¿ En función de qué mecanismo dialéctico se produce esta transición ? Para llegar a una comprensión de esta maduración revolucionaria es preciso emplazar el hecho palestino dentro del contexto mundial. El hecho palestino, por la trascendencia de su planteamiento, por las fuerzas regionales y mundiales enfrentadas, ha superado los reducidos límites de un conflicto local o zonal para adquirir un carácter total de conflicto universal. Más correctamente, en la segunda mitad del siglo XX ya no existe posibilidad real para las guerras clásicas, para los conflictos internos, para los enfrentamientos civiles. Es indudable que esta afirmación exige una más perfecta concretización y un emplazamiento cronológico, histórico e ideológico.

La Revolución soviética de 1917, es algo bien sabido, supone la aparición del primer Estado socialista ; desde 1917 a 1945 va el periodo que cubre este primer ensayo. El fin de la segunda guerra mundial es el hito que marca el comienzo de una nueva etapa de carácter planetario ; lo que antes había sido enfrentamiento entre capitalismo y socialismo, entra en una fase conflictiva superior que conduce a la actual disyuntiva, imperialismo contra Tercer mundo. Evidentemente, este juicio, por lo que tiene de esquemático, adolece de un tremendo simplismo. No obstante, estimamos que con todas las correcciones que se le pueden y deben imponer continúa siendo esencialmente válido. No consiste en ningún hallazgo revelador de ocultos secretos el afirmar que, a nivel de las dos superpotencias, tanto la segunda guerra mundial como el proceso posterior de coexistencia pacífica, con el intervalo de la guerra fría, equivale a una congelación del anterior periodo de contradicción entre capitalismo y socialismo. Más simplemente, las superpotencias procedían a una congelación, a un aplazamiento *sine die*, del problema fundamental ideológico, en función de las ventajas económicas y territoriales adquiridas.

El despertar del Tercer mundo es, precisamente, el fenómeno que, pese a los intereses superiores propugnadores del apaciguamiento, transformará el periodo anterior en el actual de confrontación entre imperialismo y Tercer mundo. Lógicamente, también hay que

2 referirse al crecimiento económico e industrial, así como militar, que finalmente ha hecho que el concepto teórico de imperialismo adquiera un rostro material, reconocible e identificable : los Estados Unidos de Norteamérica.

Ante este planteamiento de fuerzas, el movimiento de liberación de los pueblos del Tercer mundo solamente tiene una posibilidad de realización : la lucha total y abierta contra el imperialismo. Ahora bien, a veces este movimiento emancipador se ha visto frecuentemente obstaculizado no sólo por la gran barrera que ante su avance ha opuesto el imperialismo, sino también por sus propias contradicciones internas que han tenido efectos paralizadores. Al igual que en el interior de los países de capitalismo avanzado, las fuerzas progresistas han caído con frecuencia en vicios reformistas o se han estancado por la utilización de tácticas aliancistas con los propios enemigos de clase, también los pueblos del Tercer mundo han caído en trampas análogas para ser víctimas, una vez más, del neocolonialismo y del imperialismo.

El análisis de esta fase, para un observador europeo, observador lógicamente comprometido en una opción ideológica determinada, es doblemente peligroso. Primero, porque inconscientemente se ha venido aplicando a los movimientos de liberación del Tercer mundo una terminología inadecuada ; la terminología emanada de la experiencia europea que designa fenómenos sociales, culturales y económicos distintos. Segundo, porque el lenguaje utilizado por los teóricos marxistas se ha fosilizado y carece de la flexibilidad suficiente para integrar y desentrañar fenómenos que no habían sido plenamente incluidos en el campo de observación de la teoría marxista primera. Hay que señalar, sin embargo, que la misma lucha de los pueblos del Tercer mundo ha servido no sólo para renovar la anquilosada terminología marxista, sino también para enriquecer su teoría, a través de la práctica combativa y realizadora de « los condenados de la tierra ».

En 1971 contamos ya, afortunadamente, con ejemplos triunfadores y con otros en vía de materialización que indican, no modelos a

imitar ciegamente, pero sí la posibilidad de que cada pueblo consiga su emancipación dentro de un marco general único. No creemos necesario recordar las dificultades prácticas con que tropezó el pueblo chino para conquistar su entidad soberana, ni tampoco hay que repetir las polémicas teóricas que profetizaban la incapacidad revolucionaria del campesinado y aconsejaban una política aliancista con las fuerzas reaccionarias chinas. La lucha de este pueblo es un ejemplo de realización práctica, a un mismo tiempo, del combate anticolonial y de la revolución social. La proclamación de la República Popular China, en 1949, iba acompañada al mismo tiempo de la elección del socialismo como vía de desarrollo. Ejemplo análogo, con matizaciones pertinentes, lo está dando el pueblo vietnamita que, en una misma lucha, está cubriendo todas las etapas del combate total: enfrentamiento y victoria sobre el colonialismo francés y japonés, resistencia total a la agresividad imperialista (que ha demostrado su impotencia para vencer a un pequeño país subdesarrollado) y construcción del socialismo en la República Democrática de Vietnam del Norte y en las zonas liberadas de Vietnam del Sur. En la historia de la emancipación del pueblo vietnamita se observa, igualmente, la práctica ejemplar de una política de alianzas con otros grupos religiosos y clases sociales para conseguir el triunfo ante el enemigo inmediato en el combate contra el colonialismo: el poder imperialista; pero sin renunciar ni disimular el objetivo final, consistente en la victoria socialista en la península de Indochina. Por último, la Revolución cubana ofrece un ejemplo distinto pero igualmente enriquecedor de la práctica revolucionaria; cuando en enero de 1959 entran en La Habana las columnas libertadoras de la guerrilla de Sierra Maestra, empieza realmente la revolución. Cuba, una isla del Caribe, entre el subdesarrollo rural y el superdesarrollo colonial de La Habana, era un microcosmos de contradicciones ante el que se estrellaron multitud de análisis de laboratorio. Los hombres de Sierra Maestra se alzaban en armas contra una dictadura militar y su finalidad era instaurar, reinstalar, la democracia burguesa. Cuba contaba con

una sociedad distribuida en clases bien diferenciadas: una oligarquía terrateniente y un ejército al servicio del imperialismo; una clase burguesa de tradición liberal; y un proletariado urbano y campesino de gran combatividad reivindicativa y capacidad organizativa, principalmente en las ciudades. Cuba tenía, también, unos partidos políticos de clase y un importante aparato sindical. Contaba, igualmente, con un importante desarrollo cultural e intelectual. Y, por último, un arraigado sentimiento nacional de independencia frente a cualquier tipo de dominación colonial, como había sido ampliamente demostrado a partir de 1868 (fecha de la primera guerra contra la metrópoli española). Sin embargo, la alianza táctica establecida a principios de 1959 dura escasos meses; aquellos que tardan el gobierno y el pueblo en adoptar las primeras medidas socialistas, cuando se inicia la construcción revolucionaria. La experiencia cubana demuestra, ejemplarmente, cómo la forma de llevar a cabo la lucha puede por sí misma ser revolucionaria y hacer fracasar los análisis más rigurosamente ortodoxos.

China, Vietnam y Cuba, junto con Corea del Norte, que igualmente resistió la agresión imperialista, son hoy día los frentes más importantes en la lucha contra el imperialismo. Pero, ¿cuál es la razón? Sólo hay una respuesta definitiva: estos pueblos han elegido para su emancipación la única vía real existente, la desaparición de las clases sociales y, lógicamente, de la propiedad privada de los medios de producción. Estos pueblos han recuperado sus recursos propios, es decir han nacionalizado las empresas extranjeras y han suprimido las inversiones de capital foráneo; han igualado las condiciones de vida y de trabajo del proletariado rural y urbano, suprimiendo los privilegios de clase y también los de grupo, debidos a una práctica desviacionista burocrática; han elevado el grado cultural del país, en base a su folklore y costumbres autóctonas. Están construyendo un hombre con una mentalidad nueva y están dibujando un socialismo con un perfil distinto, el adecuado a sus características peculiares. Por todas estas razones son incompatibles el

imperialismo y la revolución de los pueblos del Tercer mundo.

El frente del Tercer mundo contra el imperialismo es único, en diferentes trincheras. Las más avanzadas son las de aquellos

pueblos que han realizado su revolución total, y no las de aquellos otros que, aumentando la confusión terminológica, llaman revolución a lo que sólo es una etapa intermedia de todo el proceso revolucionario.

¿Qué puesto ocupa en este planteamiento general la lucha del pueblo palestino? Sería pedante, por nuestra parte, diagnosticar enfermedades, detectar síntomas y recetar remedios. Hay algo por encima de la observación revolucionaria: la práctica revolucionaria. No obstante, sí es posible aportar algunos datos y constataciones descriptivas que ayuden, aunque sea parcialmente, a una comprensión mayor del fenómeno.

Junto a la península de Indochina, Oriente Medio es en la actualidad el frente más comprometido del imperialismo. La evolución de la lucha revolucionaria vietnamita y su extensión a los pueblos de Laos y de Camboya, así como la agresión directa de los Estados Unidos, hacen que el problema del sudeste asiático sea de una claridad meridiana. Las opciones revolucionarias de los pueblos de Indochina han sido clara y tajantemente tomadas; el imperialismo, por su parte, actúa directamente, sin utilizar terceros o agentes intermediarios.

La situación en Oriente Medio, por el contrario, es muy distinta y de una tremenda complejidad; aunque el rápido transcurrir de los acontecimientos, desde la guerra de 1967, ha clarificado bastante el marco en el que tiene lugar el conflicto. Al inicio de estas páginas, hemos señalado la multiplicación de protagonistas y de intereses que se concentran en una misma área geográfica; e, igualmente, la situación de protagonistas contradictorios en un mismo bando. El agravamiento del conflicto en los tres últimos años y la denuncia de las contradicciones exteriores e internas han sido causadas por la actitud revolucionaria del pueblo palestino. El cual ha sido, en realidad, el único protagonista de la lucha contra el imperialismo en Oriente Medio, en los tres años últimos; pero, también puede ser la víctima única, sacrificada

3 en beneficio de los intereses de las partes hasta ahora virtualmente contendientes. Desde 1967 hasta ahora, el pueblo palestino ha ido perdiendo sus aliados árabes; tanto los que eran aliados potenciales, como los que sólo eran aliados oportunistas. Nos referimos concretamente a los gobiernos que han sufrido en su propio territorio los efectos del expansionismo y de la agresividad israelita; no mencionamos, lógicamente, a aquellos otros gobiernos árabes que por su alejamiento geográfico del lugar del conflicto arriesgan muy poco o no arriesgan nada vital dando su apoyo material y su solidaridad moral a la causa palestina (y que en absoluto son aportaciones despreciables). Los sucesos de estos dos años últimos en el Líbano y en Jordania (especialmente los acontecimientos de septiembre de 1970 en Ammán) demuestran sin equívoco alguno que había y hay gobiernos árabes directamente interesados en el exterminio de la Resistencia palestina (en el exterminio o en la integración, en el caso de que los palestinos renuncien a sus reivindicaciones revolucionarias).

¿Por qué se ha producido esta ruptura entre los gobiernos árabes y la Resistencia palestina? A partir de 1967, esta colectividad, un pueblo entero de refugiados políticos, tras un largo proceso de conciencia política y social, asumió responsablemente su función protagonista en lo militar y en lo político. Los gobiernos árabes habían demostrado sobramente a sus propios pueblos, no sólo su incompetencia para el enfrentamiento con el poderío tecnológico israelita, representante y agente del imperialismo, sino también su incapacidad o, más exactamente, su desinterés revolucionario. A partir de 1967, la Resistencia palestina fue un instrumento utilísimo para los gobiernos árabes que se reponían de las fatigas y de los destrozos

bélicos, mientras que se replegaban hacia posiciones más conciliadoras. Pero este juego se ha revelado como sumamente peligroso: a través de la lucha del pueblo palestino, los demás pueblos árabes tomaban conciencia de sus propios problemas frente a sus respectivos gobiernos oligárquicos o seudosocialistas. El objeto que se pretendía instrumentalizar, el pueblo palestino, se convertía en sujeto primero del drama total de Oriente Medio y podía llegar a ser un motor revolucionario con respecto a los demás pueblos árabes.

El entendimiento entre las superpotencias, el acuerdo logrado en el Consejo de Seguridad en noviembre de 1967 y la puesta en marcha de la negociación Jarring, han culminado en la tregua desde el verano de 1970 y el cese de las hostilidades « oficiales » en todos los frentes. El entendimiento que condujo a este acuerdo provisional, encaminado a la obtención de una paz negociada, olvidaba que para su consecución era necesaria la aprobación palestina. Pero, la aceptación por la Resistencia palestina del plan de paz, paz de compromiso, hubiese equivalido al fin de la Resistencia misma y de sus aspiraciones revolucionarias. La respuesta conjunta a la actitud palestina ya es conocida: el exterminio intentado por el gobierno jordano, con el asentimiento de todos los partidarios de la solución negociada, de la Resistencia palestina. El drama de Ammán en septiembre de 1970 y el fracaso de todos los acuerdos entre la monarquía jordana y la Resistencia palestina están todavía muy recientes como para necesitar ser recordados: matanzas de palestinos en los campos de refugiados, desmantelamiento de las bases guerrilleras, desarme de los combatientes palestinos...

¿Qué demuestra la fase actual del conflicto? Una evidencia que nunca debe olvidarse: la unidad basada en lazos sentimentales, o en la misma pertenencia religiosa o incluso en una pretendida conciencia comunitaria nacional es tremendamente frágil y, sobre todo, no tiene nada que ver con la solidaridad real: la solidaridad entre las oligarquías y las clases dominantes tanto en Israel como en determinados Estados árabes. El apoyo aportado por estos gobiernos a la causa palestina

ha sido estrictamente coyuntural y oportunista: la alianza táctica se ha roto cuando el aliado se ha hecho molesto al convertirse en el único protagonista revolucionario y amenazar los intereses de la clase o del grupo en el poder.

Queda comprobado, pues, en primer lugar, que las únicas alianzas que de ahora en adelante puede realizar la Resistencia palestina serán las alianzas con las clases explotadas por los gobiernos árabes; y, si es posible (aunque ésta sea una meta mucho más distante), con la clase y grupos discriminados en el interior mismo de Israel; no se puede caer nuevamente en la trampa del entendimiento aliancista con gobiernos árabes contrarrevolucionarios.

En segundo lugar, y por último, la pasada crisis, aún no totalmente superada, subraya que ahora se abre una nueva etapa en la lucha del pueblo palestino. Una etapa de realismo en la apreciación de los problemas propios y en los métodos de lucha para su solución. Estimamos que el planteamiento actual del conflicto, los intereses coincidentes de las superpotencias presentes en la zona, la importancia vital que para el imperialismo tiene Oriente Medio, son otros tantos factores que hacen que el problema palestino desborde el marco reducido y nunca bien definido de unos límites nacionales o nacionalistas. Y es evidente que, para gran parte de los pueblos del Tercer mundo, el concepto de « nación » no tiene el mismo contenido que en Europa; en el marco de los países árabes son pocos los pueblos que han experimentado el proceso de formación de una conciencia nacional, con la excepción ya mencionada de Egipto. En el mundo árabe no se ha producido el fenómeno industrial ni de acumulación de capital que permite la formación de una clase burguesa; en la mayoría de los casos nos hallamos ante seudoburguesías nacionales (sabemos que utilizamos una denominación imprecisa y pendiente todavía de concretización) que enmascaran a otra clase o grupo dominante. Aunque se trate de una apreciación excesivamente esquemática, las dos únicas clases, en el sentido riguroso del término, con que nos encontramos en los países árabes, son la

oligarquía y el campesinado, con algunos grupos urbanos proletarizados y otros grupos de funcionarios y comerciantes al servicio de la oligarquía (oligarquía feudal o militar, pero siempre propietaria del poder económico, en nombre propio o en nombre ajeno, y del poder político). Parece evidente que en este mecanismo clarificador, en este proceso depurador, no sólo se perderán aliados tácticos, sino que incluso parte de la Comunidad palestina se quedará atrás; nos referimos a los sectores seudoburgueses que pueden haberse formado en los países árabes de residencia obligada y cuyos objetivos indudablemente no son ya revolucionarios. Igualmente desaparecerán o tendrán que transformarse profundamente los grupos políticos de la Resistencia palestina que hayan sido superados por la misma dialéctica del combate y permanezcan anclados en posiciones reformistas.

La descripción de la fase actual del conflicto puede parecer, a primera vista, pesimista y excesivamente dura; nuestro objetivo es, en realidad, centrar la situación conflictiva en una perspectiva correcta. Si, por una parte, se pierden aliados perjudiciales es indudable que, por otra parte, la Resistencia y el pueblo palestinos cuentan con unos compañeros de

revolución mucho más seguros y de objetivos comunes; aludimos al proletariado de los países árabes.

Repetimos, una vez más, que no habrá revolución palestina sin revolución árabe. Que el pueblo palestino reúne las condiciones objetivas para ser el catalizador de todo el movimiento revolucionario. Que sólo hay un camino válido en la lucha contra el imperialismo y es la vía de la revolución socialista; la única, precisamente, que no tolera el imperialismo.

Esta es la situación actual. Un momento de reflexión entre una etapa que finaliza dramáticamente y otra que aún no ha comenzado. Un momento de clarificación en el seno mismo de la Resistencia palestina, que habrá de eliminar los posibles peligros de aburguesamiento y habrá de administrar inteligentemente los impulsos optimistas o precipitadamente triunfalistas. Pero sin olvidar nunca que los aliados y los compañeros se encuentran siempre a la izquierda; pues nunca ocurrirá que la vanguardia revolucionaria sea la que en el interior de un movimiento de liberación defienda posiciones reformistas.

Madrid, 6 de febrero de 1971

Editions Ruedo ibérico

Robert Garland Colodny

El asedio de Madrid 1936-1937

Prólogo a la edición española. Prólogo a la edición inglesa. Introducción. 1. La carretera de Toledo. 2. El asalto a Madrid. 3. El asedio de Madrid. Epílogo. Notas. Bibliografía. Índice de nombres.

304 páginas

82 documentos fotográficos

30 F

Abú Isbilya

Revolución en Palestina e información en España

Nathan Weinstock: El sionismo contra Israel. Una historia crítica del sionismo. (Prefacio y traducción de Francisco J. Carrillo.) Editorial Fontanella, Barcelona, 1970.

Con una relativa frecuencia el esfuerzo de algunas editoriales españolas se traduce en la publicación de libros **fundamentales**, pese a la máquina depuradora de los inquisidores-censores del ministerio de Sánchez Bella. Entre tales libros claves es preciso señalar el escrito por Nathan Weinstock, publicado originariamente en su versión francesa por Editions Maspéro y puesto al día en su versión castellana. En él se hace una historia crítica del sionismo —como reza su subtítulo— a la luz del análisis marxista. Un trabajo minuciosamente elaborado y ampliamente dotado de una importantísima referencia bibliográfica. Abarca el gran período de la historia del pueblo judío hasta 1970. Representa una aproximación a tal proceso y, sobre todo, la primera aproximación marxista al análisis del sionismo y a su consecuencia práctica principal: la creación del Estado judío, en la confluencia de intereses sionistas y del colonialismo europeo-norteamericano. En tal proceso de implantación colonialista, con la complicidad manifiesta del imperialismo francobritánico primero, yanqui después, Nathan Weinstock —militante revolucionario de origen judío con posiciones netamente antisionistas— centra y desempolva públicamente los orígenes de la lucha de liberación nacional en el Oriente próximo, el papel y formación de los partidos comunistas de la zona, la política de la Komintern, la formación del trotskismo medio-oriental y el papel ambivalente y finalmente traidor de los notables y clanes locales. Era de esperar que Weinstock abordara la época de recrudescencia del antisemitismo y del racismo «moderno», destruyendo las típicas mistificaciones oficiales del estalinismo y de la socialdemocracia europea. En efecto, tal clarificación aparece en el trabajo que comentamos. «El racismo traduce la necesidad permanente de expansión del capital (lucha por los mercados exteriores) y la ausencia de alternativas interiores a nivel de la pequeña burguesía y de las clases medias. El fascismo explotará el antisemitismo mantenido por la concurrencia nacional encarnizada de la pequeña burguesía», afirma el autor. El antisemitismo contemporáneo, según Abraham León, citado por Weinstock, es un «disfraz ideológico del imperialismo moderno». Y termina el autor con unas frases esclarecedoras, apoyándose

en Daniel Guérin: «El nacionalsocialismo se esforzará en canalizar estas tendencias antisemitas a fin de **transmutar el anticapitalismo de las masas en antisemitismo**. Alimenta deliberadamente los prejuicios racistas que oscurecen la conciencia proletaria y dividen a los trabajadores.»

Nathan Weinstock da unos importantes puntos de referencia a la hora de abordar la creación del Estado de Israel y sus consecuencias múltiples. Se detiene particularmente ante la llamada «cuestión palestina»; presenta un **dossier** bastante completo de la política militarista y expansionista del equipo dirigente sionista. La expoliación de una nación, las represalias, masacres, torturas, campos de concentración (¡terrible paradoja!), campos de refugiados. Las guerras sucesivas con la complicidad del Occidente. El nacimiento de una nueva resistencia organizada de la Nación palestina; la consolidación de una corriente israelí antisionista. El autor incorpora a su trabajo las plataformas y declaraciones políticas de las principales organizaciones de Resistencia palestina (Al-Fatah, FLP, FDPLP, Matzpen israelí) junto a unas consideraciones propias sobre las posiciones de Marx, Lenin y Borjov en torno a la cuestión judía y la cuestión nacional.

El autor se manifiesta en pro de unas vías de solución del conflicto israeloárabe sobre la base del derecho de la nación palestina árabe y de la comunidad hebraica a disponer de sí mismas. Desde una inequívoca posición internacionalista proletaria, desenmascara al nacionalismo sionista. Su visión antimperialista le lleva a pronunciarse en favor de una **desionización** de Israel; de una lucha antisionista en el marco de la revolución socialista en Palestina, en donde reconoce en la Resistencia palestina su vanguardia legítima. Considera que éste es el único camino para lograr una plena liberación de la Palestina usurpada y la única manera de asegurar la integración de los israelíes en el interior de un mundo árabe reunificado y renovado, garantizado en los márgenes de una Federación socialista de la zona.

Con la publicación de este libro en España se consigue dar otro paso hacia adelante para dotar a la opinión política (a la opinión marxista en particular) de una elaboración teórica, fiel reflejo

de un método de análisis marxista muy distante del que hasta ahora fue habitual en la *intelligentsia* estalinista (en nuestro caso particular, a la hora de tomar posiciones y dar instrucciones sobre la política a seguir respecto al llamado «tercer mundo» y, muy específicamente, en relación a las luchas de liberación nacional en el Levante mediterráneo). Tal libro, en gran medida, cubrirá un enorme hueco ya que el tema fue sistemáticamente marginado de la política internacional del PCE¹ en lo que se refiere al análisis de la revolución socialista en el Oriente próximo, por no remontarnos a la ausencia de sus análisis respecto al colonialismo español (Marruecos, Ifni y su asombrosa ausencia ante la «sangría» de Guinea y su posterior proceso de independencia en el que, dicho sea de paso, dejó el PCE vía libre a las maniobras «constitucionalistas»² de la socialdemocracia madrileña en estrecha connivencia con los «independentistas» de Castiella). También, posiblemente, y por las mismas razones, elevará la conciencia anticolonialista de muchos militantes y les ayudará a una mejor comprensión del colonialismo español agonizante, pero manteniendo residuos tales como el filón de fosfatos e hidrocarburos en el Sahara y las zonas estratégicas, hoy símbolo, ayer escuela de los «africanistas» contrarrevolucionarios, situadas en Ceuta y Melilla. Y sin duda alguna, constituirá el trabajo de Weinstock un valioso auxiliar para una mejor comprensión de la política proimperialista mediterránea del Estado franquista y la explicación de algunos hechos tales como la tan traída y llevada amistad con el mundo árabe, la política de complicidad descarada con los regímenes terroristas de Marruecos y Túnez, la intoxicación «humanista» con el problema palestino, por no citar extensamente la «diplomacia secreta» con el Estado sionista...

Es un libro que, aunque la empresa editora lo incluya en su colección **Informes**, representa una

de las elaboraciones marxistas más importantes realizada hasta el momento sobre un tema tan controvertido como es el del Estado sionista frente a la expoliación de la nación árabe de Palestina y frente a su lucha revolucionaria.

1. Es preciso señalar, sin embargo, una reunión pública, de carácter anticolonialista, organizada en Roma (1970) por el PCI y el PSIUP, en la que también se abordaba el conflicto en el Oriente próximo. En tal reunión, a la que asistían representantes de la Resistencia palestina, Santiago Carrillo, secretario general del PCE, toma posición frente al problema y hace suyas las reivindicaciones de Al-Fatah, citando expresamente a tal organización. Hecho nuevo, ante el que sin duda quedaron muy complacidos los representantes palestinos y, también, los que asistían en nombre de la Resistencia griega.

2. Son conocidas las continuas maniobras de la socialdemocracia (y más concretamente las del llamado partido socialista «del interior») en el asunto de la independencia de Guinea Ecuatorial. Es sorprendente la inacción del PCE a este respecto (al igual que otros grupos de la izquierda marxista), dando luz verde no sólo para que el proceso constitucional quedara en manos de los socialdemócratas, sino también reconociendo al mismo tiempo, y de manera tácita muy expresiva, a los «nuevos protectores» en las personas de aquéllos. No hay duda que el neocolonialismo, y no sólo económico (que en Guinea es importante a pesar del voluntarismo de Macías y de su carrera de aproximación a Pekín), puede presentarse con muchas y diversas máscaras. Sin embargo, es preciso notar que la lucha israeloárabe, típico conflicto imperialista, ha sido frecuentemente abordado en los análisis de organizaciones políticas de «extrema izquierda» o de la llamada «nueva izquierda» (corrientes maoístas, trotskistas, frentistas); aunque ya sean documentos históricos, podríamos citar los textos presentados a la Conferencia de Fuerzas Antimperialistas de Roma 1968 y a la Jornada Internacional de la OSPAAAL sobre Palestina 1969, elaborados por las hoy desaparecidas Organizaciones Frente).

Verena Martínez Alier

Virginidad y machismo :

El honor de la mujer en Cuba
en el siglo XIX

El análisis que sigue se centra principalmente en el papel que jugaba el rapto como mecanismo para vencer la desigualdad social concebida como obstáculo al matrimonio en una sociedad jerárquica. Este mecanismo era eficaz sólo cuando la distancia social no excedía ciertos límites.

El rapto con vistas al matrimonio era una institución tan común que aparece como algo natural en la literatura popular de la época. Así en *El perro huevero*, sátira costumbrista, Mónica, la hija de Matías, se fuga con Mamerto « El Indiano » y luego prometen casarse legalmente. Cuando la obra se representó en La Habana poco después de comenzar la Guerra de los Diez Años, los « Voluntarios » promovieron una algarada : Matías, jugador de gallos y barajas, no era otro que el propio gobierno español, Mónica era la isla de Cuba que quería independizarse del yugo colonial y Mamerto los insurrectos¹.

Para entender el papel que jugaba el rapto, es preciso referirse a la legislación matrimonial en vigor en España y sus colonias en el siglo XIX. En los últimos veinte años del siglo precedente y durante los primeros del XIX, se promulgaron una serie de leyes cuyo carácter era cada vez más restrictivo. En lo que concernía a la Iglesia, había una total libertad de matrimonio. Teóricamente, el Estado se regía por el mismo principio ; sin embargo había habido frecuentes disputas al respecto entre las autoridades eclesiásticas y civiles. Típico de estos desacuerdos es el conflicto que surgió cuando el papa Benedicto XIV decidió, en 1741, que los hijos de matrimonio secreto, llamado comúnmente « de conciencia », tuvieran idénticos derechos en lo que se refiere a la herencia, dado que precisamente ese tipo de matrimonio estaba previsto para contrayentes desiguales. Las autoridades civiles protestaron, « pues el ordenar las sucesiones y arreglar los contratos pertenece a la república civil y a la autoridad de los soberanos y no a la potestad eclesiástica que sólo atiende directamente al fuero interno y al bien espiritual de las almas »². Se trataba, más que de un conflicto jurisdiccional, de una cuestión más fundamental : la igualdad o la desigualdad de la gente. La Iglesia se hallaba ante un dilema ; por un lado su ideología le dificultaba instituir tipos diferentes de matrimonio con efectos diferentes para distintas categorías de gente ; por otro lado tampoco podía permitir los concubinatos que con tanta frecuencia resultaban de la desigualdad social de los pretendientes. En 1775, una

1. Rincón Leal : « Qué viva la tierra que produce la caña », Cuba, octubre de 1968, p. 23.

2. Richard Konetzke (ed.) : *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810* [en lo sucesivo, CDFS], Madrid, 1953-1962. III : 1, p. 404.

Junta de Ministros que aconsejaba al rey sobre los medios para evitar matrimonios desiguales sostuvo que el principio general por el cual el matrimonio religioso surtía todos los efectos civiles incluso cuando los contrayentes fuesen extremadamente desiguales y actuaran contra la voluntad de sus padres, daba lugar a los daños siguientes: primero, «por quedar hábiles los hijos para la sucesión de sus padres en sus bienes, derechos y honores [...] de esto provienen los pleitos, disensiones y enemistades y el desdoro de las familias»; segundo, en consecuencia, «algunos sujetos de ilustre nacimiento, considerando los referidos perjuicios que causarían a su familia y a la gloriosa memoria de sus antepasados o temiendo la justa indignación de sus parientes o por otros estorbos o embarazos que se les ofrecen no se atreven a contraer semejantes matrimonios desiguales, incurren en otro lastimoso exceso, como el de cegarse de la pasión y vivir en un perpetuo amancebamiento con ruina espiritual de sus almas y escándalo de los fieles [...]»³

Con la llegada a España de las ideas de la Ilustración a finales del siglo XVIII, comenzó a discutirse la abolición de los mayorazgos, la desamortización de las propiedades eclesiásticas y municipales, la limitación de los poderes de la Inquisición, la libertad de comercio, etc. Sin embargo, la legislación matrimonial de la época se fue tornando cada vez más restrictiva. En 1776 se promulgó la **Pragmática Sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales**, para combatir la «mal entendida libertad de matrimonio absoluta». Se hacía obligatoria la obtención del consentimiento paterno para los menores de veinticinco años, y la obtención del consejo paterno para los mayores. Si se celebraba el matrimonio sin consentimiento o consejo paterno los contrayentes perdían el derecho de heredar. El criterio que definiría la «racionalidad» del disenso paterno era que el proyectado matrimonio «ofendiese gravemente el honor de la familia o perjudicase al Estado»⁴. En 1778, «teniendo presente que los mismos y mayores perjudiciales efectos se causan de este abuso en mis Reinos y Dominios de las Indias por su extensión, diversidad de clases y castas de sus habitantes [...]» se comunicó esta Pragmática Sanción a las Indias para que se guardara y cumpliera⁵. Según parece, sin grandes resultados prácticos, pues hubo numerosas consultas eclesiásticas referentes a casos de matrimonios en que los contrayentes estaban dispuestos a ser desheredados y casos en que «razones de conciencia» exigían el matrimonio. En 1803, una Real Cédula estableció la mayoría de edad en veintitrés años para los hombres y veinticinco para las mujeres como límite a partir del cual podían casarse a su arbitrio. Los menores que se casaran sin consentimiento paterno y los clérigos que los casaran incurrían en la pena de expatriación y en la de confiscación de sus bienes⁶.

3. CDFS, III: 1, p. 402.

4. CDFS, III: 1, p. 406-413.

5. CDFS, III: 1, p. 438-442.

6. CDFS, III: 2, p. 794-796.

La Pragmática Sanción de 1776 comprendía « desde las más altas clases del estado sin excepción alguna hasta las más comunes del pueblo [...] por la gravedad de la elección de estado con persona conveniente [...]», pero al comunicarse a las Indias se excluyó a « los mulatos, negros, coyotes e individuos de castas y razas semejantes tenidos y reputados públicamente por tales, exceptuando a los que de ellos me sirvan de oficiales en las Milicias o se distingan de los demás por su reputación, buenas operaciones y servicios, porque éstos deberán así comprenderse en ella [...] »⁸. Se admitía pues que algunos miembros de esas « castas » tenían reputación, es decir, honor que defender. Los demás, careciendo de él, no tenían necesidad de protegerlo mediante algún tipo de control sobre matrimonios. Sin embargo, algo más tarde la Real Cédula de 1803 fue más generosa y comprendía en la necesidad de pedir consentimiento paterno a todos los menores de « cualquiera clase del Estado [a] que pertenezcan », lo que fue reiterado por Real Cédula del 15 de octubre de 1805 —que inmediatamente pasamos a considerar— y también, en lo que a Cuba se refiere en el Auto de la Audiencia de Puerto-Príncipe de 1806 : « los negros, mulatos, y demás castas menores de la edad respectiva [...] quedan sujetos a solicitar y obtener la licencia de sus padres en los mismos términos que los demás »⁹.

Por Real Cédula del 15 de octubre de 1805, no sólo se reafirmaba la necesidad del consentimiento paterno para los menores, sino que se requería además una licencia especial de las autoridades civiles, también para los mayores de edad, en los casos de matrimonios interraciales, es decir entre negros y blancos. Era esto el fruto de la ansiedad despertada en Ultramar por los matrimonios desiguales debido a la variada composición étnica de su población. Nunca estuvo muy claro qué sector de la población blanca debía solicitar dicha licencia para matrimonios interraciales ; según la Real Cédula de 1805 sólo los miembros de « familias de conocida nobleza y notoria limpieza de sangre » estaban comprendidos, pero una interpretación algo posterior habla de « personas de conocida nobleza o notoria limpieza de sangre », es decir, todos los blancos, de cualquier estamento¹⁰. Esas disposiciones se interpretaron en Cuba con

7. CDFS, III : 1, p. 407-408.

8. CDFS, III : 1, p. 439.

9. Auto de la Audiencia de Puerto-Príncipe del 9 de julio de 1806, en que para el mejor cumplimiento de la Real Cédula del 15 de octubre de 1805 de matrimonios entre personas desiguales, se adopta esta conclusión fiscal. Joaquín Rodríguez San Pedro : *Legislación ultramarina, concordada y anotada*, Madrid, 1868.

10. Rodríguez San Pedro : *Legislación ultramarina, concordada y anotada*, Madrid, 1868, p. 531, nota. Una discusión más amplia en mi artículo « Color, clase y matrimonio en Cuba en el siglo XIX », *Revista de la Biblioteca Nacional « José Martí »*, 1968/2. Fernando Ortiz, en *Los negros esclavos*, La Habana, 1916, p. 366, menciona la Real Cédula del 15 de octubre de 1805, el Auto del 9 de julio de 1806, pero deduce de ellos erróneamente que « a partir de esta fecha el matrimonio fue libre entre blancos y negros ». Herbert S. Klein, recientemente, en *Slavery in the Americas, a comparative study of Virginia and Cuba*, Londres, 1967, p. 84, se atreve a afirmar que « [...] the 1806 free-marriage decree (ended) the last vestiges of caste arrangements [...] ».

creciente rigor hasta que abolida la esclavitud, por Real Orden del 27 de enero de 1881, se «deja completa libertad a las personas de diferente raza que quieran contraer matrimonio»¹¹.

De esta legislación derivan dos conclusiones:

1. Dos modelos de la sociedad coexistían: el modelo religioso, de ideología igualitaria, tal vez compartido por los liberales extremistas, y el modelo estatal, jerárquico. La Iglesia debía colocar la moralidad individual por encima de cualquier consideración de conveniencia política; todos eran hijos de Dios y por tanto iguales y libres de casarse entre ellos, sobre todo si existían «razones de conciencia». El Estado, por el contrario, restringía la libertad de elección en aras de la continuidad del orden social, aun a costa de la moralidad religiosa.

2. La endogamia de clase social constituía la forma de matrimonio oficialmente prescrita (uso aquí «clase» en el sentido más amplio).

El rapto debe estudiarse teniendo en cuenta, por un lado, la falta de libertad de matrimonio, establecida por la legislación, y por otra, la moralidad religiosa que exigía la virginidad de las mujeres solteras y la castidad de las casadas¹².

Discutiré en primer lugar el rapto entre blancos¹³.

El noviazgo se iniciaba más o menos en secreto. Cuando los padres se enteraban que su hija tenía un pretendiente, trataban de averiguar cuál era el ambiente del que procedía y de saber si sus intenciones eran honestas¹⁴. Un padre burlado describe así el ritual del noviazgo: «Apenas salió mi hija de la pubertad cuando fue solicitada amorosamente por D. Ramón Cabastani, conocido por Tarragona, y desde el instante que comprendí sus relaciones con aquella quise saber del mismo Cabastani el fin que llevaba en sus amores. Tuve una contestación honrosa y dándome un corto plazo para el matrimonio con mi hija le permití la entrada en la casa al repetido Cabastani.»¹⁵ Sin embargo, la honestidad de las intenciones del pretendiente es sólo uno de los requisitos para que pueda formalizarse el noviazgo; es todavía más importante que se trate de un

11. Citada en Archivo Nacional de Cuba, Donativos y Remisiones, Leg. 473/2.

12. El material utilizado en este trabajo proviene de causas criminales por rapto y por estupro conservadas en el Archivo Nacional de Cuba, La Habana. Vi 231 casos de rapto y 71 de estupro y tengo la referencia de otros 131 casos de rapto o estupro que no pude consultar por limitaciones de tiempo. El primer caso de los consultados ocurrió en 1801 y el último en 1899. Las causas se iniciaban cuando la policía se enteraba del delito y tomaba declaración a los participantes; contienen además comentarios de los funcionarios judiciales, resúmenes de los sucesos y las sentencias de los tribunales. Muchas causas están incompletas y no todos siguieron exactamente el mismo procedimiento. A menudo no hay manera de saber cómo acabó la cuestión. Surgen algunos problemas, por tanto, al cuantificar este material.

13. De los 231 casos de raptos, hay 157 entre blancos, 42 entre gente de color y 32 interraciales.

14. Por ejemplo, Archivo Nacional de Cuba [en lo sucesivo ANC], Gobierno Superior Civil [en lo sucesivo GSC], Leg. 911/31550. La madre declara: «En un principio llegando a su noticia estas relaciones lo reconvino y que como le ofreciese casarse con su hija lo que se realizaría cuando llegase su padre que se hallaba en el campo vendría a pedirla [...] razón porque le dio entrada por pocos días en la casa [...]» La ortografía de las citas ha sido modernizada.

15. ANC, Miscelánea [en lo sucesivo, Misc.], Leg. 1333/F. También Misc. Leg. 1198/K; GSC, Leg. 912/31504.

pretendiente adecuado, socialmente aceptable, y eso tanto lo exigen los padres de la novia como los del novio; también los padres del pretendiente quieren que su hijo contraiga un enlace apropiado. Si esas expectativas no se cumplen y la valoración del candidato o candidata al matrimonio resulta desfavorable, entonces comienza una campaña para cortar el noviazgo. Y es precisamente entonces, al objetar los padres al proyectado enlace y al poner trabas al trato entre la pareja, cuando los novios apelan al rapto. Este drástico suceso tiene por meta el forzar la actitud de los padres hacia una posición diametralmente opuesta, convirtiendo sus objeciones en deseo ferviente de que se contraiga el matrimonio. La pareja desaparece por unos días, y la muchacha pierde su virginidad; el muchacho se presenta a la policía tras « depositar » a la muchacha con alguien de confianza (otras veces, la policía le encuentra antes). El hecho principal es que la mujer ha perdido su honor. Ante esa vergüenza pocos son los padres que persistan en la actitud de rechazo hacia el novio. Esto se explica porque mientras, inicialmente, se creía que el honor de la familia iba a ser menoscabado por el matrimonio con un pretendiente poco idóneo, luego, al consumarse el deshonor de la mujer, el honor de la familia exige el matrimonio¹⁶.

Una explicación habitual de lo sucedido la da Doña Inés Ros: « Como a las siete [de la noche], estando conversando con su novio a la puerta de la casa, le pidió que se la llevase, pues no veía otro medio para casarse con él en atención a que sus padres se oponían. »¹⁷ En ocasiones la mera sospecha de la oposición paterna da lugar a la misma estratagema. Tal fue el caso de una muchacha que se dio a la fuga con el novio « temerosa de una negativa a sus intentos por parte de su padre, aprovechándose para verificarla de hallarse éste ausente [...] »¹⁸

Como el rapto era un medio bien conocido para vencer la resistencia de la familia a un matrimonio, podía dar lugar al engaño, al alegar el pretendiente para sus propósitos que sólo sería posible convencer a sus padres si la muchacha se dejaba llevar. No obstante, parece que el rapto típico ocurre con vistas al matrimonio: de los 56 casos de rapto en que consta como razón la oposición paterna, hay 36 en que el novio hace constar explícitamente que su propósito es llegar al matrimonio, y sólo hay 2 en que el motivo haya sido la seducción.

Entre las razones para el rapto ocupan el segundo lugar los malos tratos sufridos por parte de la familia. Sin embargo, muchas veces, al analizar los documentos, se descubre que en el fondo el maltrato es en realidad mera manifestación de la oposición familiar. Por ejemplo, una muchacha declaró: « D. Miguel [...] había solicitado varias veces el permiso de sus

16. En los 157 casos de raptos entre blancos consultados, hay 91 en que explícitamente consta una razón; en 56, la razón es la oposición de la familia al matrimonio y en los otros 35 es el maltrato paterno o materno.

17. ANC, Misc., Leg. 2298/F.

18. ANC, GSC, Leg. 909/31484.

padres el que siempre le habían negado esto sólo porque era pobre, como a todo el partido le constaba su honradez, **viéndose tan acosada la declarante por su madre** [...] pues todo el día la tenía sofocada para que dejase sus relaciones con el dicho Miguel [...] »¹⁹ Y a un padre se le acusa de que « no llevando gusto en el enlace, la había maltratado »²⁰.

Muchas veces, sin duda, el temor al castigo y a las riñas familiares lograba disuadir a los jóvenes de tratar de contraer matrimonios desiguales. Sin embargo, de cuando en cuando, el maltrato también podía surtir el efecto contrario, convirtiendo a los novios en amantes.

Hay distintas causas de oposición paterna, que pasamos ahora a analizar. La actitud básica es la del padre que protesta porque « un joven nombrado D. José Angel Acosta, **que no pertenece a la clase del que representa**, le ha robado una hija con atrevimiento nombrada Doña Josefa de Cárdenas y Peñalver »²¹. Pero, ¿cuáles eran los criterios que diferenciaban las « clases » en el siglo XIX en Cuba?

Hay a menudo una preocupación por el origen, el linaje, del pretendiente : « No puede haber matrimonio porque, como he dicho, no hay igualdad de linaje. »²² Otro padre se refiere a sí mismo y a su familia como « personas de honradez y de algún nacimiento »²³, y otro arguye « que la familia de la pretendida novia es de origen incompatible con la del que expone »²⁴. Podía ocurrir también que la condición social de un pretendiente fuera tal que su origen diera lugar a dudas ; bien que la familia fuese poco conocida en el lugar, bien que el pretendiente fuese ilegítimo o expósito. Una madre presentó como único inconveniente al matrimonio el hecho de que « ignora la conducta de la pretendida y familia »²⁵. Un padre se opone al matrimonio porque el joven es ilegítimo lo cual « es una tacha que aparta al que la tiene del trato y comunicación de las gentes »²⁶. Un ilegítimo no sólo sufría en el trato social y carecía del derecho de llevar el apellido de su padre y de heredarle, sino que además era discriminado en la vida pública : tradicionalmente se les había impedido tanto el acceso a empleos públicos como la práctica de oficios mecánicos. En las Indias la ilegitimidad tenía implicaciones particularmente graves, pues como decía Solórzano en su **Política indiana**, « [...] lo más ordinario es que nacen de adulterio o de otros ilícitos y punibles ayuntamientos, porque pocos españoles de honra hay que casen con indias o negras, el cual defecto de los natales les hace

19. ANC, Misc., Leg. 3641/Bb.

20. ANC, GSC, Leg. 908/31405.

21. ANC, GSC, Leg. 935 A/32800.

22. ANC, Misc., Leg. 2285/T.

23. ANC, GSC, Leg. 935 A/32881.

24. ANC, GSC, Leg. 921/32129.

25. ANC, GSC, Leg. 1148/43931.

26. ANC, GSC, Leg. 923/32203.

infames, por lo menos **infamia facti**, según la más grave y común opinión de graves autores, sobre él cae la mancha del color varío, y otros vicios [...] »²⁷ La oposición paterna hacia los pretendientes ilegítimos seguramente se debía en gran parte al temor a « la mancha del color varío ».

Otra madre hace constar « que no le agrada la elección que éste [su hijo] ha hecho por haber sido educada la joven pretendida en la Casa de Beneficiencia »²⁸; es decir, era expósito. Según las leyes, los expósitos eran considerados legítimos y se inscribían en los libros parroquiales como « al parecer blancos », pero en la práctica, hace notar un funcionario, « son tratados con el mayor vilipendio y tenidos por bastardos, espúreos, incestuosos o adulterinos [...] »²⁹ Cuando se quiso aplicar la legitimación real de los expósitos a las Indias el Fiscal del Consejo de las Indias dijo con razón, en 1805, que era ése « asunto de mucha gravedad » por « la multitud de castas [...] y la constante experiencia de exponer a las puertas de un particular los padres a los hijos cuando son de punible y dañado ayuntamiento o de calidad oscura y origen infecto [...] »³⁰ Aquí, de nuevo, es su origen dudoso lo que hace indeseables a los expósitos.

Un individuo podía ser rechazado también por motivos muy concretos, por ejemplo a causa de la diferencia notable en las categorías profesionales de las dos familias. Un padre protesta : « De pública notoriedad es que en la familia del postulante desde sus más remotos ascendientes, han servido en empleos distinguidos a S.M. unos en el campo general de la Armada y otros en el Ministerio de Marina, sin que en ningún caso haya habido personas en su etimología de linaje que hayan ejercido artes u oficios mecánicos, como en la actualidad lo practica [...] (el)] padre de la contrayente [...] y con sólo este hecho se convendrá en la gran diferencia que media entre su posición social con la de aquél [...] »³¹ El padre de la novia, un platero y relojero, digámoslo de paso, se negó también a dar su consentimiento porque en su opinión el joven no trabajaba.

Los llamados « oficios mecánicos » eran ocupaciones que habían estado en España revervadas a la gente del estado llano y vedadas a los nobles, suponiéndolos así « viles ». Hacia finales del siglo XVIII se promulgó una legislación que fue suprimiendo esa segregación ocupacional. Pero esa liberalización no se hizo extensiva a Ultramar de forma inmediata, a pesar de las insistentes demandas que en este sentido se hicieron, declarando que en América las artes y los oficios eran nobles, y « exponiendo la ociosidad [...] que se advierte nacida de la preocupación que caracteriza sus habitantes, queriendo ser todos nobles, hidalgos y caballeros, sin

27. Libro II, cap. XXX. Citado por Angel Rosenblat : *La población indígena y el mestizaje en América*, Buenos Aires, 1954, vol. II, p. 165.

28. ANC, GSC, Leg. 927/32467.

29. CDFS, III : 2, p. 724.

30. CDFS, III : 2, p. 818 ; este caso se refiere a Guadalajara, México.

31. ANC, GSC, Leg. 1148/43942.

dedicarse a las artes y oficios por la bajeza en que creen incurrir »³². La causa de esta resistencia viene claramente expresada en un dictamen del Fiscal del Consejo de las Indias emitido en 1807 en estos términos: « Si en la Península donde no hay más que nobles y plebeyos, ha producido esta disposición siniestras inteligencias [...] cuáles no causaría en América con la multitud de castas de pardos, zambos, mulatos, zambaigos, mestizos, cuarterones, octavones. Todas éstas tienen el vicio en la raíz y se hallan infectas [...] y como cabalmente los de dichas castas son los que ejercen los oficios de herrero, zapatero y demás mecánicos, si se comunicase la referida cédula a aquellos países, se originaría un trastorno y consecuencias perjudiciales al Estado, creyéndose con ella dispensado el vicio que tienen en su origen. »³³ En Cuba, a mediados del siglo XIX, los oficios mecánicos estaban totalmente abiertos a la gente de color libre y eran desempeñados en proporción casi igual por blancos y gente de color. Podía incluso ocurrir que un blanco trabajara de oficial para un patrono de color. Pero es muy posible que la abundancia de gente de color en esas ocupaciones reforzara precisamente la « vileza » que se les imputaba. Un joven blanco afirma ser « de la clase de menestrales, como sastre, que en este país tanto rebaja a los blancos que se dan a esas ocupaciones »³⁴. También la diferencia de fortuna motivaba, por supuesto, oposición al matrimonio. En uno de los casos se hace constar que « la posición que ocupa su familia es la de pobres por hallarse viviendo en un sitio potrero en arrendamiento y la de la D^a. Rosa Casanova es buena en razón a que su padre posee en este partido un cafetal con cincuenta negros de dotación » y « la educación de la de Casanova a consecuencia de su ventajosa posición es algo más esmerada que la de Burrundarena »³⁵. Otro de los casos hace también mención de la educación: « Difiere mucho de la que tiene la familia de su pretendida. Esta tiene una buena educación mientras que Martos no sabe ni firmar. »³⁶ No sólo se objeta la pobreza, sino también todo aquello que de algún modo la supone o recuerda. Otro motivo de oposición lo proporcionaba la religión. Había estado prohibido desde el principio a los « judíos, herejes y otros infieles detenerse en las Indias »³⁷, pero evidentemente esto no impedía que algunos se establecieran en ellas. Un padre, cuyo hijo quería casarse con una mujer de nacionalidad francesa, de Santo Domingo, le pide que acreditase competentemente su cristiandad. El padre de ella le había notado « la conducta más inmoral pues [...] jamás se confesó, oyó misa ni hizo algún acto público de religión »³⁸.

32. CDFS, III : 2, p. 832 ; se refiere específicamente a Popayán.

33. CDFS, III : 2, p. 834.

34. ANC, GSC, Leg. 895/30522.

35. ANC, GSC, Leg. 921/32129.

36. ANC, GSC, Leg. 923/32203.

37. CDFS, III : 1, p. 73.

38. ANC, GSC, Leg. 890/30036.

Vemos pues que el disenso de las familias al matrimonio se funda en razones de nacimiento, ocupación, fortuna y, rara vez, de religión. La posición social de cualquier persona se determina en primer lugar por la de su familia. Pero también juega un papel el comportamiento y los méritos individuales. Cuando los padres rechazan a un pretendiente porque es pobre, no tiene oficio o profesión y carece de recursos para sostener una familia, esa objeción puede decirse que en la mayor parte de los casos es también el producto de la gran preocupación por la igualdad en el matrimonio: « Si bien no es un impedimento legal [...] la falta de recursos en los contrayentes, debe tenerse ésta muy en cuenta cuando las familias tienen una posición regular, y no guardan proporción los medios de subsistencia con la clase a que corresponden. »³⁹ Es decir, los pretendientes han de ser capaces de proporcionar a sus futuros cónyuges el estilo de vida a que su posición social les hace acreedores.

Por último, también el comportamiento y la reputación individual han de ser correctos para que el pretendiente sea considerado idóneo. Los jóvenes debe observar « buena conducta » y no, como D. Agustín Pérez, comportarse como « un verdadero vago [...] (que)] no tiene oficio de ninguna clase, ni se le conoce otra ocupación que la de frecuentar los bailes, el billar y la valla de gallos e inquietar las hijas de familia [...] »⁴⁰ La buena reputación de la novia es tanto o más importante; debe ser recatada y naturalmente de estado honesto; cualquier duda sobre su integridad sexual destruye toda posibilidad de ser aceptada por una familia decente. Así, por ejemplo, un padre considera como motivo más que suficiente de disenso la presunta deshonor de la novia de su hijo a manos de un sargento; el joven, al refutar esta acusación, asegura que: « No es cierto [...] como se presume [...] que D^a. Rosalía se hubiera encontrado antes de conocerla el que postula en ese estado lamentable y depresivo a que se alude [...] y nadie, sino el que expone, puede aseverarlo con la seguridad y el convencimiento que nace de la experiencia [...] El que postula [...] jura ante Dios y los hombres que ha estuprado a la Señorita D^a. Rosalía, y que ésta no ha tenido acceso con otro alguno, y lo jura así, por haber encontrado en ella indudables y muy marcados signos de una virginidad inmaculada y evidente [...] »⁴¹

Pasemos ahora a considerar la eficacia del rapto: para que éste se institucionalice como mecanismo eficaz con vistas al matrimonio es preciso que por lo general surta el deseado efecto de superar la oposición paterna a la celebración del mismo. En realidad así sucede: uno de los muchos padres así convencidos pide « que en virtud del rapto ejecutado en la noche del primero del presente junio [...] no se opona hoy [al enlace] antes al contrario que se efectúe el enlace cuanto antes para que no quede

39. ANC, GSC, Leg. 920/32063.

40. ANC, GSC, Leg. 921/32129.

41. ANC, GSC, Leg. 921/32129.

agraviada la virtuosidad pública [...] »⁴² Cuando los padres no transigían, los pretendientes podían acudir a las autoridades civiles quienes tenían facultad para conceder una licencia supletoria declarando « irracional » el disenso paterno. Así actúa el funcionario que resuelve que « ahora viene haciéndose mérito de una circunstancia muy importante. D^a. Paula Calero fue raptada y estuprada por su amante. Lo primero mancha su honra, lo segundo la llena de oprobio. La moral pública, el decoro doméstico, el ejemplo a la juventud, ganarían con que hubiese un matrimonio más en vez de una joven cuya castidad ha sido violada y que quizás y sin quizás no encontrará un hombre honrado que quiera unirse a ella por medio del matrimonio. Cuando una mujer se extravía muchos la solicitan, no para el bien, sino para repetir el mal »⁴³.

El rapto es eficaz para vencer la resistencia paterna porque acarrea una pérdida muy concreta a la familia, que sólo puede ser compensada, al menos parcialmente, mediante el matrimonio. Es así como los padres ofendidos veían la situación. Un matrimonio adecuado sólo puede lograrse si la muchacha es virgen; en caso contrario se convierte en una carga perpetua para la familia y constituye un reproche a su reputación. Reificando la honradez de su hija, un padre se indigna ante « el arrojito » del seductor quien « triunfando violentamente de la debilidad de esta niña, arrebatándola de por fuerza la joya más apreciable que le dio la naturaleza y que nunca podrá ya recuperar » ha causado el « escándalo de la familia »⁴⁴. El honor de la familia está íntimamente ligado al de sus mujeres. Una madre explica claramente cuáles son las consecuencias prácticas para la familia de la deshonor de una hija: « Esta grave ofensa que ha hecho el expresado Ojeda ha puesto [...] en la mayor consternación a una familia honrada, que aunque pobre, goza de la mejor reputación en todo aquel Partido, y en la cual se funda toda su esperanza y bienestar, porque de esta suerte hallo el mejor medio para colocar y casar las hijas que tengo [...] »⁴⁵.

Aunque la oposición de los padres tiene su origen en la conciencia de su honor-preeminencia, es decir en el valor social de la familia, una vez que ha ocurrido el rapto, la preocupación primordial se centra en salvaguardar la reputación de la muchacha, a pesar de la pérdida relativa de prestigio social de la familia que un matrimonio desigual implica. Digamos también que el rapto es igualmente eficaz para vencer la oposición al matrimonio de un hijo, aunque el prestigio masculino no se ve afectado de la misma manera por él. La explicación hay que buscarla en que los padres, cuando contribuyen a proteger el honor virtud de las hijas de otros padres, están afirmando el deseo de que sus propias hijas sean tratadas con respeto.

42. ANC, GSC, Leg. 927/32451.

43. ANC, GSC, Leg. 927/32496.

44. ANC, Misc., Leg. 1248/L.

45. ANC, Misc., Leg. 2500/M.

Hay que considerar también que las sanciones legales del rapto contribuyen a su eficacia ; el raptor, o se casaba, o era desterrado tras dotar a la raptada.

Desde un punto de vista legal sólo cabía promover una causa contra el raptor si la muchacha efectivamente había perdido su doncellez. En algunos casos incluso se recurría a examen médico. Ciertamente, la desfloración era un requisito esencial del ritual del rapto cumplido a veces en curiosas circunstancias : « Que serían las siete de la noche anterior, saliendo desde su casa hasta la esquina de la Calzada del Monte, donde encontraron un carruaje con pareja y metiéndose en él tiraron para la vuelta del Cerro que es lo que conoce la absolvente y siguiendo muy despacio el carruaje, a las súplicas amorosas y oferta de ponerse en estado cedió, prestándose a que gozase de su virginidad, sin haber apeado ni estado en ninguna casa [...] »⁴⁶

Dos horas más tarde el pretendiente se presentó a la policía.

Hasta aquí he analizado la institución del rapto, mostrando cómo es una manera de allanar las desigualdades sociales que impiden el matrimonio en una sociedad jerárquica cuyo orden social es mantenido mediante la endogamia de clase. También he mostrado que la alta valoración de la virginidad es el medio mediante el cual se protege la integridad del grupo ; al controlar el acceso a la sexualidad femenina se controla el ingreso de nuevos miembros al grupo.

El rapto, habitualmente, tiene como objetivo el matrimonio. El pretendiente deshonra a la pretendida para poder precisamente honrarla después. En este caso, la conducta masculina es perfectamente acorde con las exigencias del honor virtud. Pero hay también casos de estupro, que se define como el acceso a la sexualidad de una mujer logrado con abuso de confianza o engaño. Un padre que acude a las autoridades para obtener reparación del daño infligido describe un caso de esta índole : « Que como padre de familia pacífico y honrado vengo [...] a implorar el amparo y protección de las leyes [...] padre de una familia numerosa que sostengo con mi personal trabajo, con fatigas y privaciones de la mayor consideración, me estaba reservada al cabo de mis años el sentimiento acerbo de que un seductor corrompiera a una de mis desgraciadas hijas, que ha manchado más mi honradez llevando en sus entrañas el fruto de la criminal conducta de un hombre que supo triunfar con halagos de su inocencia y candor [...] Hombre astuto que conociendo su corazón inocente supo tenderle lazos, no sólo para disfrutar de su virginidad, sino para dejarla con la señal indeleble de su delito, cual es el embarazo de algunos meses que ha sido la causa de descubrirse la conducta insidiosa de aquel hombre que con la máscara del matrimonio faltó a los deberes sociales y a cuantas obligaciones imponen las leyes y la moral. Se había notado por mi familia el trato de mi hija con el expresado Balio, y aunque nunca pudiera imaginarse que cometiera semejante atentado, se tomaron las medidas convenientes a cortarlo y a evitar cualquier acontecimiento doloroso ; pero como él

46. ANC, GSC, Leg. 912/31504.

había formado sin duda su proyecto supo aprovechar los momentos en que yo descansaba de mis penosas tareas para consumir el crimen cuyo castigo exijo en remuneración de una hija desventurada cuyo honor se ha violado torpemente por un amante fementido; las más de las noches entraba Balio oculto en mi propia casa a satisfacer sus libidinosos deseos en el lecho mismo de la víctima de sus seducciones que sin duda le fueron tanto más fáciles cuanto que esa joven, criada entre labradores en las costumbres sencillas del campo, no podía ofrecer toda la resistencia que es preciso en la posición en que se encontraba por el atrevido manejo de Balio. Y lo peor, después de este atentado que arranca las lágrimas de toda la familia, es que se niega a toda transacción de enmendar el daño causado; como yo no quería pleitos ni que llegase el instante de hacer más público el deplorable estado de mi hija, me acerqué a este hombre para exigirle algún partido capaz de evitar la publicidad del acontecimiento; mas con una obstinación inexplicable, y haciendo alarde de su delito, se ha negado a todo como si fuese digno de galardón su proceder criminal [...]»⁴⁷

El estupro ocurre, pues, siempre en secreto, al contrario del rapto que, para que sea eficaz, ha de ocurrir abiertamente puesto que es precisamente la pérdida de prestigio que resulta de las murmuraciones de la vecindad lo que lleva finalmente a la aceptación familiar del matrimonio. Tanto en el estupro como en el rapto, hay promesa previa de matrimonio. El estupro sucede por lo general en la casa de la muchacha, y sólo se descubre cuando ésta se queda encinta.

El estupro se desenvuelve en las etapas siguientes. El joven pretende a la joven, y trata de ganar su confianza y la de su familia mediante la promesa de matrimonio y un comportamiento correcto. Una vez la familia queda tranquila, intenta entonces convencer a la joven que acceda a sus deseos, y cuando el éxito corona su empresa, se retira de la escena bajo cualquier pretexto. En las palabras de una novia burlada, «que ignora dónde se halla el referido Escalera por hacer precisamente dos meses que dejó de frecuentar la casa donde la declarante habita con su señora madre D^a. Clara Cabrera a consecuencia de que habiendo notado que la declarante se hallaba embarazada del referido Escalera, y apremiándole diferentes veces para que le cumpliera la palabra de casamiento que le había dado, la abandonó sin saber el motivo, aun cuando presume sea para eludir el compromiso [...]»⁴⁸

47. ANC., Misc., Leg. 1179/A.

48. ANC., Misc., Leg. 2619/G. Casi idéntico lenguaje en los casos siguientes: «Solicitó a su citada hija quién había sido el autor de semejante hecho a lo que le contestó que D. Juan Jaén Palomo, natural de Canarias, que éste se había marchado para el partido de Macuriges hace el tiempo de cinco o seis meses, de modo que viendo el que se querella a su repetida hija perdida si no se casaba con Jaén Palomo lo participaba al Juez [...] se compela a Jaén Palomo a que cubra el honor de su indicada hija [...]» (ANC, Misc., Leg. 1200/T.) «La buena idea que teníamos del mozo, sus circunstancias y modo de comportarse en la casa hicieron que yo le franquease la entrada en ella, y abusando de esta condescendencia y del candor de la niña bajo la fe del empeño de su palabra de honor en realizar de momento el matrimonio, consiguió favores que constituyen el punto de partida del porvenir de la mujer, y que para ser más sensibles en mi hija han dejado en su seno la huella de su debilidad [...] reconvino con la dureza que es de creerse a su causante, éste a la vez que me confesó el extravío me ofreció repararlo con el matrimonio de cuyas

Pero no era tan sencillo evadirse y vivir escondido. Y por tanto los hombres generalmente recurrían a otros medios para dar la espalda a sus responsabilidades, siendo el más corriente el tratar de desacreditar a la muchacha, alegando que ya había sido deshonrada con anterioridad por otro hombre. De este modo, la situación se invierte: ya que la muchacha no era honrada, el joven no está en la obligación de casarse con ella. Por ejemplo, un seductor se defiende así: «La declaración de la demandante demuestra que lejos de ser la doncella inocente, recatada y tímida a quien protege la ley, tiene sobrada malicia y no sería acreedora a indulgencia. Una joven que repetidas veces abandona el hogar paterno para ir a medianoche a recrearse en un gallinero con un hombre, no es ninguna doncella cándida a quien se seduce con la palabra de casamiento.»⁴⁹ Y de otra víctima se dice: «Era una joven que concurría a bailes dados en una taberna del partido en que habitaba no desdeñándose de entregarse en los brazos de negros y mulatos para danzar con ellos.»⁵⁰ Sin embargo, a ambos hombres se les declara culpables.

Tanto en el rapto como en el estupro, juega la mujer un papel pasivo. Su aquiescencia se funda en la confianza puesta en la buena fe del pretendiente. Su pasividad es lógica, puesto que es ella la prenda que está en juego en esta rivalidad del honor. Los demás actores son los padres respectivos, especialmente los de la muchacha, y por supuesto el pretendiente. Ellos juegan un papel activo haciendo depender su conducta de los fines que persigan. En el típico rapto, la conducta de los padres con respecto al matrimonio es negativa, mientras que la del pretendiente es positiva. Los padres piensan que el matrimonio proyectado menoscabará su prestigio social, mientras que el pretendiente —teniendo en cuenta que la oposición al matrimonio se funda generalmente en la desigualdad social— puede muy bien pensar que su prestigio aumentará con él. En el estupro, la situación es la inversa. El pretendiente tiene una actitud negativa hacia el matrimonio, mientras que la actitud de los padres de la muchacha es positiva, tanto antes como después del suceso.

En el rapto, lo que hace necesario el matrimonio es la pérdida del honor de la mujer. Por tanto, una mujer que ya lo hubiera perdido no puede pretenderlo. Si correlacionamos los casos de rapto y de estupro, vemos que en aquellos en que la joven era verdaderamente honesta, la disposición del joven a contraer matrimonio varía de un 77 % en caso de rapto a solamente un 10 % en el de estupro. El estupro viene a ser pues lo contrario del rapto. En el rapto con vistas al matrimonio, el joven quiere guardar el honor de la mujer, mientras que en el estupro la mujer es víctima de la agresividad sexual masculina y del deseo de afirmación de su virilidad. El honor del padre disminuye por la deshonra de la hija y el honor

diligencias iba a ocuparse inmediatamente, pero desde entonces principié a retirarse de nuestro trato de una manera notable hasta que concluyó por no visitarnos y más después por separarse de aquella oferta solemne [...]» (ANC, Misc., Leg. 1353/Y.)

49. ANC, Misc., Leg. 1333/B.

50. ANC, Misc., Leg. 2751/F.

del hermano por la deshonra de la hermana. Pero el honor de un hombre aumenta en cierto modo cuando se convierte en el logrado seductor de una virgen. La muchacha que le decía a su novio « que se la llevase consigo y que de no hacerlo no era hombre »⁵¹, estaba precisamente desafiando su virilidad. Estos dos valores, el gran aprecio por la virtud femenina por una parte —que resalta en los raptos— y por otra parte el mérito atribuido a la agresividad sexual masculina —expresado en el estupro—, parecen ser valores en conflicto el uno con el otro. No obstante, coexisten y así debe ser, pues para que la virginidad sea altamente apreciada es preciso que quepa la posibilidad de su pérdida. Cada caso de estupro contribuye a reforzar la ansiedad respecto a la virginidad. El tutor de una muchacha burlada lúcidamente describe los dos modos alternativos de comportamiento masculino con respecto a las mujeres: ahora que ya triunfó de su virtud se complace en « gloriarse y saborearse de su inicuo proceder » mientras que anteriormente se había comportado como « un hombre ingenuo y de probidad »⁵².

Esos dos conceptos de la conducta masculina, aparentemente contradictorios, expresan los dos papeles que juega el hombre, ambos estructuralmente necesarios: él es el defensor del honor de su familia y, específicamente, del honor de sus hermanas (« el guardador de su honra »)⁵³, pero es también agresor potencial del honor de las demás mujeres. Y del mismo modo que la afirmación de la virilidad complementa el gran aprecio por la virginidad^{53a}, el estupro es complemento del rapto con vistas al matrimonio.

El rapto también ocurría entre la gente de color, pues también en este sector existía una intensa conciencia de diferenciación social. El informe siguiente, dado por un párroco en un caso en que la madre de la novia se oponía al matrimonio, cita los criterios de clasificación social más importantes: « Sobre la clase, caudal, conducta y demás circunstancias de estas personas que aspiran a contraer matrimonio, he hecho las inquisiciones necesarias de sujetos imparciales, y me dan el resultado que el citado Fornaris ejerce el oficio de zapatero, que es hijo legítimo de los morenos libertos [...] el que ha incidido en varias ocasiones en defectos propios de la juventud, por cuya causa se ha ausentado algunas veces de la casa paterna [...] que la expuesta Bargas es hija de María del Rosario Bargas, parda libre, de color oscuro y de un moreno llamada Pascual, por cuya causa la expresada Juana Evangelista pertenece a la clase de negros, la que había permanecido al abrigo de su madre, hasta el momento en que la abandonó [...] que ambas familias yacen en la mayor pobreza, sosteniéndose de su trabajo personal [...] »⁵⁴. El pretendiente era hijo legítimo de

51. ANC, GSC, Leg. 914/31756.

52. ANC, Misc., Leg. 2434/D.

53. ANC, Misc., Leg. 1272/A.

53a. Como ya apuntó con agudeza C. Lisón: *Belmonte de los Caballeros*, Oxford, 1966.

54. ANC, GSC, Leg. 906/31303.

morenos libertos; ella la hija ilegítima de una parda libre y un moreno libre. La ilegitimidad y, tal vez, el color más claro de ella parecen compensar la cercanía a la esclavitud y la legitimidad de él; cada uno se apuntaba un tanto a favor y uno en contra. En cuanto a su posición económica, ambos eran igualmente pobres.

Las objeciones familiares a los matrimonios proyectados entre la gente de color se fundaban predominantemente en la desigualdad percibida en el «color» y en la «condición». La ideología de esos padres es que «todos los hombres debían pretender ir a más en lugar de caminar a menos»⁵⁵, «caminar a más» tanto en lo que hace al «color», blanqueándose, como en lo que hace a la «condición», alejándose de la esclavitud. Así, la madre de un pardo se opone al matrimonio porque «lo verifica con morena, hija de una negra carabalí, debiendo propender más bien a mejorar su linaje»⁵⁶. Por supuesto, los padres de condición libre se oponen cuando el futuro yerno o la futura nuera son esclavos: «¿Cómo podría conceder la licencia cuando el pretendiente por su misma cualidad de siervo carece de proporciones para mantenerla? [...] (lo que)] Arcadio gane ha de ser precisamente de su amo, y de este enlace resulta que voy a mantenerle su mujer y los hijos que naturalmente tendrán, que siendo yo un pobre jornalero que trabajo personalmente para sostener mis obligaciones, éstas se aumentarían de año en año según los hijos que fuesen teniendo [...]»⁵⁷. Claramente, la diferencia de condición entre un libre y un esclavo es fundamental, pero podría pensarse que la existente entre un «liberto» y un «ingenuo» fuera insignificante. Sin embargo, en lo que concierne al matrimonio, era importante: «No puede prestar su allanamiento a igual enlace pues aunque es un hombre de nacimiento pardo [...] sus padres y abuelos y los de su consorte todos han sido libres de cautiverio; y así le es muy doloroso ver una hija de una edad tierna casada con un chino que acaba de ser esclavo»⁵⁸. De una joven se dice «que en la clase de color es considerada como de las más respetables **por su alejamiento del color negro y de la esclavitud** [...] y cuyo hermano fue condecorado por S.M. con una cruz por sus servicios al país en la persecución de negros cimarrones [...]»⁵⁹.

En los matrimonios entre gente de color es siempre la familia de «mejor» color y condición la que se opone. Sin embargo, llevados por su ambición de «adelantar la familia», hay padres que se oponen también a matrimonios iguales en términos de color, pues esperan casar sus hijos con alguien más «adelantado». Una madre dice descortésmente «que no quiere que

55. ANC, GSC, matrimonios, José Anselmo Cárdenas solicitando matrimonio con Juana de la Caridad Reyes - 1816.

56. ANC, GSC, Leg. 923/3223.

57. ANC, GSC, Leg. 906/31312.

58. ANC, GSC, Leg. 893/30329. Un «chino» es el hijo de parda y moreno, o viceversa.

59. ANC, GSC, Leg. 924/32284.

su hija contraiga matrimonio con un negro », aunque la hija era también morena y los dos libres⁶⁰.

Como vimos, el gran aprecio por la virtud sexual femenina es un elemento de la ideología blanca, y lo encontramos también presente en los valores de la gente de color. También los padres de color hablan del honor de sus hijas que ha sido mancillado y exige ser cubierto. El recato y la honestidad de sus hijas son preocupaciones importantes. Una madre parda insiste en la buena conducta de su hija por cuanto « cuando salía a la calle siempre iba acompañada como lo requiere una joven de estado honesto »⁶¹ y una abuela dice de su nieta « que hasta el día en que fue raptada conservaba su virginidad, pues la que declara ha tenido con ella el mayor cuidado, a fin de que fuera una mujer virtuosa [...] »⁶². Los pretendientes que tropiezan con la oposición paterna hacen uso de ese gran aprecio por el honor virtud; como dice un padre « penetrado ahora [...] que la citada hija se encuentra en estado de preñez, no puede menos de prestarse al otorgamiento de la licencia inmediatamente, a fin de que realicen el matrimonio con toda brevedad y quede de ese modo cubierto el honor de aquélla [...] »⁶³. Empero, alguna vez, con mayor frecuencia que entre los blancos, las consideraciones relativas al prestigio social podían pesar más que las relativas al honor virtud, como en el caso de una parda, hija legítima de pardos, que deseaba casarse con el hijo de una esclava y de padre no conocido: « Por ningún caso —dijo el padre— le concedía tal licencia, en primer lugar por ser su hija menor de edad y en segundo tocar desigualdad en el demandado; por lo respectivo al hecho del rapto, está pronto a hacerse cargo de su hija en el estado en que se halla, y que al delincuente se le aplique la pena condigna [...] »⁶⁴.

La evidencia muestra que entre la gente de color existía con carácter muy general la aspiración a blanquear a sus descendientes en lo posible y a alejarse de la esclavitud lo más posible. Al pensar así, en vez de adquirir una conciencia de su propio valor hicieron suya, por el contrario, la ideología discriminadora que les fue impuesta por los blancos, y a la que prestaron su consentimiento activo. El refrán « más vale querida de un blanco que mujer de un negro »⁶⁵ simboliza este conformismo, aunque hubo también algunos miembros de la « clase de color » que lo rechazaban, desarrollando una suerte de contraideología. La parda Angela Campo es un ejemplo de esta actitud minoritaria: el pretendiente de su hija, un blanco, le había pedido que le permitiera vivir maritalmente con su hija, pero obtuvo

60. ANC, GSC, Leg. 896/30583.

61. ANC, Misc., Leg. 2165/A.

62. ANC, Misc., Leg. 2733/B.

63. ANC, GSC, Leg. 935 A/32851.

64. ANC, GSC, Leg. 889/29955.

65. A. Arredondo: *El negro en Cuba*, La Habana, 1939, p. 72.

una negativa puesto que « deseaba que su citada hija, toda vez que era doncella, se casase legalmente con uno de su clase »⁶⁶.

Tal como queda indicado, los padres pueden persistir en su oposición al matrimonio incluso cuando su hija ha sido deshonrada por el raptor: es decir, el rapto con vistas al matrimonio no es siempre un medio eficaz para allanar la resistencia paterna, y esto es especialmente verdad cuando se trata de raptos interraciales, que a continuación vamos a considerar. Los padres prefieren por regla general aguantarse con una hija deshonrada a introducir un elemento impuro en su « linaje ». Uno de esos padres da un espléndido resumen de la cuestión: « [el raptor] cuya inconcebible osadía de seducir, raptar y quizá estuprar una niña blanca honrada [...] lo ha hecho incurrir en una gravísima responsabilidad ante las leyes, responsabilidad tal que en manera alguna puede dejar de hacerse efectiva en un tribunal de justicia de la Isla de Cuba, país en que por las circunstancias excepcionales en que se encuentra [es decir, la esclavitud, VMA] es preciso sea muy marcada la línea de división entre la raza blanca y la africana, trayendo en pos de sí cualquier tolerancia que pudiera ser laudable en algunos casos el deshonor de las familias blancas, el trastorno y el desorden del país, cuando no el exterminio de sus habitantes: que nunca los exponentes accederán a la unión de su hija con un mulato, pues sería cubrir una mancha con otra mucho mayor e indeleble y por el contrario preferirán devorar en silencio su dolor y su vergüenza, más bien que autorizarlo públicamente. »⁶⁷ El conflicto entre el prestigio social y el aprecio por el honor-virtud es aquí evidente. También lo es, aunque en un contexto social más amplio, en un informe del Gobernador Civil de Oriente, de 1854, referente a una petición de licencia para un matrimonio interracial: « Bajo el punto de vista puramente religioso, el matrimonio reclama con imperio la cooperación del gobierno; pero no cabe duda que la propagación de ideas de igualdad entre la clase blanca y la raza de color coloca en inminente peligro la tranquilidad de esta Isla cuyo mayor número de población lo forma la citada raza, si es no menos cierto que autorizando enlaces entre una y otra se tiende a subvertir y debilitar los vínculos de subordinación con que los de color están ligados a los blancos, y aunque a pasos más lentos que con la propagación de ideas de igualdad, llegaría un día en que aquéllos alentados con el ejemplo de desiguales uniones que les son ventajosas, aspirarían vehementemente a colocarse a una altura que la sociedad les niega y sucedería la alteración del orden público [...] » El informe concluía, cínicamente: « Soy de sentir que sería conveniente negar la autorización que se pretende, cuya medida salvaría cualquier razón de conciencia que acaso existiese por lo mismo que la falta de celebración del matrimonio vendría a ser efecto ajeno de la voluntad de los que quieren contraerlo. »⁶⁸

66. ANC, Misc., Leg. 2165/A.

67. ANC, GSC, Leg. 914/31756.

68. ANC, GSC, Leg. 917/31914.

En tanto la distancia social entre las familias y los candidatos al matrimonio se mantiene dentro de ciertos límites, el aprecio por la virginidad sirve para apoyar la valoración del honor-preeminencia, que a su vez contribuye a la estabilidad del orden social. Pero más allá de esos límites, las relaciones se invierten. Hay que considerar, a este respecto, la observación del Consejo de Indias en 1783, expresión de lo que comúnmente se creía: «Cualquiera mancha en uno u otro individuo de la ascendencia es trascendental a toda la generación.»⁶⁹ En principio, el honor de la familia y el de sus miembros individuales están íntimamente relacionados y son interdependientes. Pero, en esos casos, un mayor honor-preeminencia se consigue pagando el precio del honor-virtud de la hija. Puede verse el rapto como si fuera un desafío al prestigio de los padres, que tienen tres formas alternativas de respuesta; cuál de ellas se elija dependería de la posición social respectiva de ambas partes. Si, hablando en términos amplios, el burlador es igual en honor al padre burlado, entonces el matrimonio es la solución adecuada. Si es muy inferior en honor, entonces lo adecuado es lograr su castigo ante los tribunales. Y si es superior en honor, entonces el padre debe conformarse. Esta última hipótesis se da en el caso del padre negro y humilde que dice: «No es mi ánimo deducir contra D. Antonio Cordovés [un blanco] las acciones criminales que las leyes tienen establecidas contra los estupradores; no porque crea ofender la moral pública con el uso de una acción que no está limitada a clase o persona, sino porque creo que no sería esto lo más conveniente a mi hija [...]»⁷⁰ Es de todo punto improbable que este padre considerara que su hija careciera de honor desde un principio. Pero sabe bien que es poco probable que pudiera obtener reparación en matrimonio. El encausado niega todas las acusaciones, que sin embargo parecen estar satisfactoriamente probadas. El padre es un realista, sabe cuál es su posición social, y pide un tipo de compensación pecuniaria para su hija y la prole que ésta espera, sabiendo que es posible obtenerla. Es en este sentido como puede decirse que el honor define las fronteras de las clases endógamas. Esta era la opinión de un tal Dr. Tembra, de Tecamachalco, México, que en 1752 había redactado una consulta sobre matrimonios desiguales que vale la pena citar con amplitud: «Pero si la doncella violada bajo palabra de matrimonio fuera de tan inferior condición que cause mayor deshonor a su linaje con su casamiento que la que ella padeciese con quedar violada; como si un Duque, un Conde, un Marqués, un Caballero de eminente nobleza hubiera violado a una mulata, a una china, a una coyota, a una hija de un verdugo, de un carnicero, de un zurrador, de un afrentado o de otro cualquier padre afrentado, infame, despreciado y abatido, y no tuviese con qué dotarla, por estar perdidas sus rentas o por otro motivo de pobreza. En este caso ni deberá casarse con ella ni dotarla. Dotarla no, porque ya se supone que no tiene con qué. Ni menos casarse porque le resultaría

69. CDFS, III : 2, p. 533.

70. ANC, Escribanía de Vergel, Leg. 73/14.

mayor agravio a él y a todo su linaje que el que padeciera la doncella con quedar perdida y en todo caso debemos escoger el menor daño [...] pues aquél es un daño de una persona particular que en ella se queda, sin perjuicio de la República, pero éste fuera un perjuicio tan grave que denigrara toda una familia, deshonorara una persona pública, infamara o manchara todo su linaje noble y destruyera una cosa que es lustre y blasón de la República. Pero [...] siendo la doncella violada de poco inferior condición, de no muy notable desigualdad, de forma que su inferioridad no ocasione notable deshonor a la familia, entonces si el promitente no quiere dotarla, o ella justamente no quiere admitir la compensación de la dote; debe precisamente compelerse a que se case con ella; porque en ese caso prevalece su agravio a la injuria de los padres del promitente pues a ellos no se sigue notable deshonor ni grave daño del casamiento y a ella sí de no casarse y así debe este daño satisfacerle; porque si la desigualdad se verifica sólo en la edad o en el caudal, como un niño con una mujer mayor; de un rico con una pobre, o aunque sea en la calidad, no es tan noble, como de un caballero cruzado con una de sangre limpia aunque no tan noble; de un mayorazgo con una doncella limpia y honesta, u otra semejante.»⁷¹

Volviendo a Cuba, hay casos en que la mujer de color es considerada, por el solo hecho de serlo, como carente de honor: «La Talavera es parda libre y [...] se le atribuye un ejemplo de aquella flaqueza que es común entre las mujeres de su calidad [...]»⁷²; «aunque parda vivía honestamente»⁷³. Y, como dice el refrán cubano, «no hay tamarindo dulce ni mulata señorita». Puede pensarse que tales opiniones reflejan meramente la visión tendenciosa de los hombres blancos, interesados en sostenerlas. Eran, a lo que parece, las mujeres de color quienes frecuentemente servían a las necesidades sexuales de los jóvenes blancos. En un informe de 1863 sobre un proyecto de reglamento para atenuar los efectos de la prostitución, se argumenta que tal reglamento no sería efectivo por cuanto había un amplio grupo de mujeres que esporádicamente ofrecían sus servicios, sin ser por eso prostitutas profesionales: «Los jóvenes, hijos de familia [...] que respetan todavía la opinión pública ceden a veces tan sólo a la ocasión y a las tentaciones sin ir a buscarlas, o procuren ocultar sus debilidades y prefieren a las meretrices más sigilosas o menos conocidas». Tales tentaciones eran seguramente abundantes pues «esa clase desempeña la servidumbre doméstica y otra multitud de ocupaciones ínfimas [y] se encuentra en frecuente y a veces íntimo contacto con las demás clases más elevadas; las mujeres de ella gozan como tales de la mayor libertad y por efecto de su condición ni conservan principios muy escrupulosos de moralidad ni dan a sus favores muy elevada apreciación [...] Si de las razas africana y mestizas esclavas se pasa a considerar la libre, se encontrará otra clase

71. Biblioteca Nacional, Madrid. Manuscritos de América. Dictamen del Dr. Tembra acerca de la consulta que se hizo sobre si el Cura o cualquier juez eclesiástico puede o debe impedir los matrimonios entre consortes desiguales, celebrados ya esponsales con juramento de cumplirlos, sin consentimiento paterno. México, 1752. N.º 18.701.14.

72. ANC, GES, Leg. 903/31065.

73. ANC, GSC, Leg. 888/29884.

numerosísima e igualmente invigilable de prostitutas, porque colocadas con frecuencia en circunstancias análogas a las siervas y con mayor libertad de acción que éstas, no las aventajan en cualidades morales.»⁷⁴

Cirilo Villaverde, en su novela justamente famosa, **Cecilia Valdés**, da una excelente descripción de la situación de la mujer de color. Cecilia Valdés, tenida por parda, es pretendida por un joven blanco de buena familia. Cecilia nació de las relaciones que el padre del joven tuvo con una mujer de color, y que mantuvo secretas. El joven da palabra de matrimonio, gana los favores de Cecilia, pero al fin se casa con una joven de su propia clase. El incesto sólo lo conocen los lectores, pero no los actores, y da una mayor emoción a la novela y constituye, tal vez, una advertencia adicional sobre los riesgos que provienen de la falta de debido respeto a la virginidad de las mujeres.

Cecilia Valdés no es sólo un ejemplo más de mujer de color explotada por un blanco, sino que es también una víctima del sistema, al nivel de la conciencia. Tenía a su vez un pretendiente, pardo como ella, a quien rechazó en la esperanza de un pretendiente mejor. Siendo de apariencia casi blanca, Cecilia se enorgullecía de ello y, juzgando equivocadamente al sistema, creía que podría escapar. Ella misma lo admite abiertamente: «No lo niego, mucho que sí me gustan más los blancos que los pardos. Se me caería la cara de vergüenza si me casara y tuviera un hijo **saltoatrás**.» Su amiga Nemesia le dice a Cecilia que tenga en cuenta las experiencias de **señá Clara**, una amiga de ambas, que siempre repite «cada uno con su cada uno». Cuando Cecilia hace ver que no entiende el significado de la frase, Nemesia le explica: «Más claro no puede ser. ¿**Señá Clara** no tiene más experiencia que nosotras? Desde luego. Es mayor de edad y ha visto el doble del mundo que tú y que yo. Pues si a menudo repite ese dicho, razón buena ha de tener. Aquí, inter nos, **naiden** me lo ha contado, pero yo sé que a **señá Clara** siempre le gustaron más los blancos que los pardos, y bien durita ya se casó con **señó Uribe** [un famoso sastre, pardo, VMA]. Por supuesto, llevó más quemadas y desengaños que pelos tiene en la cabeza, y por eso ahora se consuela repitiendo a las muchachas como tú y como yo: cada uno con su cada uno. ¿Entiendes?» Cecilia Valdés no entendió.⁷⁵

El informe citado sobre el reglamento de prostitución sugiere como soluciones moralizantes una buena educación cristiana y la oportunidad de un trabajo perseverante y honrado, y no admite el doble standard de moralidad para blancos y para negros, como resultado de la estructura social. Sin embargo, el año siguiente, en 1864, Bachiller y Morales señalaba entre otras causas de la «desmoralización» de las personas libres de color, las seducciones por parte de los blancos, «tanto mayor cuanto lo sea la miseria y desamparo de las jóvenes de color. Es preciso convenir en que

74. ANC, Consejo de Administración, Leg. 6/394.

75. Cirilo Villaverde: **Cecilia Valdés o la Loma del Angel**, Nueva York, 1882, p. 358. Hay ediciones más recientes.

esa fuente de inmoralidad pudiera disminuir si se sujetase a los seductores a las leyes generales que exigen la reparación de las ofensas de ese género por el matrimonio. Si eso fuera permitido, y no por excepción, a las castas, la esperanza de matrimonio sería un motivo de que se evitase la facilidad de las mujeres [...] »⁷⁶ Normalmente, las mujeres de color no podían tener esperanzas de que su honor fuera cubierto por los seductores blancos. Aun cuando éstos, a veces, estuvieran dispuestos, individualmente, a contraer matrimonio, sus familias se oponían, y siempre quedaba además un obstáculo ulterior: obtener la licencia del Capitán General imprescindible para los matrimonios interraciales. En una sociedad así, es más que probable que los hombres blancos, como insinúa Bachiller y Morales, se sentían irresponsables frente a las mujeres de color. No hay evidencia, sin embargo, que indique que la legislación sobre raptos y estupro no se aplicara a las mujeres de color seducidas por blancos. Seguramente, lo que Bachiller y Morales quiere decir es que, en la práctica, les era difícil a las familias de color defender el honor de sus mujeres. En un caso, se dice ante el tribunal, y se le convence de que el padre de una mujer de color no puede ejercer acción por rapto contra un blanco, aunque, desde un punto de vista legal, no fuese cierto⁷⁷.

Aunque hemos aludido ya a la « corrupción » de los valores entre la gente de color, no puede dudarse sin embargo que, en un cierto sentido, el matrimonio era también el ideal en este sector de la población: « [...] tenía la mayor confianza en su hijo Jacinto que es casado por la Iglesia y tiene constituida una familia que le merece la condición de honradez y moralidad » —dice una madre de color⁷⁸. Un padre rechaza la proposición de un blanco para que le deje vivir en concubinato con su hija parda y solicita que « se casara por la Iglesia »⁷⁹. El concubinato, sin embargo, era frecuente, y también lo era, digámoslo de paso, la llamada familia matrifocal: « Por todas partes los amancebamientos y concubinatos, los cuales son en gran parte entre blancos y mulatas, lo que da un número excesivo de hijos naturales, hijos naturales quienes si se exceptúa alguno que otro que es reconocido por su progenitor, puede decirse que ni tienen familia ni sociedad, **pues aquélla se reduce a una madre** y sin porvenir y ésta los rechaza de su seno [...] »⁸⁰. Aunque no disponemos de cifras sobre la frecuencia de concubinatos interraciales hay suficientes testimonios como para creer que era mucho mayor que la de matrimonios. Por otra parte, entre los blancos el matrimonio era la norma, según las cifras de los

76. Biblioteca Nacional « José Martí », La Habana, Memorias de la Real Sociedad Económica. Sobre la fuente de desmoralización de las personas libres de color, con indicaciones sobre su reforma. Leída por el señor Bachiller y Morales en junta celebrada el 7 de octubre de 1864.

77. ANC, Misc., Leg. 1141/W.

78. ANC, Misc., Leg. 2301/A.

79. ANC, Misc., Leg. 2733/B.

80. Archivo Histórico Nacional, Madrid, Ultramar, Leg. 1748/23. Se trata de una exposición, en 1867, del Obispo de La Habana.

Censos, mientras que entre la población de color libre el concubinato era tan frecuente como el matrimonio —que apenas existía entre la población de color esclava.

Especialmente la hipogamia, es decir, el matrimonio de una muchacha blanca con un hombre de color, era considerada como algo inconcebible. La oposición familiar era enorme, y la sociedad toda se escandalizaba. Todavía en 1894, trece años después de que tras la abolición de la esclavitud se permitieran legalmente los matrimonios interraciales, con motivo de una serie de leyes que el gobierno colonialista promulgó para tratar de congraciarse a la población de color en vísperas de la segunda guerra de independencia, se desató en Cuba una « histeria racista » y había quienes « propalaban la idea de que faltaba poco para que los negros se apoderasen de las blancas y se casaran con ellas »⁸¹. Esa oposición se explica porque son las mujeres quienes son consideradas las verdaderas perpetuadoras del linaje. Y es por eso por lo que la legislación penal relativa a los « crímenes contra la honestidad » y específicamente al adulterio trataba con gran rigor a las mujeres y con lenidad a los hombres : « Diferencia racional y justa [en una sociedad jerárquica, VMA] porque sobre las consecuencias que trae consigo toda infidelidad entre esposos de debilitar los lazos sociales, de atacar las buenas costumbres, de introducir la guerra y las discordias al hogar doméstico, la mujer puede llevar al matrimonio hijos bastardos [...] »⁸². El adulterio masculino era tolerado, mientras que el marido podía por sí mismo vengar su honor matando a su mujer, con tal que matara también al amante⁸³. Esa desigualdad es pues lógica. La hipergamia, por tanto, era algo más tolerada, y también más probable, por la desproporción numérica entre ambos sexos, entre los blancos. Hubo doce o trece hombres blancos por cada diez mujeres blancas a lo largo del siglo. De los 32 casos de raptó interracial, que casi nunca llegan a concluir en matrimonio, hay 10 entre mujer blanca y hombre de color, y 22 entre hombre blanco y mujer de color. Sólo en uno de los casos la distancia social es tan grande como la que media entre un hombre blanco y una morena ; en todos los demás, ambos novios se reclutan entre grupos contiguos : blancos y pardos. Y aunque la opinión pública fuera un poco más tolerante con respecto a la hipergamia que a la hipogamia, aún entonces la oposición familiar podía ser sumamente enérgica. Así le ocurrió a D. José Antonio Ramírez, que se llevó a su novia. Inicialmente ambas familias dieron su consentimiento al matrimonio « mas resultando ahora por la partida de bautismo de la joven [...] que la madre de ésta es parda libre, el padre del joven Ramírez retira su consentimiento y se opone a la realización del matrimonio ; manifestando que, si su hijo frecuentaba la

81. Jorge Ibarra : *Ideología mambisa*, La Habana, 1967, p. 61.

82. Alcubilla : *Diccionario de administración*, Madrid, 1886, tomo I, p. 176.

83. J.M. Ots Capdequí : *Instituciones sociales de la América española en el período colonial*, La Plata, 1934, p. 250.

casa de la joven y la sacó de ella, fue porque creía que era blanca, pues por tales se hacían pasar en este partido [...] »⁸⁴

Aunque, en cierto sentido, el régimen esclavista explica en general por qué a las mujeres de color, libres o esclavas, se las consideraba sin honor, o con poco honor —ya que era la esclavitud la raíz del sistema de estratificación cubano y de la prohibición de matrimonios interraciales—, la esclavitud explica también, de un modo más inmediato, la « inmoralidad » de las mujeres esclavas. Una de las maneras de obtener la libertad era mediante la « coartación », que consistía en la compra de su libertad por el propio esclavo, a plazos como quien dice. El esclavo o esclava debía pagar a su amo una cuota inicial de 25 a 50 pesos, y completaba lo que faltaba a medida que pudiera. El amo debía obligatoriamente aceptar ese pago. En un informe del Consejo de Indias de 1788 se describe los métodos a que recurrían las mujeres esclavas para ganar el dinero necesario, como « no siempre los más lícitos y honestos, dando muchas veces lugar a que los abrazasen el deseo de conseguir la libertad y la permisión de poder facilitarla poco a poco por medio de la coartación, por manera que esta permisión ordenada a proporcionar más cómodamente aquel beneficio, venía a servir de pretexto y aun de impulso para que a las veces se echase mano de arbitrios reprobados y pecaminosos para coartarse con conocido daño de las conciencias de las mismas esclavas y de sus cómplices en el pecado [...] »⁸⁵ La prostitución era pues una de las maneras con que las esclavas podían adquirir los medios para comprar su libertad. Eso tal vez explica la proporción algo mayor de mujeres de color libres que de hombres. Adquirían su libertad mediante la venta de su honor.

No sólo las esclavas sabían de la demanda de sus servicios sexuales : también lo sabían sus dueños. Ya en 1659, el gobernador de Cuba intentó reprimir ese abuso : « Obligué a los dueños de las negras y mulatas, a que las tuviesen dentro de sus casas y no las diesen permisión para vivir fuera de ellas, ni ir a los ingenios y corrales, que la daban con facilidad y gusto, porque estas esclavas daban así a sus amos jornales muy ventajosos a los que ganaban en esta ciudad, y para ganarlos era preciso que fuese con ofensa de Dios, así por lo que ellas obraban, como por lo que hurtaban los negros a sus amos para dar satisfacción a estas mujeres. »⁸⁶ Siempre hubo más esclavos que esclavas, y es muy probable que los esclavos hicieran todo lo que fuera necesario para lograr los servicios de una mujer : eso, además del « pecado », preocupaba a las autoridades.

Otra posibilidad de ganar su libertad sacrificando su honor la tenían las esclavas que lograban probar que sus amos las habían desflorado. Así, en 1862, la mulata Juana Sánchez pide su « carta de libertad » acusando

84. ANC, GSC, Leg. 912/31671. Nótese aquí la diferencia entre « color legal » y « color real ».

85. CDFS, III : 2. p. 634.

86. Francisco Figueras : *Cuba y su evolución colonial*, La Habana, 1907, p. 279.

a su amo de haberla seducido y de ser el padre del hijo que espera⁸⁷. Sin embargo, no he encontrado evidencia alguna que demuestre que en esos años la legislación estableciera tal derecho. Pero existiendo alguna petición esporádica, podemos pensar que al menos la creencia existía, y eso es lo que importa a nuestros fines. Así, otra esclava demanda la libertad, de su amo, un cura, con quien dice que ha vivido veinte años, porque según ella se la había prometido al dejarla encinta⁸⁸. Eso ocurrió en 1873. Cuando la esclavitud, tras 1880, fue sustituida por un periodo de ocho años de « patronato », los lazos quedaban disueltos si se abusaba sexualmente de las patrocinadas, al inducir las, por ejemplo, a la prostitución⁸⁹. Aunque las esclavas, por regla general, no ganaban probablemente la libertad a través de relaciones sexuales con sus amos, por lo menos podían esperar que a los frutos de esas relaciones se les diera la libertad y, por lo menos, esos frutos serían pardos en vez de morenos.

Como resumen del análisis precedente, podemos concluir que el gran aprecio por el honor de las mujeres aparece sobre todo como un instrumento para lograr la endogamia de clase en una sociedad jerárquica, más que como un elemento de la moralidad católica, mientras que el donjuanismo o machismo, la agresividad sexual masculina, el complemento necesario del aprecio por la virginidad, resulta ser un elemento derivado, secundario, de este sistema de valores. Nur Yalman insiste en lo mismo en un artículo sobre la pureza de las mujeres en las castas de Ceilán y Malabar donde busca una explicación de la costumbre del casamiento anterior a la pubertad fundada en las características estructurales del sistema de castas: **« It is through women (and not men) that the purity of the caste-community is ensured and preserved. It is mainly through women of the group that blood and purity is perpetuated. »**⁹⁰ Yalman cita un refrán ceilanés: « El honor de los hombres se conserva a través de sus mujeres. » En Cuba, como un corolario del papel central que juega el honor de las mujeres, la conducta sexual del hombre tiene una importancia estructural secundaria. Aunque la hipergamia no siempre fue tolerada, la hipergenación, esto es la procreación de hijos por un hombre de clase alta y una mujer de clase baja fuera del matrimonio, sí lo fue. Esas uniones debían necesariamente carecer de sanción legal, pues su honor-preeminencia prohibía a los hombres formalizarlas mediante el matrimonio. Así, un blanco a quien el párroco exhortaba a casarse con su concubina, protestó « que si bien tiene relaciones con ella éstas ni han sido ni pueden ser suficientes para casarse con ella en atención a la inmensa distancia de clase [...] a más de no ser necesario porque ni la misma morena lo pretende ni quiere

87. ANC, GSC, Leg. 954/33696.

88. ANC, Misc., Leg. 3705/Ao.

89. A.F. Corwin: *Spain and the Abolition of Slavery in Cuba 1817-1886*, Austin y Londres, 1967, p. 246.

90. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, vol. 93, part. I, enero-junio de 1983, p. 41.

casarse [...] »⁹¹ Es comprensible, bajo estas circunstancias, que ella no haya pensado en el matrimonio. De la misma manera otro blanco se negó a intentar formalizar su unión por medio del matrimonio puesto que « no está en el caso de hacerlo en virtud de la desigualdad que hay entre él y su concubina [...] »⁹²

Esa opinión venía reforzada, por otro lado, por la aspiración de las mujeres de clase baja, específicamente de color, de hacer avanzar socialmente sus familias mediante el blanqueamiento, según el refrán ya citado « mejor querida de un blanco que mujer de un negro ». Si a eso añadimos el impacto que la esclavitud tenía en la conciencia de las mujeres de color, a través de sus consecuencias en la prostitución para adquirir la libertad y en los amancebamientos con sus amos, entonces es totalmente comprensible que haya refranes tales como el también citado ya, « no hay tamarindo dulce ni mulata señorita ». En cuanto a los hombres de color, la falta de honor de sus mujeres menoscabó severamente su posición de guardianes de ese honor y trajo como consecuencia su propia despreocupación en materias de honor sexual. Es significativa la observación que se le atribuyó a un pardo, de que « tenía ganas de que viniera la insurrección a este pueblo para poder gozar de muchas niñas blancas »⁹³. Es oportuno recordar aquí las narraciones de Eldrige Cleaver sobre cómo llegó a convertirse en violador de blancas. Aun si esas palabras nunca salieron de la boca de ese pardo, los blancos que creyeron oírlas sabían bien cuáles eran las frustraciones que los hombres de color debían sentir. Aunque, como hemos visto, la gente de color compartía al ideal de la virginidad y el ideal del matrimonio, las circunstancias en que sus vidas transcurrían llevaron en su caso a una moralidad más relajada, que daba menos importancia al honor femenino. Es en esa « corrupción », producto de la estructura social, donde hay que buscar la causa de las formas familiares entre la gente de color, donde como queda dicho el concubinato era, entre los libres, tan frecuente como el matrimonio (entre blancos, 10 % de las uniones eran concubinarias, entre la gente de color libre el 50 %, entre los esclavos, el 80 %, a juzgar por las cifras de ilegitimidad). La tradición perdura aún, aunque la Revolución hace ahora campañas de « matrimonios colectivos » —pero por otro lado, al desaparecer las clases sociales y la institución de la herencia, sería lógico esperar ahora menos matrimonios, por razones que son estrictamente las opuestas a las existentes en el siglo XIX. Hemos aludido ya a la matrifocalidad, otra de las características de la familia afroamericana. En nuestra opinión, es en las tradiciones que provienen de aquella estructura social donde hay que buscar razones para explicar esas formas familiares: no tanto, quizá, en la estructura agraria —si se trata de plantaciones con obreros migratorios o de economías campesinas estables e independientes—, y mucho menos en la « cultura

91. ANC, GSC, Leg. 921/32118.

92. ANC, GSC, Leg. 920/32052.

93. ANC, Misc., Leg. 2669/An.

de la pobreza », uno de cuyos pretendidos rasgos sería la falta de sanción legal de las uniones : el enfoque « cultural » no explica, sólo describe. Hay varios estudios sociológicos sobre el concepto del honor realizados por antropólogos sociales en comunidades campesinas del Mediterráneo. Algunos de estos estudios han sido publicados en un volumen compilado por J.G. Peristiany⁹⁴ que incluye entre otros ensayos de Pitt-Rivers sobre Andalucía, de Campbell sobre Grecia, de Caro Baroja sobre historia española. En estas comunidades el papel desempeñado por el honor se parece el que tenía en Cuba. La buena reputación de las mujeres es prerequisite del honor familiar. Los hombres son considerados los guardianes del honor femenino. La interacción entre las distintas familias consiste en una constante rivalidad en busca de honor. Peristiany, en su introducción al volumen citado sugiere la siguiente explicación de este sistema de valores, compartida también por Pitt-Rivers : « Honour and shame are the constant preoccupation of individuals in small scale, exclusive societies where face-to-face personal, as opposed to anonymous, relations are of paramount importance. »⁹⁵ Se ha visto que en Cuba en el siglo XIX existía una correlación entre clase social y honor. También en casi todos esos estudios hay indicios de la existencia de algún tipo de jerarquía social. Por ejemplo, Pitt-Rivers, en su ensayo, habla de un padre que se oponía, aun después del rapto, a admitir al raptor como yerno por ser éste socialmente inferior⁹⁶ ; lo cual no le impide a Pitt-Rivers, en este ensayo y en sus publicaciones anteriores sobre Andalucía, hablar de un así llamado « universo moral ». Y según un epigrama atribuido al conde de Villamediana y citado por Caro Baroja, en España

Tienen los que pobres son
la ventura del cabrito.
O morir cuando chiquito
o llegar a ser cabrón⁹⁷.

O, como dice en el **Romance de la Guirnalda** una muchacha que perdió su honor a manos de un caballero, « que más vale buen amigo que no ser mal maridada ». Es decir, también en estos casos se da la correlación entre posición social y honor, consecuencia de un orden social jerárquico. Ahora bien, a nuestro parecer el rasgo distintivo de estas comunidades que puede explicar esa evaluación del honor no es su tamaño reducido o el grado de anonimidad de sus relaciones interpersonales —también en Cuba en el siglo XIX la opinión pública era el árbitro de la conducta personal—, sino que es la forma imperante de atribución de **status** social. En Cuba, y aparentemente también en esas otras comunidades, el nacimiento más que

94. Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society. Londres, 1965. Véase la crítica de A. Beteille (ed), *Social Inequality*, Penguin Books, 1969, p. 373.

95. J.G. Peristiany (ed.), op. cit., p. 11.

96. Op. cit., p. 49.

97. Op. cit., p. 120.

el mérito personal definía la posición de cada individuo dentro de la jerarquía social. En consecuencia, el prestigio familiar y el de sus miembros estaban estrechamente vinculados. Y debido a esta interrelación, el comportamiento individual, y especialmente el de las mujeres, por las razones expuestas, era motivo de tanta ansiedad por parte de la familia entera. Además, el principio hereditario como determinante del **status** social garantizaba la inmovilidad social, que es el prerrequisito de un orden social jerárquico. En cambio, en una situación donde el mérito individual define la posición social, es decir el individuo vive para sí solo, aislado, su conducta es irrelevante con respecto al prestigio de sus parientes.

Matrimonio y socialismo

Puede decirse entonces que el matrimonio es un corolario de la estructura social, un principio secundario que obedece a las exigencias de ésta más bien que siendo la causa de su existencia⁹⁸. Este interrelacionamiento de estructura social y tipo de unión conyugal —matrimonio o concubinato— significa que una modificación en la primera automáticamente debería conllevar una modificación en la segunda. Alejandra Kollontai, la militante bolchevique, tenía plena conciencia de esta interdependencia al sustentar en 1919 que bajo el nuevo orden social igualitario, al ser abolida la propiedad privada y la herencia, el matrimonio perdía su razón de ser⁹⁹. Dado el marcado igualitarismo que viene caracterizando la revolución cubana, podía suponerse que la institución del matrimonio como mecanismo perpetuador de desigualdades sociales estuviera condenado a desaparecer. Sin embargo, la política oficial ha sido más bien la contraria. Desde los primeros años de la revolución, y aún ahora, el gobierno revolucionario viene realizando lo que ha llamado « matrimonios colectivos », casando legalmente a quienes hasta entonces habían vivido « arrimados » o « aplazados » —como se dice en Oriente. Según las cifras del Censo, en 1953 las uniones consensuales llegaban aún a un tercio de todas las uniones conyugales. El gobierno revolucionario al optar por legalizar las uniones libres continúa la política iniciada en la década de 1940, cuando según la legislación de seguridad social implantada entonces las concubinas estables obtuvieron igualdad de derechos con las mujeres casadas legalmente, y desde cuando según la Constitución de 1940 las uniones consensuales podían ser equiparadas legalmente al matrimonio.

Cabe argumentar que esa política de « matrimonios colectivos » tenía su origen en el desasosiego de los dirigentes revolucionarios de origen de clase media frente a la « inmoralidad » de la clase baja. Sin embargo, en 1968, Fidel Castro ridiculizó a quienes habían creado el rumor de que el

98. Dumont y Yalman llegan a la misma conclusión. Louis Dumont: *Homo Hierarchicus. Essai sur le système des castes*, París, 1966. Nur Yalman: « On the Purity of Women in the Castes of Ceylon and Malabar », *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, vol. 93, part. I, enero-junio de 1963.

99. E.H. Carr: *Socialism in one Country*, I, Penguin Books, 1969, p. 41.

gobierno subiría la edad legal del matrimonio para así reducir la tasa de natalidad, indicando que en Cuba al pueblo nunca le había hecho falta casarse legalmente para tener hijos¹⁰⁰. Parece por tanto más bien que esa política matrimonial —la realización de « matrimonios colectivos » y la creación de « palacios de los matrimonios », donde las jóvenes parejas pueden casarse con todo el lujo de un matrimonio burgués— surgió del deseo de hacer justicia social acompañado de un desconocimiento del papel estructural del matrimonio. De un modo un tanto vago los dirigentes revolucionarios tenían conciencia de que la existencia paralela del matrimonio legal y de la unión consensual era el producto de la desigualdad social. Los pobres, y especialmente los negros pobres, no se casaban en Cuba. El gobierno optó entonces, como medida reivindicadora, por hacer asequible a esta clase baja los símbolos de status hasta entonces reservados a las clases media y alta. De esta manera, el gobierno revolucionario, aunque sin enfocar de un modo radical la cuestión del matrimonio y de los valores sexuales, en los ojos de la clase baja en cierto sentido ha hecho justicia. No cabe duda que sobre todo las mujeres que hasta entonces habían vivido en unión consensual están en favor de los matrimonios colectivos. En la pequeña aldea de la Sierra Maestra, donde pasamos dos meses, tanto el presidente de la asociación campesina, como uno de los jueces del tribunal popular y el individuo que hacía de enlace con el Partido, estaban pensando en casarse legalmente con las mujeres con las cuales convivían establemente desde hacía años, y con quienes ya habían tenido varios hijos. Y repetidas veces mujeres se nos acercaban para preguntar si yo formaba parte de la campaña de « matrimonios colectivos » enfatizando que estaban ansiosas que la campaña llegase a su pueblo. No obstante, a largo plazo, en una sociedad igualitaria, el matrimonio como institución reguladora de la posición social del individuo dentro de la sociedad, y del traspaso de la propiedad, se vuelve obsoleto. Por tanto, esos « enemigos del pueblo » que en 1968 clamaban que el socialismo atacaba a la institución familiar, parecían haber entendido mejor el significado verdadero de un socialismo realmente igualitario que aquel funcionario que replicaba a esa acusación argumentando que el esfuerzo del gobierno por legalizar las uniones concubinarias precisamente probaba lo contrario¹⁰¹.

Los valores tradicionales todavía persisten. El machismo aún es fuerte. El aumento de la tasa de divorcios se debe en parte a que la acelerada emancipación de la mujer cubana debido a su integración a la producción no se reconcilia con el tenaz autoritarismo de los hombres. Las campañas contra los homosexuales seguramente también en parte surgieron de estos valores. Concomitantemente la virginidad continúa gozando de aprecio. Aún hay, por tanto, raptos con vistas al matrimonio aunque hay indicios de

100. Discurso del 13 de marzo de 1968.

101. *Granma*, 15 de enero de 1968, p. 3.

que están disminuyendo¹⁰². Y también perdura la tradición de la unión consensual a pesar de las campañas de la revolución por implantar el matrimonio legal. Y, en realidad, al desaparecer las clases sociales y la institución de la herencia, sería lógico suponer que los matrimonios legales disminuyeran más bien que aumentaran, y eso por razones que son estrictamente las opuestas a las de siglo XIX.

102. Datos del forum sobre orden público, *Granma* semanal, 11 de mayo de 1969.

Cuba : una revolución en marcha

Suplemento 1967 de Cuadernos de Ruedo ibérico

Los orígenes. La guerra revolucionaria. El castroismo : teoría y praxis de la revolución cubana. Un socialismo en construcción. El nuevo pensamiento cubano. El arte y la literatura. Testimonios sobre la revolución cubana.

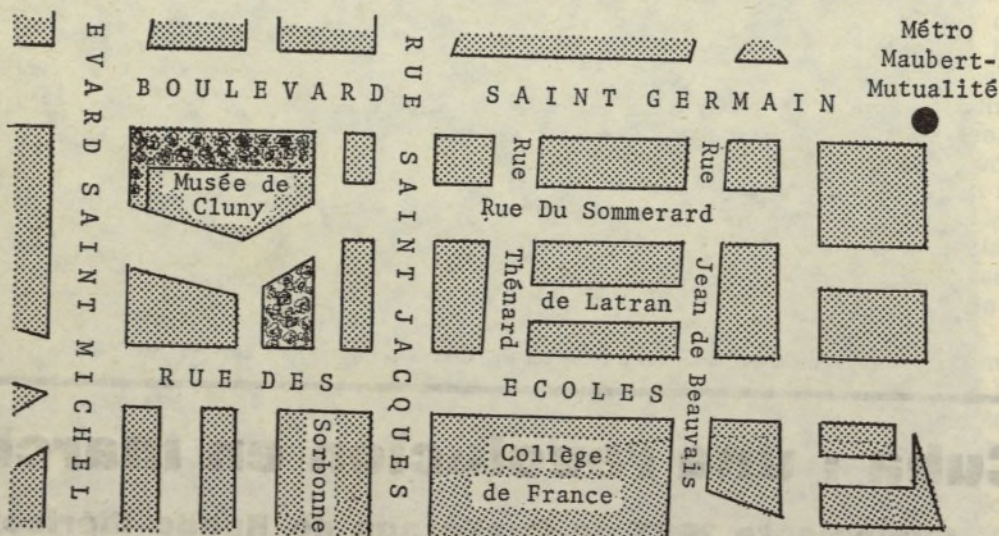
528 páginas 12 páginas ilustradas fuera de texto 106 ilustraciones 48 F

Editions Ruedo ibérico

ruedo ibérico

Librería

Colección España contemporánea • Biblioteca de cultura socialista • Colección el viejo topo • Cuadernos de Ruedo ibérico • Suplementos de Cuadernos de Ruedo ibérico • Serie menor •



Libros de las Editoriales Grijalbo • Era • Siglo XXI • Cajica • Cuadernos Americanos • Joaquín Mortiz • Palestra • Siglo Ilustrado • Moncloa • Distribuidora y Editora Argentina • Universidad Central de Venezuela • Instituto del Libro de Cuba Oveja negra • Oasis • Siglo XX y otras •

6 rue de Latran
Paris 5

Téléphone : 325 56-49
Métro : Maubert-Mutualité

Ayuntamiento de Madrid

Fernando Claudín

La crisis del movimiento comunista

I

De la Komintern al Kominform

La crisis de la Internacional Comunista ● La disolución ● La crisis teórica ● ¿Capitalismo agonizante? ● Stalin revisionista, o el socialismo integral en un solo país ● El monolitismo ● Transplantación del modelo soviético ● Ultracentrismo y rusificación ● La crisis política ● La experiencia alemana ● Insurrecciones prematuras y expulsiones premonitórias ● Socialdemocracia = socialfascismo = enemigo principal ● La experiencia frentista ● « Hay que saber terminar una huelga » (el 36 francés) ● La revolución inoportuna (España 1936-1939) ● La experiencia colonial ● Revolución china ● El apogeo del estalinismo ● Revolución y esferas de influencia ● La revolución frustrada (Francia) ● La revolución frustrada (Italia) ● La revolución lograda (Yugoslavia) y la revolución estrangulada (Grecia) ● De la « gran alianza » a los « dos campos » ● El reparto de las « esferas de influencia » ● El naufragio del oportunismo estaliniano ● El Kominform ● Las revoluciones del glacis ● Retroceso general del movimiento comunista en Occidente ● La brecha yugoslava ● Instauración de la dictadura burocrática y policiaca en el glacis ● Los procesos ● El relevo oriental ● Revolución china y « gran alianza » ● Guerra revolucionaria o « unión nacional » ● El espectro de un « titismo chino » ● Nuevo equilibrio mundial ● Los « combatientes de la paz » ● Empate en la guerra fría

704 páginas

45 F

Ruedo ibérico

6 rue de Latran Paris 5
Ayuntamiento de Madrid

En el sumario de este fascículo :

Pumaruna-Lets : Perú : ¿Revolución socialista o caricatura de revolución ●●● Roberto Mesa : Ponencia presentada al Second International Symposium on Palestine : La resistencia palestina y los movimientos de liberación nacional ● ● ● Verena Martínez Alier : Virginidad y machismo : El honor de la mujer en Cuba en el siglo XIX.

En los próximos números :

De un libro inédito : Epílogo para itinerantes, revolucionarios de salón y otros paseantes en Corte

Hilario Eslava : Crónica del país del caos

Rafael Lozano : Notas sobre la pornocrítica

En la Plaza de Oriente. Fotos Fotos-Pizzi y textos de Francisco Franco

***** El año X de las Comisiones Obreras. Historia y análisis de un proceso de degradación política**

Xavier Domingo : Erótica hispánica

Manuel Durán : Cuatro poemas

Dibujos de Vasco

Prix : 7 F